Resistencias sociales y formaciones sindicales en Argentina y Francia	Titulo
Fernández, Arturo - Compilador/a o Editor/a; Ventrici, Patricia - Compilador/a o Editor/a; Calderón, José-Angel - Compilador/a o Editor/a; Montes Cató, Juan - Compilador/a o Editor/a; Calderón, José-Angel - Autor/a; Cohen, Valérie - Autor/a; Duhalde, Santiago - Autor/a; Picchetti, Valentina - Autor/a; Ventrici, Patricia - Autor/a; Fernández, Arturo - Autor/a; Muller, Séverin - Autor/a; Montes Cató, Juan - Autor/a; Delfini, Marcelo - Autor/a; Drolas, Ana - Autor/a; Bosisio, Walter - Autor/a; Spinosa, Lucas - Autor/a; Fuentes Lorca, Lissette - Autor/a; López Calle, Pablo - Autor/a;	Autor(es)
Buenos Aires	Lugar
CEIL-CONICET	Editorial/Editor
2016	Fecha
	Colección
Movilización social; Sindicatos; Resistencia social; Trabajadores; Estado; Argentina; Francia;	Temas
Libro	Tipo de documento
"http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/ceil-conicet/20171027050905/pdf_1597.pdf"	URL
Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivadas CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
http://biblioteca.clacso.edu.ar

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)
Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)
www.clacso.edu.ar

CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Latin American Council of Social Sciences

Resistencias sociales y formaciones sindicales en Argentina y Francia

Arturo Fernández,
Patricia Ventrici,
José Calderón y
Juan S. Montes Cató
(Coord.)

proyectos

CEIL
CONICET
libros

Resistencias sociales y formaciones sindicales en Argentina y Francia

Arturo Fernández, Patricia Ventrici,
José Calderón y Juan S. Montes Cató (Coord.),

C E I L
CONICET
libros

Resistencias sociales y formaciones sindicales en Argentina y Francia / Arturo Fernández ... [et al.]. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Centro de Estudios e Investigaciones Laborales - CEIL-CONICET, 2016.
Libro digital, PDF - (Proyectos ; 1)

Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-46124-1-0

1. Sindicalismo. 2. Resistencia. 3. Argentina. I. Fernández, Arturo
CDD 331.8

Director: Guillermo Neiman
Equipo editorial: Irene Brousse, Anabella Bustos, Graciela Torrecillas

Colección Proyectos
Proyectos es una colección de CEIL/libros destinada a difundir en un formato abreviado los resultados de proyectos de investigación del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET). Los volúmenes que forman parte de esta Colección son evaluados por especialistas en las temáticas específicas abordadas en cada uno de los textos.

Proyecto ECOS-Sud «Transformaciones sociales y sindicalismo: un estudio comparado entre Argentina y Francia sobre las prácticas y estrategias sindicales»
Programa de Cooperación Internacional MINCYT-Gobierno de Francia 2010-2013

© CEIL, 2016
Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Saavedra 15 4° piso
C1083ACA Buenos Aires, Argentina
www.ceil-conicet.gov.ar

Contenido

Introducción 6

I / La resistencia: una categoría de análisis plástica y heurística / *José Angel Calderón y Valérie Cohen* 10

1. Introducción 10
2. Un objeto de estudio nuevamente atractivo 11
3. Una categoría de análisis plástica... 14
4. ...que permite revelar realidades ocultas 15
5. Transgredir las explicaciones sociológicas dominantes 17
6. Una reflexión sobre las transformaciones sociales 19
7. Una categoría que describe y que inscribe 21
Bibliografía 23

II / Construcciones políticas alternativas. Los trabajadores frente a la ofensiva neoliberal / *Santiago Duhalde, Valentina Picchetti y Patricia Ventrici* 26

1. Introducción 26
2. El neoliberalismo como ajuste y desocupación 28
3. Las organizaciones de los trabajadores desocupados: la resistencia desde los márgenes 34
4. Trabajadores estatales: un sindicalismo alternativo en momentos de ajuste estructural 38
5. La resistencia al neoliberalismo en el espacio de trabajo: la construcción gremial en el caso del subterráneo de Buenos Aires 43
6. Conclusiones 48
Bibliografía 50

III / Estado y proyeccion política de los sindicatos en la Argentina / *Arturo Fernández* 53

1. Introducción 53
2. El surgimiento de prácticas y tendencias sindicales peronistas en la CGT: participacionismo, negociación, confrontación y combatividad 54
3. Los sindicatos peronistas y el gobierno neo-liberal del Presidente Carlos Menem 61
4. Los sindicatos peronistas y los gobiernos de los Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner 65
5. Conclusiones 68
Bibliografía 70

IV / La resistencia en la práctica. Memorias de la movilización de los asalariados de la sub-contratación industrial / *Séverin Muller* 71
1. Introducción 71
2. El pasaje a la sub-contratación y la fase de la acción sindical 73
3. Los obreros. Toma de conciencia colectiva de las capacidades de perjuicio de ciertas prácticas 76
4. Los cuadros dirigentes. La puesta en cuestión de la resistencia de los sectores dominantes 79
5. Conclusión 82
Bibliografía 84
V / Clase trabajadora, territorio y recomposición de la condición obrera / *Juan Montes Cató, Marcelo Delfini, Ana Drolas, Walter Bosisio, Lucas Spinosa y Lissette Fuentes* 86
1. Introducción 86
2. Territorio y segregación urbana 87
3. Entramado urbano en un barrio marginal: las marcas de la degradación del territorio y su recomposición a partir de la redistribución del ingreso 90
4. Movilización y lucha política 96
5. Conclusión 103
Bibliografía 105
Anexo: Relevamiento y Metodología 107
VI / Por una sociologia contra los rigores del destino / *José Ángel Calderón y Pablo López Calle*109
Bibliografía 118
Post-scríptum 119
En Argentina: de la heterodoxia a la ofensiva conservadora 119
En Francia: de la contestación a la democracia 121

INTRODUCCIÓN

Esta publicación se enmarca en un largo proceso de colaboración entre los equipos de investigación del Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSE-CNRS) radicado en la Université de Lille 1 y del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET). El objetivo manifiesto del intercambio fue investigar y reflexionar de manera colectiva sobre las formas que asume la resistencia en el marco del capitalismo contemporáneo, observando las rearticulaciones operadas en las organizaciones sindicales, sociales y políticas en la Argentina y Francia. Para ello hemos estado atentos a nuevas expresiones y construcciones de colectivos laborales que buscan enfrentar las políticas neoliberales o incidir en las políticas públicas allí donde han surgido gobiernos que recuperan alguna de las banderas de las trabajadoras y trabajadores. Nos ha interesado indagar las instancias formalizadas de movilización como también aquellas menos visibles, ocultas, que nos proveen indicios sobre los cambios que se están produciendo en el conflicto laboral y las recomposiciones obreras.

El camino de trabajo conjunto se fue jalonando en numerosas actividades organizadas por ambos equipos que cristalizaron en congresos, seminarios, talleres, estadías doctorales y post-doctorales, charlas académicas, intervenciones públicas, participación en medios masivos de comunicación y trabajo de campo[1]. La perspectiva epistemológica y política estuvo guiada por tres principios que fueron sumamente fructíferos en el momento de construir un sendero común de indagación. Apoyarnos en la perspectiva de la sociología crítica contribuyó a la discusión teórica, sobre todo en vistas de las tradiciones de investigación específicas dentro de este amplio universo; la certeza de que toda investigación parte de una praxis que requiere ser reconocida y en la cual los compromisos y posicionamientos políticos lejos de empobrecerla la enriquecen en el constante ejercicio de explicitar los puntos de partida; y la relación dialéctica entre la empiria y la teoría como ejercicio que puede ponerse en acto recorriendo territorios, intercambiando con los sujetos

[1] Los primeros contactos individuales se desarrollaron a principios del año 2005, maduraron en los años siguientes y lograron consolidarse con la financiación del proyecto ECOS-Sud «Transformaciones sociales y sindicalismo: un estudio comparado entre Argentina y Francia sobre las prácticas y estrategias sindicales» en el marco del Programa de Cooperación Internacional MINCYT-Gobierno de Francia 2010-2013.

sociales y comprendiendo los contextos de acción de las organizaciones (este último aspecto nos ha conducido a un compromiso militante con muchas de las luchas sostenidas por las organizaciones sociales y sindicales estudiadas).

Si bien los marcos socio-económicos de ambos países son diferentes, en particular por el lugar que ocupan en la división internacional del trabajo y por su ubicación en relación con núcleo central del capitalismo o de su periferia, existen procesos colectivos y en particular experiencias reivindicativas que los emparentan y que nos permiten desarrollar reflexiones que pueden ir más allá de las particularidades nacionales. Esos procesos están vinculados con la ofensiva capitalista sobre las conquistas de los trabajadores y los derechos sociales, las contradicciones que generan los flujos y reflujos políticos y la subjetivación expresada en culturas de resistencia, de conflicto y de organización. En este campo de abordaje, el texto que aquí presentamos es heterogéneo en el registro de reflexión, en algunos casos de corte netamente teórico, en otros empírico e incluso histórico. Precisamente la riqueza del libro, además de constituir un primer ejercicio de condensación colectiva, es el de observar cómo algunos de los procesos que venimos analizando están imbricados en tendencias más amplias, más allá de las particularidades sectoriales o territoriales. De manera sucinta, nos preguntamos: cuál es la relación entre las diversas luchas que se vienen desarrollando en diversas latitudes, cómo comprenderlas en una escala de análisis que vincule lo micro y lo macro y simultáneamente que las asocie a una reflexión teórica apoyada en las experiencias empíricas.

En primera instancia se presenta el artículo "Resistencia: una categoría de análisis plástica y heurística" de José Calderón y Valérie Cohen. Se aborda en el mismo el concepto de resistencia en cuanto concepto polifónico sin perder de vista y discutir su potencialidad teórica a partir de que devela un conjunto de relaciones entre los dominadores y dominados, procesos ocultos por la teoría social y por las clases dominantes, y también transformaciones sociales más amplias. Este artículo de apertura marca la búsqueda y la tensión que recorren transversalmente los distintos trabajos y estructura una posible interpretación global de la propuesta. Se trata de una interpelación teórica-empírica a la categoría de "resistencias" que, en un mismo movimiento propone la indispensable labor sociológica de dar cuenta, visibilizar y analizar las luchas sociales que configuran lo social contemporáneo junto con una necesaria reflexión sobre las potencialidades y los sesgos que la propia –e ineludible- posición teórica-política imprime a la producción de un conocimiento que será siempre, como sostienen los autores, parcial, situado espacio-temporalmente y esencialmente conflictivo.

En esta clave, los artículos que componen el libro ensayan tácitamente un diálogo dinámico entre el análisis de experiencias concretas y multiformes de las resistencias en la Argentina y Francia en los últimos años y la reflexión sobre la naturaleza propia de la práctica sociológica en ese ejercicio de abordaje, junto con sus implicancias en el plano del conocimiento y la intervención política.

En ese derrotero y bajo las coordenadas teóricas planteadas anteriormente, los artículos siguientes se abocan a estudiar casos empíricos de experiencias diversas en diferentes contextos, protagonizadas por los distintos sujetos sociales que componen, aquí y allá, el heterogéneo campo de los sectores populares.

Así, el texto de Santiago Duhalde, Patricia Ventrici y Valentina Picchetti, "Construcciones políticas alternativas. Los trabajadores frente a la ofensiva neoliberal" analiza de manera articulada tres casos de organizaciones de trabajadores argentinos que no cedieron frente al avance del neoliberalismo en los años 1990, sino que, al contrario, se organizaron y lograron resistir y en algunos casos contrarrestar la ofensiva política de aquella década. Se trata de tres experiencias clave para entender este proceso histórico. En primer lugar, la organización y acción de los trabajadores desocupados, en segundo lugar, la construcción de un sindicalismo alternativo por parte de los empleados del Estado, en un contexto de fuerte embestida contra este último; y finalmente, el proceso de organización política de un grupo de trabajadores del transporte, que fue y sigue siendo testimonio insoslayable para todos aquellos obreros que deseen organizarse y luchar en un contexto de repliegue sindical. En definitiva, este artículo muestra las construcciones políticas de las que son capaces los trabajadores aun en momentos de pérdida o ausencia de referencias identitarias e institucionales.

En una misma línea temática, en "Estado y proyección política de los sindicatos en la argentina" Arturo Fernández caracteriza y compara desde el punto de vista de su política institucional dos períodos contrastantes de un actor político históricamente central de la conflictividad social en Argentina como son las formaciones sindicales argentinas. Su análisis hace hincapié en las limitaciones y contradicciones que enfrentaron los sindicatos en la etapa kirchnerista, cuando demostraron que a pesar de las teorías que postulaban su desaparición, había recuperado parte del poder perdido pero asentándose al mismo tiempo en soportes diferentes y recuperando algunos tradicionales.

En el capítulo 4 "La resistencia en la práctica. Memorias de la movilización de los asalariados de la sub-contratación industrial, Séverin Muller, se adentra en

el examen de una dimensión micro de las prácticas resistentes, situadas en el espacio de trabajo y en estrecha vinculación con los efectos que producen las formas renovadas de organización del trabajo. Este análisis enfoca puntualmente las consecuencias de la expansión de las modalidades de subcontratación en la capacidad de organización colectiva e identifica de qué manera la resistencia emerge bajo otras formas menos visibilizadas, específicamente en la industria farmacéutica. En ese marco, analiza la relación entre la resistencia y las pautas productivistas de la calidad en el proceso de trabajo.

El siguiente capítulo, de Juan Montes Cató, Marcelo Delfini, Ana Drolas, Walter Bosisio y Lucas Spinosa, "Clase trabajadora, territorio y recomposición de la condición obrera", recupera también un estudio de caso, pero ya no centrado en una actividad productiva o experiencia sindical, sino que la perspectiva se traslada al territorio del barrio. Este trabajo analiza los cambios y continuidades que se desarrollaron en una barriada popular del partido de La Matanza entre los años 2003 y 2013, tanto en lo referido al mercado de trabajo como a las condiciones de vida de sus residentes. Los autores enfatizan la idea de que el ascenso en las condiciones materiales (fundamentalmente la recuperación de las relaciones salariales) se produce en un contexto de acción política que imbrica de manera novedosa distintas tradiciones de lucha provenientes del campo sindical y de las organizaciones territoriales, tendientes a repolitizar los espacios públicos. La resistencia se despliega, en esta experiencia, en otra dimensión, incorporando al libro una necesaria mirada más allá de los espacios de trabajo.

El último capítulo, luego de los recorridos por los distintos planos de los casos empíricos en los capítulos precedentes, retoma el nivel de reflexión teórica el texto "Por una sociología contra los rigores del destino" de José Calderón y Pablo López Calle, instala nuevas preguntas no sólo en torno a la problemática específica sino, fundamentalmente como una fuerte interrogación sobre el papel del sociólogo en el contexto de fuertes contradicciones que vive el capitalismo actual y que se manifiesta en múltiples y multiformes luchas sociales. Todo ello, se insiste una vez más, interpela el "hacer sociológico" para combatir el actual pesimismo de la sociología pero sin caer en viejos cantos de sirena que la ubiquen en la vanguardia de los procesos de resistencia.

I / LA RESISTENCIA: UNA CATEGORÍA DE ANÁLISIS PLÁSTICA Y HEURÍSTICA[1]

JOSÉ ANGEL CALDERÓN Y VALÉRIE COHEN

1. INTRODUCCIÓN

La alusión a las luchas del mundo social a partir de la noción de resistencia ha cobrado un cierto impulso en los últimos diez años, especialmente en el campo político y mediático francés y europeo. Las realidades designadas con este término son realmente numerosas y muy diversificadas: el movimiento social que atravesó el país contra la reforma de las jubilaciones de 2010; la gran marcha a París de los trabajadores del acero de la región de Lorena durante la campaña presidencial de 2012 que fue designada en los medios de comunicación como el último estertor de una "resistencia obrera" contra la política industrial francesa y europea; la multiplicación de las luchas contra los despidos en las industrias; el secuestro de dirigentes en las fábricas; las ocupaciones de las plazas públicas en Grecia; la "resistencia civil" contra los desalojos de los españoles afectados por el estallido de la burbuja inmobiliaria... Se podrían multiplicar los ejemplos de este uso masivo de la categoría en los medios de comunicación y en los discursos de los dirigentes sindicales y políticos, lo que muestra sin ambages un carácter elástico para nombrar prácticas de oposición muy diversas y heterogéneas. De hecho, incluso habría resistencias de "derechas", como la que se armó en 2013 en torno a organizaciones tradicionalistas francesas contra el matrimonio homosexual, y que también fue calificada como "resistencia cívica y ciudadana" por el derecho de los niños. Se podría decir que el uso de la categoría en estos campos busca más connotar que indicar, quedando la cuestión de los contornos, contenidos y horizontes de las prácticas de resistencia en un segundo plano.

En el campo científico el cuestionamiento de lo social en términos de resistencia también está retornando con fuerza. Si la sociología del trabajo

[1] Una versión preliminar en francés fue publicada en Francia en 2015: "Qu'est-ce que résister? Usages et enjeux d'une catégorie d'analyse sociologique", Lille, Presses Universitaires du Septentrion. Traducción: Santiago Duhalde. Corrección de estilo: José Calderón

materialista se renueva hoy con el análisis de las resistencias, es también mediantte este enfoque (a partir de la noción de *agency* importada del inglés) que el pensamiento posmoderno se reafirma en las ciencias sociales, enfatizando la centralidad de los actos de resistencia mediante *performances* de tipo cultural o de género principalmente (Sanna, 2006). Estas "*pratiques de soi*" según la conceptualización foucaltiana (2001) consisten en modificaciones pequeñas de prácticas convencionales o culturalmente hegemónicas que permiten generar nuevas formas de subjetivación. La posibilidad de la *agency*, comprendida como resistencia en potencia o en devenir, estaría así presente en cada individuo y en cada práctica inscrita socialmente. Lo que nos ha interpelado de estos enfoques es que la resistencia pierde entonces su dimensión colectiva, consistiendo entonces en prácticas activas, creativas, por las cuales los agentes podrían liberarse de su propia subjetividad y construir otra.

El uso extensivo de las resistencias, sus múltiples y a menudo contradictorias interpretaciones nos han conducido a una reflexión sobre las diferentes maneras de movilizar la categoría y sobre algunos desafíos que plantea su utilización, específicamente en relación con el análisis de las conductas en el mundo del trabajo. Entendemos éste en sentido amplio, incluyendo tanto el trabajo asalariado y por cuenta propia (o para-subordinado), como también el trabajo militante. Para ello nos apoyamos en una lectura crítica de una serie de textos de sociólogos y antropólogos franceses que fueron publicados en una pequeña compilación que editamos a inicios del 2015 sobre la cuestión de las resistencias.

2. Un objeto de estudio nuevamente atractivo

Nuestro interés por este objeto de estudio se inscribe, en principio, en un contexto científico marcado por las idas y venidas de las resistencias en el campo académico desde la década de 1960. Tema favorito durante los años 1970, las prácticas de oposición que se desarrollan en el mundo del trabajo, ya sean clandestinas o visibles, son ampliamente estudiadas a partir de sólidos trabajos de campo. Se puede decir que el descubrimiento de las resistencias inicia un nuevo paradigma en la sociología del trabajo (Calderón, 2008). Durante ese período, varios estudios demuestran la capacidad de los actores para modificar o transgredir las estructuras formales de la empresa. El control, redescubierto en los trabajos de Braverman (1973) o Freyssenet (1974), empieza a pensarse de manera dialéctica (Friedman, 1977; Edwards, 1979). La insubordinación obrera, así como sus límites o aún sus ambivalencias, son

reveladas a partir del descubrimiento de diversas prácticas: sabotaje, ausentismo laboral, robos, conflicto abierto, etc. La pregunta central es cómo interpretar estas prácticas, lo que tiene por objeto identificar lo que ellas aportan en los niveles científico y político. Algunos inscribirán estos cuestionamientos en una lectura de la evolución de los modelos productivos (Durand, 1978). Otros se interesarán más bien, a partir de una perspectiva más subjetiva, en el estudio de las prácticas y de las experiencias de trabajo, tratando de pensar la relación control-resistencia de manera no dual (Burawoy, 1979; Linhart y Linhart, 1984).

Desde 1980, los estudios sobre las resistencias obreras muesran un reflujo manifiesto, pero de modo más general la cuestión de los conflictos en el trabajo empieza a ser descuidada por el análisis sociológico y la ciencia política (Giraud, 2009). Las investigaciones comienzan a centrarse en la forma en que la modernización de las empresas (Linhart, 1994), junto con la aparición del desempleo estructural y la fragilización del estatuto salarial, han empezado a producir una desagregación del trabajador colectivo y una individualización de las relaciones laborales. Los enfoques críticos tienden a privilegiar el estudio del "consentimiento" o de la "cooperación forzada". La lectura de los determinantes estructurales toma así el relevo del análisis de las dinámicas de subjetivación y rebelión. Esto no quiere decir que los trabajadores han dejado de resistir al control patronal durante todo este periodo, el problema es que los discursos dominantes en la sociología las han invisibilizado o no las han reconocido como tales (Bouquin, 2006). El estudio de las resistencias se va a desplazar a los márgenes de la sociología, en particular a la sociología feminista de las relaciones de género, de tradición marxista, y en general podemos considerar, como veremos más adelante, que en periodos de reflujo de las movilizaciones sociales, los análisis en términos de resistencia se realizan principalmente en los márgenes dominados de la sociología o incluso en los márgenes del campo académico.

En Francia, en las décadas de 1980 y 1990, son más bien los conflictos que surgen por fuera de la esfera productiva los que llamarán la atención, especialmente de los politólogos. Desde esta disciplina, inscrita en otra tradición teórica, los investigadores se refieren principalmente a los conceptos de "movilización" o "acción colectiva", y se interesan menos por los procesos de formación de colectivos (cuya resistencia sorda constituiría una etapa en el paso a la lucha visible) que por los resortes y condiciones de movilización de los grupos "de bajos recursos". Por lo tanto, las resistencias suscitaron poco interés, más aún cuando éstas remiten, en este campo, a conductas consideradas más bien como individuales, no organizadas, cuando no se

confinan a la esfera de la infrapolítica. La obra colectiva, *Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes*, realizada bajo la dirección de Mounia Bennani-Chaïbri y de Olivier Fillieule (2003), que propone integrar el análisis de las resistencias dentro de la sociología de las movilizaciones, no tiene mucha repercusión. Su tentativa de hacer operativa esta noción suscita un débil entusiasmo, como lo muestra la ausencia de la definición "Resistencia" en el diccionario de sociología de los movimientos sociales, editado en 2009.

No fue sino hasta mediados de la década de 2000 que el análisis en términos de resistencia vuelve a penetrar el campo de las ciencias sociales, especialmente, de nuevo, para el análisis de los mundos del trabajo. En pocos años se publicaron varios libros sobre este tema. Su mérito consiste en una nueva demostración de la vitalidad y la variedad de formas de protesta cotidianas que a menudo han sido olvidadas o negadas por los estudios de las décadas anteriores. Las preguntas se refieren a la actualidad y al sentido de las prácticas de resistencia, a las capacidades de acción colectiva de los trabajadores y de los que los representan, y a las posibilidades de construir alternativas. Así, el libro editado por Stephen Bouquin (2008) cuestiona la idea de un consentimiento generalizado de los asalariados, mostrando la existencia de líneas de resistencia en el trabajo. Sophie Béroud y Paul Bouffartigue van a coordinar también un libro colectivo en que se plantea centralmente la capacidad de organización colectiva de grupos precarizados frente a la inseguridad social (2009). Las modalidades y posibilidades abiertas para las categorías periféricas del asalariado están también, pero desde un ángulo diferente, abordadas en el libro dirigido por Patrick Cingolani (2012). Si bien hace una década los cambios en el empleo y el trabajo parecían incompatibles con el desarrollo de formas de resistencia por parte de los trabajadores, estas últimas se convierten poco a poco en elementos que permiten repensar las prácticas y las potencialidades de resistencia en el trabajo y en sus márgenes.

Si la cuestión de la resistencia se convierte en un objeto de estudio interesante, el uso de este concepto, sin embargo, no siempre está justificado o precisado. ¿Por qué utilizar el término resistencia en lugar de otros cuyos significados están relativamente cerca de un punto de vista semántico, tales como "acción colectiva", "movilización" o "rebelión"? ¿Cuál es la ventaja de utilizar ese término? ¿Qué aporta al análisis? ¿Cuáles son los motivos que llevan a alejarse del mismo? Este artículo tiene como objetivo hacer una contribución al análisis sociológico de la resistencia. Sin embargo, la pregunta no es acerca de la existencia, el alcance, la emergencia, el resurgimiento o aun la renovación de las conductas de resistencia, sino más bien sobre la pertinencia o el interés de utilizar esta terminología para describir la realidad social.

3. Una categoría de análisis plástica…

Estas preguntas surgen en la medida en que la resistencia no es sólo un simple concepto que puede ser definido a partir de características intrínsecas. Ella revela una construcción social y en este sentido remite a una categoría de análisis que, al tiempo que ordena lo real por las clasificaciones que ella opera, también consiste en una actividad que guía la percepción de la realidad. Como destaca Didier Demazière (2003: 39) "categorizar es focalizar la mirada perceptiva, es identificar los objetos desde un cierto punto de vista, y es por lo tanto establecer o actualizar procedimientos, análisis, combinaciones, distinciones, asociaciones, etc.". En esta interpretación la categoría no se refiere a atributos permanentes, sino que contiene propiedades surgidas desde un punto de vista; de este modo la categoría es necesariamente plástica, encerrando realidades heterogéneas que son dependientes de los puntos de vista que les dan forma.

La categoría de resistencia puede así ser utilizada para describir a la vez conductas individuales y colectivas, enfrentamientos directos o prácticas que dibujan "líneas de fuga", protestas enérgicas u ocultas, oposiciones tradicionales o innovadoras e inesperadas. También puede servir para describir la distancia entre trabajo prescripto y trabajo real, en la línea clásica de la escuela regulacionista de Reynaud, y así poner en valor la inteligencia (o la astucia) del obrero taylorizado. Pero también puede ser útil para tratar de significar la síntesis del desarrollo de las fuerzas productivas (según una perspectiva en la que el momento subjetivo de la resistencia permite visibilizar el marco objetivo del capital en un tiempo dado de su desarrollo tecnológico).

Esta categoría también da lugar a diferentes tipos de interpretaciones en cuanto a los horizontes escondidos en las acciones de resistencia. La categoría puede ser utilizada para comprender las dinámicas de recomposición de clase, pero también para poner en valor los procesos de fragmentación y de jerarquización de las categorías del capital –por ejemplo las resistencias de los trabajadores estables para conservar un cierto control sobre los mercados internos de trabajo-. Una misma práctica, como por ejemplo la que consiste en ralentizar colectivamente el ritmo de la cadena, puede ser entendida en términos de "capacidades" de los trabajadores para captar las contradicciones sociales (Dubois, 1976) – y en este análisis se pondrá el acento sobre su poder de transformación, sobre lo que la práctica "hace"a los sujetos que la practican (Calle Calderón y López, 2010)-; pero esta misma práctica de "frenado" puede entenderse también como una forma de limitación que impide la transformación social, es decir, como una práctica de resistencia que se

autocontiene, permitiendo esencialmente "aguantar" frente a la monotonía del puesto de trabajo (Burawoy, 1979; Linhart, 2009) o satisfacer ciertas necesidades "represivas" (Marcuse, 1968). La cuestión estriba entonces en saber si el potencial crítico de esta categoría puede de alguna manera encontrarse limitado por su plasticidad tan extrema: ¿qué interés puede tener un sociólogo crítico para utilizar esta categoría de análisis?

4. …QUE PERMITE REVELAR REALIDADES OCULTAS

La diversidad de las contribuciones recogidas hasta aquí alimenta la idea de heterogeneidad y plasticidad de la categoría. Ahora bien, cada una de ellas esconde a la vez pistas de reflexión para esclarecer las virtudes y los desafíos en cuanto al uso de las resistencias para el análisis sociológico. Sea cual sea el terreno en el que se trabaja, los contextos económicos y políticos en que se pueden inscribir las resistencias, el tipo concreto de práctica analizada o las características sociales de los actores que las practican, la identificación de tal o cual práctica a partir de la categoría de resistencia es para el sociólogo un medio para revelar patrones de comportamiento que estarían siendo invisibilizados por otros registros de clasificación o de categorización, y en particular las categorías de acción, de movilización colectiva, de movimiento social o de conflicto.

Algunos de estos términos (movilización colectiva o movimiento social, por ejemplo) hacen referencia a oposiciones firmes y organizadas por parte de actores en las que el carácter de protesta no se discute, ya que está en línea con los criterios esperados de lo que significa luchar. Por el contrario, la resistencia puede dar cuenta y, al mismo tiempo, revelar realidades en las que la dimensión conflictual no es obvia, no sólo porque está oculta, es informal o discreta, sino debido a que es invisibilizada por los marcos de referencia clásicos. Es lo que subraya por ejemplo Prisca Kergoat (2015) a propósito de las conductas de mujeres jóvenes inscritas en *cursus* formativos para devenir teleoperadoras de centros de llamadas. Estas mujeres confrontan de manera discreta, es decir el soporte de un colectivo de trabajo, todas las prescripciones y protocolos que les parecen incompatibles con su percepción íntima de lo que es un trabajo de calidad o bien hecho. Y aunque individuales, las lógicas morales que subyacen a estas luchas sordas por conquistar los sentidos del trabajo traducen una relación de exterioridad-interioridad con la actividad que es largamente compartida por las otras compañeras –mujeres, jóvenes y precarias como ellas, y en pleno proceso de inserción profesional. En un sentido parecido el antropólogo Laurent Bazin (2015) se ha interesado en un

grupo de obreros fabriles de Uzbekistán, cuyos comportamientos en la escena pública de la fábrica y los barrios parecen contener todos los signos de una gran sumisión al régimen político dictatorial articulado con las lógicas cacicales que gobiernan lo cotidiano en la fábrica. Pero en cuanto nos alejamos de la escena pública y los discursos dominantes, entre bastidores, lo que parecía adhesión no es sino disimulo, y la mayor parte busca el mejor modo de sustraerse de la actividad sin que se note. Para Patrick Cingolani (2015), es preciso extender lo que entendemos por resistencia a todas aquellas prácticas que no tienen un carácter abiertamente conflictual, pero que ofrecen perspectivas de emancipación –de una condición compartida, o de una categoría dada.

Como se trata de mostrar a la luz del conocimiento todas esas realidades clandestinas que han sido ocultadas o invisibilizadas, los análisis sobre las prácticas de resistencia suelen conducir a menudo a una reflexión sobre posturas y enfoques metodológicos. El trabajo etnográfico, en cuanto permite cruzar distintos espacios sociales, descubrir los intersticios de los sistemas de poder, multiplicar las miradas sobre una misma situación social, nos parece particularmente adaptado para descubrir el "texto oculto" de la realidad contada (Scott, 2008). Véronique Marchand (2015) muestra que las "identidades rebeldes" se sitúan principalmente en el detrás de escena: espacios situados al costado del trabajo, espacios privados. Prisca Kergoat (2015) insiste igualmente en la importancia que ha tenido para ella en su investigación el hecho de tener acceso a varias "escenas" (situaciones de formación, de trabajo, escolares de las jóvenes teleoperadoras), de manera de poder comprender la multiplicidad de registros con que estas mujeres construyen su relación con su empleo. En una línea similar, es observando las situaciones laborales y aquellas desplegadas fuera del lugar de trabajo que Patrick Cingolani (2015) puede vislumbrar "la resistencia a los emplazamientos disciplinarios, al aislamiento y a la soledad".

Por último, no se puede construir una mirada susceptible de descubrir todo eso que habitualmente permanece oculto si no se ponen en práctica dispositivos de investigación de largo aliento, esto es trabajos de campo de una duración tal que permitan examinar las transformaciones de distintos tipos de comportamientos en el tiempo. Es en este tiempo largo que nuestra mirada se afina, ya que las prácticas de resistencia no pueden definirse de modo intrínseco, sino en relación con las lógicas de opresión y dominación, con el posicionamiento de los actores en disputa en lo social, con los procesos complejos de construcción de subjetividades.

5. Transgredir las explicaciones sociológicas dominantes

Desde esta perspectiva epistemológica que busca descubrir el "texto oculto" de las relaciones entre dominantes y dominados, las distintas expresiones materiales de las subjetividades críticas en formación no son sólo, ni fundamentalmente, significativas por su cantidad o por su intensidad, en un momento histórico dado, sino por lo que estas permiten decir al sociólogo que se las apropia en su propio entramado discursivo. Revelar lo que no ha sido dicho no sólo es pertinente por sí mismo, en cuanto que permite dar cuenta de una oposición *quineditpas son nom*, sino que ha sido a menudo utilizado para poner en discusión teorías sociales dominantes o hegemónicas, y así contribuir a la producción de otras miradas sobre lo social, miradas que pasan por una resignificación simbólica, por una recualificación moral de las prácticas descritas como resistencias. Este uso se observa especialmente en el análisis de los grupos marginalizados o durante los períodos caracterizados por un reflujo de las luchas sociales, en los cuales la categoría de resistencia parece ser expulsada a los márgenes de la sociología. En este sentido, investigadores y colectivos de investigadores, solamente armados de puntos de vista alternativos sobre la sociedad y sobre la propia práctica sociológica, se apoderan de la categoría para tratar de "sacudir" el mundo académico y agitar las explicaciones sociológicas dominantes.

De alguna manera, desde los márgenes del *mainstream* sociológico, la "resistencia" a menudo ha desempeñado un papel central en los intentos de renovar epistemológicamente la sociología. Viene aquí a la memoria la experiencia de la perspectiva de género, cuyo enfoque se construye, específicamente a finales de los años 1970, a partir del problema de la ausencia de "resistencias" de las mujeres que se someten a relaciones de clase (Kergoat, 2012). De aquí se deriva una propuesta para pensar el trabajo, las dominaciones y la emancipación a partir de una teorización de las relaciones sociales en términos de consustancialidad y co-extensión (ibíd., 2012). Pensamos también en los estudios culturales, a partir de las obras de autores tan diversos como Willis (2011) y Scott (2009). Estos trabajos operacionalizan la idea de que la socialización capitalista consiste en la subsunción de todas las condiciones de vida a los requisitos de la organización social capitalista (configurada como relaciones de valor), pero lo hacen a partir de teorizaciones de las "resistencias", que buscan entender cómo el lenguaje y la cultura ya no son sólo un mero reflejo de una falsa conciencia, sino un campo de disputa que ancla sus raíces en la experiencia subjetiva de la opresión. Al hacerlo, nos dan pistas muy claras para pensar las recomposiciones de clase sin pasar

necesariamente por un grupo social particular, a partir de la existencia de procesos de subjetivación que determinan flujos y dinámicas de resistencia.

Estos trabajos de la tradición cultural anglosajona han provocado una gran controversia en América Latina (Henríquez, 2004) y han permitido renovar, con un análisis de las formas propias o raizales de hacer política en el continente. El Manifiesto Inaugural del Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos (Castro-Gomez et Mendieta, 1998) ponía en valor la necesaria conceptualización del pluralismo de las sociedades americanas y de las condiciones no desveladas sino mediante el análisis de las resistencias de los grupos subalternos. Como lo ha escrito Bonfil en su artículo celebrado, "México profundo, una civilización negada", "los caminos de la resistencia forman una red de estrategias que ocupan un amplio espacio de la cultura y de la vida cotidiana de los pueblos". Tanto si es mediante el análisis de las "estrategias de la vida cotidiana", de los "espíritus en resistencia" (Ong, 1987), o de otras formas de insubordinación y de infrapolítica de los subalternos (Scott, 1990), el nodo central del análisis consiste en develar cómo operan las prácticas cotidianas del esclavo, del campesino, del cortador de caña, del proletario, del individuo sometido por las clasificaciones raciales inferiores dictadas por los dominantes, e incluyendo los estatus subalternos impuestos por el poder neocolonial.

Por último, en otro registro obrerista y europeo que no podemos dejar de lado, por todo lo que significa esta experiencia en la renovación del marxismo europeo después que los tanques soviéticos invadieran Hungría, es preciso evocar la rica y plural tradición operaista italiana, formada en torno a figuras como Raniero Panzieri, Mario Tronti o un joven Antonio Negri. Un núcleo intelectual marginalizado en el ámbito académico y en las estructuras del partido PCI y del sindicato mayoritario CGIL, a quienes no quedó más remedio, a finales de los cincuenta y principios de los sesenta –"cuando parecía que no pasaba nada, nunca, en ningún sitio" escribiría más tarde Negri, que ir en busca de las resistencias en fábrica para repensar desde ahí, de modo dialéctico, el desarrollo de las fuerzas productivas, para romper con un marxismo orgánico para quien la clase devenía una simple función del capital, para producir, como decía Panzieri, *scienza operaia*. Para medir las contribuciones académicas del "obrerismo", basta con comparar el estado de la cuestión de los estudios sobre el trabajo en la obra de Franco Ferrarotti (1976) y el análisis presentado por Federico Butera que se interroga por esta literatura extra-académica quince años más tarde (1980). La sociología del trabajo, tal como fue refundada algunos años más tarde, se basará en gran medida en los logros de esta literatura extra-académica de investigadores-

militantes que se interesan por los cambios en el contenido reivindicativo de las huelgas, pero también especialmente por los comportamientos "individuales" que, en tanto masivos y generalizados, tienen repercusiones netamente colectivas: rotación, ausentismo y lo que se ha dado en llamar "*l'allergie du travail*" y en la tradición italiana "*rifiuto del lavoro*". Esta resistencia posteriormente será analizada como el síntoma de la transformación de una mano de obra bien formada en una fuerza de trabajo que comienza a relacionarse con las protestas estudiantiles y para la que el trabajo taylorista se convirtió en embrutecedor y sin interés. Para dar cuenta de los aportes teóricos del obrerismo, es suficiente con ver hasta qué punto la categoría de "trabajo vivo" (que se distingue de la categoría de "fuerza de trabajo" y permite designar al sujeto vivo no objetivado) es hoy en día útil para explorar las posibilidades de autonomización de las categorías del capital.

6. Una reflexión sobre las transformaciones sociales

La resistencia como categoría devela nuevas fuentes de conocimiento de lo social en cuanto nombra prácticas de resistencia ocultas en los discursos hegemónicos pero también porque, en tanto herramienta analítica que toma por objeto una cierta idea de *devenir* –que podemos encontrar materialmente en las prácticas de los dominados-, conduce a interesarse a la vez por los procesos de dominación y por las dinámicas de emancipación, por las lógicas a la vez de reproducción y de transformación sociales. La resistencia es una categoría analítica muy potente para pensar y repensar la relación entre individuo y orden, y entre estructura y cambio social, y como tal, nos permite cuestionar las prácticas observadas en el interior de las relaciones de clase así como discutir el potencial subversivo de las mismas.

Y como es obvio, los sociólogos no suelen ponerse de acuerdo y menos sobre cuestiones tan peliagudas. Por ejemplo, ciertos análisis contemporáneos en las ciencias del trabajo están utilizando la resistencia para refutar toda forma de posibilidad de existencia de una clase social. Es el caso de los estudios desarrollados por una corriente dentro de la Teoría del Proceso de Trabajo anglosajona que trata de comprender cómo todo el desarrollo de nuevas formas gerenciales de control están produciendo identidades ambivalentes: las nuevas organizaciones requieren de una mayor participación de los trabajadores, pero esta nueva libertad de expresión entraña formas de auto-disciplina que tienden a influir en la acción colectiva. La categoría resistencia expresa, para estos autores, una lucha permanente de individuos aislados entre sí que, a la vez que buscan encontrar un sentido a su trabajo, tratan de

asegurarse una identidad gratificante (Wilmott, 1994), Al contrario, desde otra radicalidad conceptual pero en el seno del mismo colectivo de investigadores, otros estudios, desde la noción de *misbehaviour* (mala conducta) (Ackroyd y Thompson, 2006), tratan de caracterizar el abandono por parte de los trabajadores de una cultura fundada en la valorización colectiva del trabajo, la cual es reemplazada por una subcultura crítica, cínica, a veces violenta, subversiva del orden establecido en todo momento, ansiosa de autonomía, que se desarrolla alejándose de las bases materiales y simbólicas del obrero colectivo. Lo que es curioso es que ya sea desde uno u otro punto de vista, la resistencia, en todas sus formas, es entendida como una práctica que se contiene, que es en sí misma y por sí misma su solo horizonte (Stewart, 2008).

Frente a estas perspectivas, Stephen Bouquin (2015) trata de articular una definición de la práctica de resistencia con la idea de una recomposición del obrero colectivo. Para ello, resitúa la experiencia de la explotación en el centro de su desarrollo teórico. Este movimiento teórico que nos propone S. Bouquin se completa con Xavier Dunezat y Elsa Galerand (2015), para quienes la recomposición de clase debe buscarse en la experiencia cotidiana de la resistencia contra las dinámicas de fragmentación y de jerarquización inducidas por la división sexual (y racial, podría añadirse) del trabajo.

Esta última perspectiva de carácter materialista está siendo revisitada desde orientaciones teóricas que tratan de pensar la relación con el poder desde lógicas colectivas pero no subversivas. Tomemos el ejemplo del movimiento de los indignados. Si bien éste ha podido entenderse a partir de las gramáticas propias de la protesta (según las cuales los dominados exigen algo al poder), algunos autores, en la línea de Harvey (2012) están poniendo el acento en el valor productivo que contiene el acto de "crear una ciudad en la ciudad". Lo que es común es de naturaleza distinta de lo que es público o privado, lo que es común reenvía siempre a un verbo, a una acción que consiste en producir algo colectivamente. Pensar la producción de los espacios de rebelión (en Sol, en Tahrir, en Nueva York...) como espacios que son justamente producidos colectivamente, por fuera de toda racionalidad liberal (la soledad, las virtudes del vicio económico, las pasiones tristes que nos gobiernan), conecta con una cierta idea de "desbordamiento creativo" que en lugar de buscar la confrontación con el enemigo apuesta más bien a ponerlo "fuera de juego".

Un sociólogo español, Jesús Ibáñez, escribió: "los subversivos y los reversivos hacen cuestionamientos a la ley. El subversivo, irónico o sádico, formula cuestionamientos: cuestiona las cuestiones. Subvertir proviene de sub-vertere y significa 'dar una vuelta por debajo': cuestionar la ley haciendo un giro por debajo de la ley para poner de relieve sus fundamentos. El reversivo,

humorista o masoquista, formula cuestionamientos a la respuesta: cuestiona la respuesta. Un policía que no trata de humanizar la ley, que respeta estrictamente la ley, abraza tan estrechamente la ley que la hace estallar: la ley es siempre injusta ya que nunca se ajusta a la realidad" (Ibáñez, 1997: 417).

La idea de reversibilidad de las relaciones de poder atraviesa hoy en día también el movimiento feminista. Para Teresa de Lauretis (1993) el feminismo habría descubierto que "la mujer" -y podríamos añadir el trabajador, el subalterno, el discriminado- no existen, o más bien que su existencia es paradójica, ya que están a la vez atrapados (en) y ausentes de los discursos hegemónicos. Están atrapados, es decir, están inscriptos en sus propios determinantes sociales y discursivos. Y también están ausentes y, por lo tanto, tratan de reinscribirse, de darse nuevamente un valor. Superar esta paradoja implica una redefinición de la marginalidad como posicionamiento consciente, y esto implica también una conceptualización de la identidad como des-identificación. Según esta perspectiva, y para volver a las plazas de la revuelta, proclamar como fue el caso en Madrid: "somos el 99%", introduce una nueva racionalidad enunciativa que arranca al capital la capacidad de nombrar la realidad y al mismo tiempo rechaza la identificación de un sujeto particular como motor del cambio social (Lara, 2013).

En suma, para estas perspectivas no-subversivas, se trata de volver a dar a la acción, a la resistencia, todo su lugar en el análisis sociológico, teniendo en cuenta la precaución expresada por Pierre Rolle (1988) a propósito de la categoría "trabajo", que se podría reemplazar aquí por la de "resistencia": "hay dos formas de excluir el trabajo [la resistencia] del análisis sociológico: la primera consiste en desarrollar una ciencia que lo ignore. La segunda consiste en producir una ciencia que lo presuponga" (Rolle, 1988: 23).

7. Una categoría que describe y que inscribe

Creemos que la "resistencia" es una categoría que tiene una gran potencialidad heurística no sólo porque describe, sino también porque inscribe al sociólogo que la practica, porque nos informa sobre el objeto que categoriza pero también sobre el sujeto que produce la categorización. Expliquémonos. Como hemos venido desarrollando, los trabajos sobre la resistencia describen, a menudo a partir de investigaciones duraderas en los terrenos más variados, la manera en la que los dominados se relacionan con el orden. Y sorpresivamente a veces estos últimos incluso llegan, contra toda previsión, a rebelarse. Danièle Kergoat decía que era esto lo que siempre la había

fascinado de lo social, cómo en las situaciones más inesperadas (y desesperadas) siempre se encontraban personas que resistían, motivos para la esperanza.

Pero los trabajos sobre las "resistencias" inscriben también a los sociólogos dentro del campo disciplinar, les exige una forma de *parti-pris*, y desde este punto de vista la resistencia es una categoría que exige una gran reflexión por parte del sociólogo que la utiliza. Trabajar sobre las "resistencias" constituye una forma de compromiso que a su vez "trabaja" sobre el sociólogo que se apropia de la "resistencia". Donna Haraway (1988) escribió que la única manera de encontrar una visión más amplia de lo social es situarse uno mismo en alguna parte. Esto significa que el sociólogo que se sitúa en algún lugar está admitiendo la parcialidad y el carácter incompleto de los conocimientos, en cuanto que estos están producidos siempre desde una cierta posición social y política. Es por ello que las investigaciones sobre las resistencias han venido a menudo acompañadas por una reflexión epistemológica sobre la pareja objetividad-subjetividad, y han permitido avanzar hacia la integración de la cuestión de la subjetividad (del sujeto que resiste y del sociólogo como sujeto de la acción de representar) en el debate teórico y epistemológico de la sociología.

Todos los enfoques sobre la resistencia se nutren, no puede ser de otra manera, de una cierta idea de la emancipación de los dominados. Es preciso por ello tratar de distinguir entre mundo político y mundo académico por cuanto se trata de dos esferas que contienen recursos propios, lógicas y temporalidades particulares. Por ejemplo, la clase obrera, o el tipo de sexo, no existen en la sociología más que como aplicación de un cierto número de hipótesis teóricas (Alaluf y Rolle, 2001). Pero la acción política es otra cosa. El movimiento obrero es una apuesta política, un proyecto de intervención en el espacio público que se construye a partir de otro nivel de categorización orientado a la intervención social.

De esta manera, si es verdad que una sociología crítica, comprometida, consciente y rebelde, no puede ser utilizada como valor de uso sino cuando consigue encontrar conexiones entre los contenidos epistemológicos, explicativos, informacionales que moviliza y las luchas efectivas que se dan en lo social, esta misma sociología comprometida corre peligro de forzar y castrar el mismo momento de las luchas si no asume que los conocimientos que ella produce son siempre parciales, situados, temporales, conflictivos. Así, creemos que es necesario que cada cual, según sus capacidades, su criterio, se apodere de la categoría –puesto que en la diversidad está la riqueza- para tratar de comprender lo social y de comprenderse a sí mismo representando lo social.

Aquí reivindicamos, en definitiva, la relevancia del debate sobre las "resistencias" pero a la vez una forma de humildad en la práctica sociológica.

BIBLIOGRAFÍA

ACKROYD Stephen et THOMPSON Paul (2006), "All Quiet on the Workplace Front?A Critique on Recent Trends in British Industrial Sociology" in Elgar E. *Patterns of Work in the Post-Fordist Era*, Cheltenham.

AGRIKOLIANSKY Eric, FILLEULE Olivier, SOMMIER Isabelle (2010), *Penser les mouvements sociaux,* Paris, La Découverte.

APPAY Béatrice (2005), *La dictature du succès, le paradoxe de l'autonomie contrôlée et de la précarisation*, Paris, L'Harmattan.

BALESTRINI Nanni et MORONI Primo (1988), *L'orda d'oro 1968-1977. La grande ondata rivoluzionaria et creativa, politica ed esistenziale*, Milan, Feltrinelli, coll. UniversaleEconomica,

BELL Daniel (1997), *La fin de l'idéologie*, Paris, PUF, 1997 [1960, trad. de l'anglais par Emmanuelle Baillon.,

BÉROUD, Sophie et BOUFFARTIGUE Paul (dir.) (2009), *Quand le travail se précarise, quelles résistances collectives?*, Paris, La Dispute.

BOUQUIN Stéphen (dir) (2008), *Les résistances au travail*, Paris, Sylepse.

BOUQUIN Sthéphen (2011), "La question des résistances au travail dans la sociologie du travail française*", Revue Actuel Marx.*

BENNANI-CHAÏBRI Mounia, FILLIEULE Olivier (dir.) (2003), *Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes,* Paris, Presses de Sciences Po.

BRAVERMAN Harry (1974), *Labour and Monopoly Capital. The Degradation of Work in the Twentieth Century*,Chicago, Monthly Review Press.

BURAWOY Michael (1979), *Manufacturing Consent*, University of Chicago Press.

BUTERA, Federico (1980) (ed): "Le ricerche 'non disciplinarie' per la trasformazioni del lavoro in Italia: 1969-1979", numéromonographique de *Sociologia del Lavoro,* Bologna, n. 10-11

CALDERON José (2008), "Michael Burawoy et la théorie du procès de travail. Généalogie d'un paradigme de la sociologie du travail", *Tracés* n. 14, Lyon, N°1.

CALDERON José (2006), "Repensar la cuestión de la resistencia en el trabajo o buscando al trabajador perdido", Madrid, *Sociología del Trabajo.*

CARDON Philippe, Kergoat Danièle et Pfefferkon Roland. (dir.) (2009), *Les chemins de l'émancipation*, Paris, La Dispute.

CASTILLO Juan José (2000), La sociología del trabajo hoy, in Garza Toledo, E. *Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo*, Mexico, FCE.

COUTROT Thomas (1998), *L'entreprise néolibérale, nouvelle utopie capitaliste?,* Paris, La Découverte, 1998.

DE LAURETIS Teresa (1993), "Sujetos excéntricos: la teoría feminista y la conciencia histórica" *in* María C. Cangiamo y Lindsay DuBois, *De mujer a género, teoría, interpretación y práctica feministas en las ciencias sociales*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina

DURAND Jean-Pierre (2006), *La chaîne invisible,* Paris, Seuil.

GIRAUD Baptiste (2009), "Des conflits du travail à la sociologie des mobilisations: apport d'un décloisonnement théorique et empirique", *Politix*, n°86.

EDWARDS Richard (1979), *Contested Terrain. The Transformation of the Workplace in the Twentieth Century*, New York, Basic Books.

FERRAROTTI, Franco (1976), *Hombres y máquinas en la sociedad industrial*, Barcelona, Editorial Labor

FILLEULE Olivier, Mathieu Lilian, PechuCecile (2009), *Dictionnaire des mouvements sociaux,* Paris, Presses de Sciences Po.

FOUCAULT Michel (2001), "L'écriture de soi"*, inCorps écrit* n° 5, 1983, retomado en *Dits et Ecrits II*, Gallimard

FRIEDMAN Andrew L.(1977), *Industry and Labour: Class Struggle at Work and Monopoly Capitalism*, Palgrave MacMillan.

HENRIQUEZ Mercedes (2004), "Una aproximación teórica a James Scott", Cuicuilco, mayo-agosto, vol. 11, n. 31, Mexico DF, Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)

KERGOAT Danièle (2012), *Se battre, disent-elles...*, Paris, La Dispute.

KERGOAT Prisca (2006), "De l'indocilité au travail d'une fraction des jeunesses populaires", *Sociologie du travail*,

KNIGHTS David etMcCabe Darren (2000), "Ain'tMisbehavin'? Opportunities for Resistance under New Forms of Quality Management", *Sociology*, vol. 23, n. 4.

LADA Emmanuelle (2011), "Les recompositions du travail des aides à domicile en France", *Formation-Emploi*.

LARA Angel (2013), "La producción de la plaza", Madrid, *Revista FIM*, n. 1

LINHART Danièle (2009), "Les conditions paradoxales de la résistance au travail", *Nouvelle revue de psychosociologie*, n° 7.

LINHART Robert et Linhart Danièle (1985), "Naissance d'un consensus. La participation des salariés" in Bachet Daniel, *Décider et Agir*, CESTA, Paris.

MONTES CATÓ Juan et al. (2007) *Relaciones de poder y trabajo. Las formas contemporáneas de explotación laboral,* Buenos Aires, Ed. Poder y Trabajo.

O'DOHERTY Damian etWILLMOTT Hugh (2001), "Debating Labour Process Theory: the Issue of Subjectivity and the Relevance of Poststructuralism", *Sociology*, vol. 34, n. 3.

PANZIERI Raniero (1994), "Sull'uso capitalistico delle machina nel neocapitalismo » (1978) in Panzieri Raniero, *Spontaneità et Organizzazione. Gli anni dei Quaderni Rossi*, Pisa, BFS.

SANNA Eleonora (2006), "Pratiques de soi et performance de genre : la constructions des sujets politiques entre Pouvoir et Autonomie", Thèse de doctorat en Science Politique, Université de Paris 8

SCOTT James (2009), *La domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne*, Paris, Amsterdam Ed.

SOMMIER Isabelle (2003), *Le renouveau des mouvements contestataires, A l'heure de la mondialisation*, Paris, Flammarion.

SOMMIER Isabelle et CRETTIEZ Xavier (2006), *La France rebelle*, Paris, Editions Michalon.

STEWART Paul (2008), "Le mythe de la fin du collectivisme. La montée de l'individualisme et la mort du travailleur collectif dans la sociologie britannique", in Bouquin S. (dir), *Les résistances au travail*, Paris, Sylepse.

THOMPSON Paul (1989), *The nature of work: an introducing to debates in Labour Process Theory*, Londres, MacMillan Press.

THUDEROZ Christian (2010), "Résistance au travail : la grammaire de la contestation", *Sociologie du Travail*

WILLIS Paul (2011), *L'école des ouvriers. Comment les enfants d'ouvriers obtiennent des boulots d'ouvriers*, Paris, Agone, coll. «L'ordre des choses

».

II / CONSTRUCCIONES POLÍTICAS ALTERNATIVAS. LOS TRABAJADORES FRENTE A LA OFENSIVA NEOLIBERAL

Santiago Duhalde, Valentina Picchetti y Patricia Ventrici

1. Introducción

En el panorama latinoamericano, Argentina ha sido sin dudas uno de los países en los que el programa neoliberal derivado del Consenso de Washington fue aplicado de manera más drástica. Se llevaron adelante reformas estructurales radicales, que transformaron de lleno la configuración del Estado y su relación con el mercado, en un lapso muy breve. Bajo esta estrategia política de "shock", consumada a principios de la década de 1990, se impuso el conjunto de políticas neoliberales que cambiaron la fisonomía de la sociedad en general y del mundo del trabajo en particular.

Para los trabajadores, la materialización del ideario neoliberal supuso uno de los retrocesos históricos más significativos. El denominador común fue la pérdida de derechos y conquistas históricas en todos los sectores de actividad, la expansión de las políticas de flexibilización del trabajo, de tercerización y de distintas modalidades del trabajo precarizado. Con los años, su consecuencia más dramática fue el crecimiento con marcas inéditas de la desocupación, con todos los efectos de disciplinamiento de la fuerza de trabajo que esto supone.

Las condiciones de posibilidad para la implantación de estas políticas tan profundamente regresivas fueron generadas en el marco de la última dictadura cívico-militar que ocupó el poder entre 1976 y 1983. El terrorismo de Estado aplicado por este gobierno de facto tuvo como prioridad principal desarticular y exterminar todas las instancias de organización popular, especialmente las sindicales, en todos sus niveles. Complementariamente, es en este período en el que se impone un modelo económico basado en la valorización financiera que tendrá como consecuencia el desmantelamiento del tejido industrial. Este proyecto será notablemente profundizado en los años 1990, con ostensibles implicancias en términos de empleo.

El avasallamiento sobre el trabajo –fundamentalmente bajo su forma de empleo– que estas reformas supusieron derivó en una profunda crisis, con

graves efectos en términos sociales. Sin embargo, frente a este gran deterioro de los sectores populares, también emergieron experiencias de resistencia de gran potencia política. Ente ellas, los actores más dinámicos fueron los denominados "movimientos sociales", encabezados en este caso por las organizaciones de trabajadores desocupados. El crecimiento de las organizaciones denominadas genéricamente *piqueteras*[1] se articuló a lo largo del territorio nacional, ubicándose con particular fuerza en los barrios carenciados circundantes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Entre las características más notorias de estas organizaciones encontramos la articulación –muchas veces contradictoria– de diferentes tradiciones de acción política e ideológica retroalimentadas con las experiencias de lucha en clave territorial. Hemos tomado como referencia para el análisis la zona de La Matanza, puesto que allí se desarrollaron expresiones de los conflictos más fuertes (en términos de duración y movilización de desocupados) y porque en ella también se cristalizó un heterogéneo conjunto de organizaciones que permite visualizar gran parte de la complejidad del entramado de articulaciones políticas posibles. Asimismo este territorio es de especial relevancia analítica en función de su fuerte pasado fabril e industrial durante el período de sustitución de importaciones, que nos permite pensar en los efectos sociales y políticos de las transformaciones del capitalismo en clave neoliberal.

Algunas de estas organizaciones de trabajadores desocupados más representativas se encontraban nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la cual se posicionó como una central sindical "de nuevo tipo", que protagonizó buena parte de la conflictividad social de la década. A diferencia del "sindicalismo tradicional", que experimentó un viraje hacia una lógica empresarial a partir de la adopción de una estrategia de adaptación pasiva para preservar sus estructuras, en detrimento de sus reivindicaciones históricas, la CTA encarnó un modelo sindical de oposición, autonomía y resistencia (Duhalde, 2009). El principal sindicato dentro de esta Central fue la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que nuclea a parte de los empleados de la administración pública, quienes se vieron particularmente

[1] Si bien el término "piquete" remite originariamente a una herramienta de conflicto clásica del movimiento obrero, que consiste en realizar una protesta en las puertas de las fábricas para evitar la entrada de trabajadores, gerentes y mercancías, en la Argentina de los noventa toma una nueva significación, fundamentalmente como una traba a la circulación y como posibilidad de visibilización de conflictos sociales que de otro modo permanecerían invisibilizados y relegados a los espacios donde están recluidas estas poblaciones desempleadas y pobres.

afectados por las reformas estructurales del Estado, uno de los pilares del programa neoliberal.

Asimismo, en el ámbito privado y en uno de los sectores más castigados por la política de privatización de los servicios públicos, nos referimos al transporte, surge otra experiencia de particular importancia, que se constituirá con el tiempo también como referente de un sindicalismo alternativo: la construcción sindical de los trabajadores del subterráneo. En este caso, se trata de una experiencia que recupera y resignifica un tipo de construcción política muy cara a la tradición de lucha de la clase obrera en la Argentina, que es la organización gremial en el espacio de trabajo. Además, ha sido un caso paradigmático de cuestionamiento al modelo sindical basado en el unicato (representación única por rama de actividad).

El presente trabajo se propone entonces, analizar estas tres construcciones emblemáticas de la lucha de los trabajadores en el marco de la ofensiva neoliberal de los noventa: los trabajadores desocupados, principales impulsores de la organización y movilización en los territorios, y los dos casos de referencia en cuanto a las luchas de matriz sindical que plantearon una política de resistencia en un contexto de crisis del sindicalismo tradicional.

2. El neoliberalismo como ajuste y desocupación

Con la recuperación de la democracia en 1983, luego de seis años de gobierno dictatorial, empezaron los intentos de reconstruir el entramado organizativo y la capacidad de movilización de los sindicatos. El movimiento sindical argentino, blanco privilegiado del terrorismo de Estado que llevó adelante el gobierno militar, venía de sufrir intervenciones, persecuciones, encarcelamiento y desapariciones de miles de trabajadores en todos los sectores de actividad. Además, su capacidad de recuperación también se veía seriamente limitada por las condiciones económicas estructurales desfavorables signadas por la continuidad, en muchos aspectos, de las políticas económicas implantadas en la dictadura: los efectos progresivos de la desindustrialización, el endeudamiento creciente en el marco del modelo de valorización financiera y la aplicación constante de planes de ajuste que perjudicaban principalmente los intereses de los asalariados.

Aún en ese marco, progresivamente los sindicatos lograron recomponer buena parte de su estructura y desarrollar la iniciativa política. En el plano político-institucional, las organizaciones sindicales asumieron el rol articulado de oposición al gobierno de Raúl Alfonsín, en un marco de desestructuración del

Partido Justicialista. Por entonces, la mayor parte del sindicalismo se alineaba en una tendencia confrontativa que tuvo como consecuencia la realización de trece paros generales al gobierno radical (1983-1989)[2] –encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT)–, además de la intransigencia en negociaciones clave para el sostenimiento de políticas gubernamentales de mediano y largo plazo (Gaudio y Thompson, 1990).

Sin embargo, estas condiciones comenzaron a cambiar cuando, a fines de 1989, y a meses de haber asumido el gobierno Carlos Menem, esta tendencia sindical, liderada por el cervecero Saúl Ubaldini, quedó relegada como posicionamiento dominante dentro del movimiento obrero. Esto sucedió al fracturarse la CGT y al volcarse una gran parte de los gremios a una tendencia participacionista, afín al nuevo gobierno justicialista. Este último, lejos de profundizar el modelo impulsado por Perón desde la década de 1940, produjo un giro de cientochenta grados al levantar la bandera del neoliberalismo, luego de pactar con los sectores dominantes de la Argentina.

Los últimos años de la década de 1980 y el comienzo de los noventa estuvieron signados por una brutal ofensiva sobre el trabajo, que tuvo en el proceso hiperinflacionario de 1989 su elemento más potente de disciplinamiento.[3] El trauma y el terror de la etapa hiperinflacionaria funcionó, según plantea Perry Anderson, como "un mecanismo para inducir democrática y no coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drásticas políticas neoliberales" (2003: 192) que condensó el programa del "Consenso de Washington". La transformación del rol del Estado y la disminución de su capacidad de injerencia, la apertura económica, la política brutal de privatizaciones de empresas públicas y la desregulación como criterio preponderante profundizaron la desindustrialización, acentuando el debilitamiento de la clase trabajadora. La consecuencia del giro neoliberal del gobierno menemista fue el surgimiento de grandes escisiones dentro del peronismo, que ha sido históricamente la primera fuerza del sindicalismo argentino. Así, las divisiones también se trasladaron al actor sindical (Senén González y Bosoer, 1999).

---

[2] La Unión Cívica Radical es un partido político de la Argentina fundado en 1891, de orientación socialdemócrata y centrista. Ha sido el gran rival del Partido Justicialista desde la fundación de este último por Juan Domingo Perón en 1947.

[3] En el proceso hiperinflacionario de 1989 los precios al consumidor aumentaron 3.079% (comparando el índice de precios al consumidor de 1989 con el del año anterior). Esto produjo un aumento de la pobreza, que pasó de 25% a comienzos de 1989, al récord de 47,3% en octubre del mismo año.

Para llevar a cabo estas transformaciones de corte liberal, el gobierno adujo principalmente dos razones. Por un lado, debido al incremento de la desocupación y la falta de empleo de la época, consideró conveniente "flexibilizar" el mercado de trabajo, con el objetivo de reducir los costos laborales del empleador y, de esa manera, aumentar el empleo. Detrás de esta idea se encontraba el razonamiento de que la desocupación, y la falta de reversión de esta tendencia, se debían a los enormes costos que acarreaba el empleo de mano de obra. La solución invocada era entonces quitar definitivamente todas las "trabas económicas" para la contratación y fácil disposición de la fuerza de trabajo, por ejemplo, la eliminación de la indemnización por despido injustificado (Recalde, 2003).

El objetivo principal de la reforma laboral fue entonces la reducción de lo que se dio en llamar "el costo argentino". De esta manera –se razonó– la reducción del gasto en mano de obra redundaría en un incremento de la inversión y, consecuentemente, en un aumento de empleo (Recalde, 2003). El resultado real fue completamente el inverso. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo perteneciente al Estado nacional, en octubre de 1989 –a tres meses de haber asumido Menem la presidencia– la tasa de desocupación abierta sobre la población económicamente activa era de 7,1%, mientras que al terminar su primer mandato en 1995 la tasa había aumentado hasta llegar al 18,6%. Al final de la década el fenómeno se profundizó, y para 2002 la tasa había alcanzado un histórico 21,5%. Asimismo, la incidencia de la pobreza también se incrementó notoriamente, pasando de un 21,8% en mayo de 1991 a un 42,3% en octubre de 2002.

El otro objetivo que se planteó el gobierno fue reducir el gasto excesivo que estaba realizando el Estado, con el propósito de disminuir el déficit fiscal y, de esa manera, "enfriar la economía" para reducir la inflación, que en esos años era el gran problema de la sociedad argentina. De esta manera, el propósito de Menem fue ajustar el gasto estatal, apuntando principalmente a las empresas de propiedad del Estado (o sea, privatizando el activo público) y al número de empleados estatales (Campione, 1995).

Así, en la estrategia neoliberal, la política de privatizaciones tuvo una centralidad indiscutida, por varias razones. Desde el punto de vista de la reproducción de los sectores dominantes, el significado de las privatizaciones reside en que por medio de ellas se logró hacer converger los intereses de los acreedores externos y del capital concentrado radicado en el país, cuya puja había dado lugar al proceso hiperinflacionario de 1989 antes citado (Azpiazu, 2000; Basualdo, 2000), pero a costa de un modelo que privilegió la valorización financiera y la marginalización de los sectores populares en la

distribución de los excedentes. En este sentido, el proceso de privatización implicó un nuevo mercado para el sector privado y un renovado avance tendiente a erosionar los ámbitos de influencia del Estado; de ahí que las privatizaciones no constituyan simplemente una técnica sino que son parte clave de una estrategia política destinada a consolidar los grupos económicos (Thwaites Rey, 1993).

A partir del proceso privatizador se genera una modificación sustancial en el modo de vinculación entre el Estado y el capital concentrado interno, porque pierde relevancia la transferencia directa de recursos –en concepto de subsidios de diferente tipo– característica de los años ochenta; se lleva a cabo la transferencia de activos estatales y la llamada desregulación de la economía que otorgaba a estas empresas la posibilidad de definir el funcionamiento de sus mercados, que ya de por sí presentaban condiciones mono u oligopólicas, dando lugar a un proceso acelerado de concentración y centralización de capital.

Uno de los sectores emblemáticos de este proceso de privatización de empresas tradicionalmente estatales fue el del transporte público, especialmente en el ámbito ferroviario. En materia de trenes, el pasaje al ámbito privado significó un verdadero y progresivo deterioro y desmantelamiento de la red ferroviaria en el nivel nacional, desarticulando un medio de comunicación y desarrollo vital para numerosas regiones del país, que quedaron virtualmente aisladas del circuito productivo y fueron transformándose en verdaderos "pueblos fantasmas". Además de estos perjuicios, la privatización tuvo un alto impacto en los trabajadores del sector transporte; a los despidos en masa se sumó la imposición de regímenes laborales basados en la flexibilidad, que implicaban la pérdida de numerosas conquistas históricas. El caso del subterráneo de Buenos Aires, que trataremos en los siguientes apartados es emblemático de ese proceso.

Como decíamos anteriormente, junto con las privatizaciones, la reforma estructural del Estado, que pregonaba la reducción del mismo a sus funciones esenciales (seguridad interna, justicia, defensa y relaciones exteriores), suponía una fuerte reducción del gasto público. El déficit fiscal del Estado argentino, acrecentado enormemente a partir de fines de la década de 1970, debía dar lugar a una reducción del gasto público para, de esa manera, transferir al exterior –en concepto de pago de la deuda externa– el dinero recaudado. Para lograrlo el Estado debía achicarse y "racionalizarse". Con este propósito se llevaron a cabo dos grandes medidas, una fue la privatización de la mayor parte del activo público anteriormente mencionada, y la otra fue el achicamiento de la administración pública nacional, hasta ese momento

considerada elefantiásica, deficitaria y corrupta (Campione, 1995; Basualdo, 2006).

Estas transformaciones produjeron un impacto especialmente nocivo en los empleados estatales, doblemente afectados por su particular carácter de trabajadores cuyo empleador es la institución afectada. La principal consecuencia fue la disminución del empleo público. Ésta fue provocada, fundamentalmente, por despidos directos, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. Esta disminución del empleo en el sector público fue mucho mayor en el ámbito de las empresas estatales –de 242.094 trabajadores en 1991 se pasó a 50.516 en 1995– que en el terreno de la administración nacional, la cual en 1991 empleaba a 534.238 personas y en 1995 esta cantidad se había reducido a 467.463 (Diana Menéndez, 2007: 81).[4]

Todo este proceso de precarización y de destrucción de fuentes de trabajo trajo como consecuencia un incremento formidable de los conflictos encabezados por los trabajadores estatales, tanto nacionales como provinciales y municipales. En estos dos últimos casos los conflictos tuvieron que ver, principalmente, con reclamos por retraso en los pagos y demandas de aumento salarial, mientras que los primeros luchaban directamente para impedir privatizaciones y evitar el desempleo.

Pero detrás de los dos grandes objetivos explícitos del gobierno nacional, relativos a la reforma laboral y del Estado, se encontraban otros de carácter implícito. Este embate neoliberal correspondía a un cambio de paradigma en el nivel internacional, que buscaba en la apertura de los mercados y en la liberalización de amplios sectores de la economía y la sociedad, una salida drástica de la crisis económica y social mediante un programa global de restructuración social que definitivamente redefiniese las relaciones de poder. Esta redefinición afectaría a los sindicatos, a las organizaciones sociales y a algunos sectores del capital nacional, considerados obstáculos en el camino hacia el nuevo proyecto social.[5]

---

[4] Por otro lado, parte del personal que se vio excluido en el nivel de la administración nacional, pasó a engrosar las administraciones provinciales y municipales debido al traspaso de, entre otros, el sector salud y educación del ámbito nacional al de las provincias. En estas administraciones se pasó de 1.159.370 trabajadores en 1991 a 1.178.623 en 1995 (Diana Menéndez, 2007: 81).

[5] Con este propósito se decidió encarar el debilitamiento del sindicalismo, que era para esta corriente de pensamiento un factor de presión colectiva que no permitía el normal desenvolvimiento de la oferta y la demanda. El sindicato era uno de los actores principales de la sociedad argentina en el contexto del modelo nacional-

Estas decisiones del gobierno justicialista desconcertaron, por lo menos durante los primeros meses, a la mayoría del sindicalismo argentino, y al poco tiempo se pudo divisar una profunda división en su interior. Un grupo heterogéneo de sindicatos grandes, junto con varios gremios de servicios, se sumaron al giro neoliberal del menemismo, priorizando el resguardo de sus propios intereses y asumiendo muchas veces como propia la idea de la inevitabilidad del nuevo rumbo económico después de la caída del bloque soviético y "el fin de las ideologías". Otros sindicatos, en cambio, de tendencia confrontacionista y combativa, históricamente asociados a prácticas sindicales críticas, optaron por la resistencia. Estos fueron los más afectados en ese momento, especialmente por la puesta en práctica del conjunto de políticas de corte liberal que, entre otras consecuencias, transformaron intensamente la fisonomía del Estado argentino y reformaron profundamente el sistema de relaciones laborales. Estos eran, principalmente, los sindicatos que nucleaban a trabajadores estatales (de la administración pública, de la educación, del sistema judicial). Las organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y la Federación Judicial Argentina (FJA), primeramente alineadas al ubaldinismo y luego unidas en un frente alternativo de lucha, fueron lideradas desde el comienzo por la Asociación Trabajadores del Estado y nucleadas en la CTA, escisión opositora de la principal central sindical nacional, la CGT (Senén González y Bosoer, 1999).

La CTA encarnó, durante la década de 1990, la concepción de un sindicalismo "autónomo" asociado a una concepción movimentista. Sobre esta idea, la CTA se constituyó como una central sindical de nuevo tipo que, además de los trabajadores asalariados típicos, incorporó como sujetos políticos protagónicos a los trabajadores precarizados, los movimientos de trabajadores desocupados, las organizaciones sociales nucleadas en torno a la demanda de vivienda, las comunidades indígenas, las cooperativas, las organizaciones barriales, las asociaciones de consumidores, etc., instalando una verdadera ampliación y renovación de lo que hasta entonces se concebía como una central sindical.

Simultáneamente al desarrollo de la CTA, y en el marco de un aumento histórico de los niveles de pobreza y desocupación en la Argentina, los

---

distribucionista, desde la década de 1940, y parte fundamental de la estructura corporativa con la que se procesaban los conflictos sociales. En el nuevo contexto, reducir las capacidades del Estado era quitarles a las asociaciones sindicales un aliado imprescindible para continuar siendo uno de los más importantes factores de presión política (Torre, 1999).

trabajadores desocupados comenzaron a mostrar formas de organización y manifestación por fuera de los canales de expresión más tradicionales, en el contexto de una sociedad que desde los espacios de decisión política hegemonizados por la tecnocracia neoliberal los definía como factor estructural del nuevo modelo, o en el mejor de los casos, como el costo del progreso. Geográficamente, desde su origen en el interior del país, se fueron extendiendo hacia el conurbano bonaerense.

Más allá de sus consecuencias inmediatamente perceptibles, la consolidación del desempleo de larga duración tuvo secuelas en términos políticos. De tal forma, los clivajes societales se fueron transformando y, si en un primer momento la vivencia individualizada de la desocupación prevaleció, luego la representación por medio de las organizaciones de desocupados permitió recomponer sentidos de existencia, dotar de herramientas para la acción y la identificación política sobre soportes novedosos.

3. Las organizaciones de los trabajadores desocupados: la resistencia desde los márgenes

Retomando lo anteriormente expuesto, encontramos que la descripción de la crisis político-sindical, el aumento desmesurado de los índices de pobreza y de las tasas de desempleo no bastan, tomadas aisladamente, para dar cuenta del proceso de surgimiento y la posterior consolidación de las organizaciones de desocupados, y menos aún para poder explicar en qué medida la intervención de estas organizaciones en el espacio público modificó la escena social.

El aporte inicial de las organizaciones de desocupados fue dar carácter público a un fenómeno que en su expresión original fue presentado como privado. Pero también es cierto que si colocamos el individualismo neoliberal en la base de la crisis de los partidos tradicionales y los sindicatos, necesitamos explicar cómo esa lógica pudo ser conjurada por los desocupados pobres urbanos. Es decir, necesitamos algo más que el simple enunciado de la pobreza y la desocupación para poder explicar la constitución de movimientos en torno a prácticas con un fuerte componente solidario y comunitario, como son las organizaciones piqueteras. Para comprender su emergencia hay que vincular las variables contextuales en donde se desarrollan cada una de las experiencias y vincularlas con las herencias organizativas en cada región, con las tradiciones de lucha que operan como un conjunto de saberes a disposición

de otros movimientos sociales [6] y con las transformaciones en la propia identidad de los grupos.

Estos sujetos, expulsados por el modelo y creados por él, debieron reconstituirse a sí mismos por fuera de la lógica que los convirtió en excluidos.[7] Entonces, es oportuno pensar que la fortaleza de los movimientos piqueteros está en la construcción de nuevas identidades que permitieron resignificar el ser social de *los excluidos*, es decir, invirtiendo una de las bases de la crisis política (Montes Cató y Cross, 2002).

Este proceso de resignificación de las propias identidades se combina con otros componentes englobados dentro de *estrategias de resistencia* de las organizaciones de desocupados. Así, estas estrategias no se reducen al corte de ruta, sino que se ligan con variadas prácticas cotidianas (desarrollo de talleres formativos, emprendimientos productivos, asambleas, etc.) que contribuyen a la construcción de una identidad y a la resignificación del lugar ocupado por los desocupados.

Siguiendo a Dubar (1991), la consolidación de una determinada identidad se encuentra sujeta a las cristalizaciones provisorias de ciertas maneras socialmente legítimas de definirse a sí mismo y de ser reconocido por otros.

---

[6] Es significativo reparar en este punto, puesto que muchas de las opciones evaluadas como posibles por un determinado colectivo dependen de las experiencias acumuladas en términos de conquistas y también de derrotas. Detengámonos por un momento en otra de las salidas organizativas que han surgido en los últimos años a raíz del agravamiento de la crisis, nos referimos a las empresas recuperadas. Si bien, como en el caso que nos compete, no puede dejarse de lado el problema de la desocupación y también, en algún caso, de la devaluación para comprender la proliferación de este tipo de experiencias, es necesario concentrar la mirada en los cambios de percepción de los trabajadores a partir de que se llevaron a cabo algunos casos exitosos en la toma de fábricas (exitosos en términos de que, por un lado, los trabajadores mantienen la fuente de trabajo; en segundo lugar, de que la organización queda en sus manos; y finalmente porque estas experiencias comienzan a ser reconocidas legalmente). En este ejemplo, como en el de las organizaciones piqueteras, existe un desplazamiento de los límites entre lo permitido y lo reprobable, y se produce una ruptura en el horizonte de posibilidades (Picchetti, 2002).

[7] Como hipótesis podríamos pensar que en la misma medida en que se presentaba a los desocupados como excluidos (en términos de su capacidad de consumo), el rol político que les fue asignado estuvo relacionado con presentarlos como amenaza frente a los trabajadores con empleo, y en este sentido lograr acentuar el disciplinamiento de estos últimos.

Por esta razón, es importante destacar los sentidos en los cuales los movimientos piqueteros se han instalado como sujetos políticos relevantes y dotados de una identidad propia. Hacia fuera del piquete, se constituyeron como actores legítimos con capacidad y poder de negociación y organización, lograron la instalación del problema de la desocupación como un problema estructural, y obligaron a plantear estrategias de posicionamiento frente a sus demandas (y sus prácticas) a actores tradicionales como partidos políticos, sindicatos y Estado.

Por otra parte, se observa cómo las distintas organizaciones lograron recuperar el concepto de política como forma de construcción de largo plazo, destacándose la recuperación de la participación horizontal, principalmente el uso de la asamblea como modelo consensuado de toma de decisiones.

Las identidades sociales, en este marco, no son interpretadas de manera esencialista ni con carácter inmutable. No creemos que la cuestión de la identidad pueda reducirse a la búsqueda de una sustancia común e inmanente a los sujetos (individuales y colectivos). Por el contrario, la identidad es una construcción que debe ser comprendida desde una perspectiva procesual, situada y no-esencialista. Así, pues, se desarrolla en contextos de producción y en determinados escenarios de socialización. En palabras de Hall (1997), las identidades se construyen en el discurso (no fuera de él) y son reproducidas en lugares históricos e instituciones particulares, en formaciones discursivas y prácticas puntuales, mediante estrategias enunciativas. Emergen en modalidades específicas de juegos de poder y son más el producto de una diferencia y una exclusión, que el resultado de lo idéntico. Siguiendo a Sommers y Gibson (1994), las narraciones no son incorporadas de una manera directa, sino mediadas por un enorme espectro de relaciones políticas y sociales que constituyen el mundo social.

La identidad política fraguada por las experiencias piqueteras estará marcada por una base fuerte de componente local que se forjó en los años 1980 durante las grandes ocupaciones de tierras urbanas colectivas (asentamientos) en la zona. La herencia de las tradiciones de lucha estará vinculada con las experiencias de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) –afiliada a la CTA– y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

En julio de 2001 se realizó la primera Asamblea Nacional piquetera con el objetivo de articular las diversas expresiones. Sin embargo, las diferencias ideológicas y estratégicas surgieron entre los grupos y no lograron crear una coordinación nacional y permanente articulación de acciones en diferentes regiones.

El movimiento se dividió en tres grandes bloques: las organizaciones de desocupados en su mayor parte relacionadas con los partidos de izquierda agrupados en el Bloque Nacional Piquetero (ligado a la tradición maoísta y trotskista); la FTV y la CCC; y un tercer grupo heterogéneo caracterizado por la autonomía con respecto a estructuras fuera de los propios desocupados, como es la Coordinadora Aníbal Verón.

El surgimiento y desarrollo de los movimientos de trabajadores desocupados puede vincularse con el proceso de deconstrucción/reconstrucción identitario que se manifiesta en las rupturas de las trayectorias laborales individuales, en el cambio de los espacios para el desenvolvimiento de las relaciones que llevan adelante los sujetos sociales y en el cambio en el carácter mismo de estos sujetos sociales que interpelan y están siendo interpelados. Esto actúa como condición de posibilidad para su surgimiento, en la medida en que las trayectorias individuales tienden a confluir y resignificar las antiguas identidades ligadas al trabajo (Delfini y Picchetti, 2003).

La identidad de los desocupados organizados en los barrios del Gran Buenos Aires –a su vez parte de los sectores populares en sentido amplio, pero diferentes de otros grupos por una suerte de doble subalternidad, es decir, por su condición subalterna con respecto a las relaciones que entablan con los mismos– puede pensarse en los barrios, con un punto de partida en la falta de trabajo y que, reconstituida en este ámbito territorial, puede desarrollarse en la medida que implique un reconocimiento de la desocupación como problemática social. Para ello es necesario la configuración de una trama que posibilite su reconocimiento como tal y acciones que también refuercen las identidades reconstruidas desde las cercanías espaciales y sociales.

El barrio, convertido en escenario del despliegue de la dimensión relacional de la identidad (en el sentido que permite, al entablar relaciones con otros actores sociales, la delimitación de un "nosotros" y un "ellos") y como articulador de las experiencias individuales, tiende a crear la posibilidad para el desarrollo de la acción colectiva; acción que sólo tiene lugar en la medida en que la desocupación se comprende en tanto problema social y con visos colectivos (no como un problema individual), y es así reconocida tanto por aquellos que la padecen como por aquellos que la provocaron o simplemente se encuentran ajenos a esa situación.

En este sentido, el corte de ruta viene a significar el pasaje de formas identitarias construidas en los espacios/lugares de relegación, hacia la acción colectiva que se manifiesta en ese corte. "No se puede explicar la acción colectiva si no se presupone constituida la identidad de los actores sociales. En

efecto, para poder establecer un vínculo entre intereses y movilización colectiva, se requiere la presencia de una identidad colectiva, de un 'nosotros´ en el cual reconocerse para poder dar consistencia a la acción" (Jiménez, 1994: 8).

4. Trabajadores estatales: un sindicalismo alternativo en momentos de ajuste estructural

Ya durante la segunda mitad del gobierno radical de Raúl Alfonsín comienza a producirse una reducción del personal estatal (principalmente por el mecanismo de retiro voluntario) y un intento de llevar a cabo un proceso de privatización de una parte del activo público, el que entonces fue resistido en el Congreso Nacional por parte de los legisladores justicialistas (peronistas). Sin embargo, en 1989 será el Partido Justicialista en el gobierno quien impulsará la ofensiva neoliberal que se consolidará en los años 1990 a partir del proceso de reforma del Estado y de privatización de la mayoría de las grandes empresas estatales (Levitsky, 2005; Etchemendy, 2001). Todos estos desarrollos tuvieron secuelas importantes para los trabajadores del Estado.

La principal consecuencia fue la disminución del empleo público. Ésta fue provocada sobre todo por despidos directos, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. Sin embargo, muchos de estos nuevos desempleados fueron al poco tiempo reincorporados al aparato estatal. Un mecanismo que explica el fracaso parcial de la política gubernamental de reducir considerablemente el personal de la administración pública nacional, pero que a su vez sí sirvió para reducir los costos, fue aquel por el cual gran parte de las personas en relación de dependencia –con los costos en seguridad social que ello implica– que fueron expulsados de la administración, volvieron al poco tiempo a ser trabajadores estatales, pero esta vez en carácter de contratados, logrando así el Estado una importante reducción de gastos correspondientes a las cargas sociales.

Así, aprovechando la cláusula legal que congelaba las vacantes de planta permanente, se incorporaron grandes cantidades de trabajadores mediante contratos anuales y renovables, similares a los de los profesionales autónomos privados. Estos trabajadores carecieron de vínculo laboral formal y, por lo tanto, de beneficios sociales y estabilidad. De esta manera, nos encontramos con un mecanismo de fraude a la ley, con el agravante de que provenía del Estado, quien tiene a su cargo fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral. Además, en estas condiciones los trabajadores no podían fácilmente

acceder a su representación formal por parte de los sindicatos. Todo esto produjo, como consecuencia, una precarización creciente de los empleados públicos, el comienzo de un proceso de diferenciación entre estos trabajadores, cierta pérdida de solidaridad y un incremento del individualismo en los organismos estatales (Recalde, 2003; Oszlak, 2003).

A pesar de semejante ofensiva llevada a cabo desde el gobierno contra los trabajadores del Estado, dentro de las organizaciones sindicales del sector público hubo reacciones diversas y hasta opuestas. Dos son los principales sindicatos del sector: la Asociación Trabajadores del Estado y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). La organización más representativa en ese entonces era UPCN con una representación del 70% de los empleados estatales sindicalizados, frente a un 30% de ATE.[8] La respuesta de ambos sindicatos fue diferente. Mientras UPCN expresó su acuerdo con el gobierno justicialista y en algunas ocasiones incluso ayudó a la implementación de varias de las medidas que implicaron la reestructuración del Estado y la reforma del sistema de relaciones laborales, ATE se opuso fuertemente a ambos procesos de reforma, sosteniendo una actitud crítica durante las dos presidencias de Carlos Menem (Diana Menéndez, 2005).

Este proceso de precarización y de destrucción de fuentes de trabajo, producto de la reforma del Estado y del proceso de privatización, condujo a ATE a una doble estrategia de resistencia. Por un lado se desplegó un conjunto de reformas estatutarias dentro del sindicato, con el propósito de adaptarse a la nueva realidad laboral estatal fruto de estas transformaciones. Y por otro lado este sindicato realizó un conjunto de acciones externas dirigidas sobre todo a obstruir el paso a las reformas por entonces en marcha y, en menor medida, a avanzar en demandas propias.

Con respecto a la adaptación del sindicato a la nueva situación del país, la dirección de la asociación –que se había renovado en 1984 en las primeras elecciones gremiales de la transición democrática– aprueba en diciembre de 1988 su nuevo estatuto.[9] Éste indicaba ahora invertir el porcentaje de coparticipación que iba del consejo directivo nacional a los consejos directivos provinciales, creados entonces a efectos de esta nueva estrategia de resistencia. Si antes el 70% de lo recaudado por el sindicato en concepto de cuota sindical

[8] Para los porcentajes de representación véase el Decreto 66/99, Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional. Homologación, Boletín Oficial del 26 de febrero de 1999.

[9] Estatuto de la Asociación Trabajadores del Estado de 1989.

se dirigía al consejo directivo nacional y el resto a las seccionales de provincias, a partir de 1989 esta relación se invierte. Esto adquiere una importancia específica debido a que, si bien para mediados de la década de 1980 la mayoría de los afilados eran trabajadores dependientes del Estado nacional, para principios de la década de 1990 había disminuido considerablemente el número de trabajadores nacionales afiliados, producto de la destrucción del aparato productivo estatal puesta en marcha ya desde mediados de la década de 1970, del giro definitivo de la economía al sector servicios y por causa también de la provincialización y municipalización del sector salud y educación. De esta manera, la década de 1990 también determina para ATE el surgimiento de un nuevo perfil de afilados y dirigentes. Si desde la década de 1940 y hasta mediados de los ochenta el perfil era mayormente obrero, en los últimos diez años del siglo XX comienza a aparecer claramente en ATE un tipo de empleado con perfil administrativo.

Frente a este nuevo panorama, la decisión dirigencial fue la del lanzamiento de una gran campaña de afiliación de trabajadores provinciales y municipales, favorecida e impulsada por la puesta en marcha de un mecanismo de otorgamiento de mayor autonomía y presupuesto a los consejos directivos provinciales, creados, entre otras cosas, para responder específicamente a la necesidad de invertir el decrecimiento de la tasa de afiliación del sindicato. Las seccionales que antes dependían directamente de ATE nacional, pasan de tal forma a responder al Consejo Directivo de su provincia, lo que mejora la comunicación, la organización y la asignación de los recursos para llevar a cabo esta estrategia de afiliación. Estos cambios operados para sobrellevar el incremento en las desafiliaciones de los trabajadores nacionales, lograron aumentar considerablemente la afiliación.

Si en 1991 los trabajadores municipales afiliados a ATE eran 5662, en 2010 llegaron a ser 48864. Los provinciales pasaron, en el mismo periodo, de 21834 a 113746 afiliados. Por último, los trabajadores nacionales afiliados pasaron de ser 5455 a 26273 también para ese periodo.[10] Como puede observarse, ya desde principios de la década de 1990 la gran mayoría de los afiliados al sindicato son trabajadores provinciales.

A pesar de los embates contra los trabajadores estatales, ATE logró aumentar la afiliación en términos absolutos a lo largo del primer gobierno de Carlos Menem (1989-1995). En 1988, un año antes del inicio del gobierno justicialista

[10] Los datos estadísticos fueron cedidos por el departamento de Afiliaciones del Consejo Directivo Nacional de ATE.

y del programa de reforma del Estado, esta asociación contaba con 139.499 afiliados, de los cuales cerca de 50.000 van a desafiliarse entre los años 1989 y 1990. Sin embargo, la cifra de afiliados llega en 1996 –en el comienzo del segundo gobierno de Menem (1995-1999)– a aproximadamente 190.000 miembros.[11] Este aumento, como ya dijimos, se debió principalmente a que a pesar de las bajas en afiliación sufridas en el ámbito de los trabajadores de empresas públicas nacionales, estas fueron compensadas por la incorporación a la asociación de sindicatos y trabajadores provinciales y municipales.

Por otra parte, la otra apuesta importante de la dirigencia sindical, también a partir de 1990, fue el impulso dado a las prácticas de representación y afiliación de esa enorme masa de empleados estatales precarizados que volvían nuevamente a la administración pública pero esta vez en carácter de contratados por cortos períodos. De ese modo se abrió para la asociación una importante posibilidad para aumentar la cantidad de representados (Diana Menéndez, 2007). Y todo esto potenciado aun más por el hecho de que en aquel entonces UPCN no permitía la afiliación a los trabajadores contratados.

En cuanto a las acciones externas de resistencia a la ofensiva neoliberal llevadas a cabo por el sindicato, debe mencionarse el incremento formidable de los conflictos encabezados por los trabajadores estatales, tanto nacionales como provinciales y municipales, durante la primera presidencia de Menem. Estos conflictos fueron encabezados en su gran mayoría por esta asociación. Teniendo en cuenta los sectores estatal, industrial, de servicios y CGT y Regional, entre 1989 y 1995, los conflictos del sector estatal fueron mayoría, o sea, superaron el 50% del total de los conflictos laborales –excepto en el año 1992 cuando alcanzaron un 49%– y hasta llegaron a un 75% del total de los mismos en 1995.[12]

Como ya adelantamos, en los casos de los trabajadores provinciales y municipales los conflictos fueron esencialmente de raíz salarial. En ese sentido las luchas emprendidas en las provincias y municipios supusieron principalmente un proceso de resistencia frente al desinterés creciente de los gobiernos por los servicios estatales y, por lo tanto, por la remuneración a los trabajadores del Estado y sus condiciones de trabajo. En el caso de los empleados nacionales, las medidas de fuerza (huelgas, cortes de calle, movilizaciones, quites de colaboración, tomas de los lugares de trabajo,

[11] Datos indicados en Martuccelli y Svampa (1997: 279).

[12] Fuente: Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. Extraído de Senén González y Bosoer (1999: 201).

quemas de neumáticos y objetos) respondían mayoritariamente a los intentos de llevar adelante el proceso de privatización de las empresas públicas (Senén González y Bosoer, 1999). De esta manera, la disputa se daba en un plano diferente al de los demás trabajadores, ya que la resistencia tenía que ver entonces con la lucha por el mantenimiento de los puestos de trabajo frente a la amenaza de los despidos y la privatización.

A pesar de los años de oposición y confrontación a las medidas del gobierno nacional, no son muchos los casos de reversión de la tendencia neoliberal que se venía imponiendo. Dos ejemplos importantes por la tenacidad y resistencia de sus trabajadores en la obtención de la suspensión de la privatización por aquella época, fueron el del Astillero Río Santiago y el del Instituto Malbrán[13]. En el primero, los trabajadores soportaron los intentos privatizadores con una permanencia en 1987 de cinco días en la fábrica, con movilizaciones a distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, con la ocupación del inmueble y con un piquete que cortó los accesos a la ciudad de La Plata en el año 1992. Estas fueron algunas de las medidas tomadas para percibir los sueldos adeudados y para hacerse oír e impedir la privatización. En el segundo caso, durante 1996, y tras más de 200 días de paro, 184 días de permanencia con movilizaciones y la toma del edificio, se logró frenar la privatización del Instituto Malbrán.[14]

En términos generales, la resistencia de ATE no pudo ir más allá del intento de poner frenos u obstáculos al avance privatizador y flexibilizador de la fuerza de trabajo (objetivo que se alcanzó en algunos casos importantes), si bien se lograron ciertos avances favorables a las demandas de los trabajadores estatales durante el período. Quizá el caso más importante fue, en términos de los

[13] El primero es un astillero argentino ubicado en la ciudad de Ensenada. Es uno de los astilleros de mayor actividad e importancia de Latinoamérica. Fundado en 1953, ha realizado diversos trabajos en el sector naviero, industrial y ferroviario. En su época de esplendor el astillero llegó a tener 8.000 trabajadores en doble turno. En 2008 contaba con 2.700 trabajadores. Por otro lado, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos Malbrán" es un organismo público descentralizado, que tiene por misión fundamental participar en las políticas científicas y técnicas vinculadas a los aspectos sanitarios del ámbito público. En este sentido, actúa como institución nacional de referencia para la prevención, control e investigación de patologías. Es un relevante centro de investigación microbiológica de nivel internacional, y en él han trabajado importantes científicos, tales como los premios Nobel Bernardo Houssay y César Milstein.

[14] Véanse las Memorias de ATE Nacional (1987-1997).

derechos colectivos de los trabajadores estatales, cuando en 1992, siendo diputado nacional el dirigente de ATE Germán Abdala inició, promovió y logró la aprobación de una ley que, por primera vez en la historia argentina, permitía a los empleados públicos la negociación de convenios colectivos.[15]

En resumen, frente al proceso de privatizaciones y de reforma del Estado, ATE se destacó como uno de los pocos ejemplos de rechazo explícito de estas políticas dentro del sindicalismo argentino y de promoción de una nueva forma de acción y organización sindical, desligada tanto del Partido Justicialista como de las posiciones de izquierda más extremas. Muchos otros sindicatos optaron por la propia transformación de sus organismos en entidades de servicios al afiliado y otros eligieron la adaptación acrítica al proceso de cambio que venía imponiéndose. En contraposición, ATE logró ubicarse durante años como una referencia clave del sindicalismo confrontativo en Argentina, si bien en los últimos tiempos (especialmente a partir de 2005) diferencias internas debidas a posiciones encontradas con relación a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner han empezado a debilitar su imagen y su capacidad de construcción gremial y política.

5. La resistencia al neoliberalismo en el espacio de trabajo: la construcción gremial en el caso del subterráneo de Buenos Aires

El Subterráneo de Buenos Aires recorrió durante las décadas de los ochenta y noventa una trayectoria arquetípica, representativa de las grandes transformaciones que se produjeron en materia laboral en Argentina a partir de la consolidación del programa neoliberal. Como la gran mayoría de las empresas de servicios públicos, atravesó el derrotero del vaciamiento y desprestigio previos a su privatización –en 1994– y luego, el consiguiente desguace en función de criterios técnica y eufemísticamente enunciados como "reestructuración productiva" o "racionalización de las empresas", que en realidad encubrían procesos drásticos de despidos e intensificación del control y la disciplina en función del aumento de la productividad.

[15] Hoy en día, la Ley de Convenios Colectivos para el Empleo Público es llamada "Ley Abdala".

Así, con el pasaje del ámbito estatal a la gestión privada se constituye en este espacio de trabajo lo que podríamos denominar un *nuevo orden empresarial*,[16] que conjugó todos los factores característicos del avance del ideario neoliberal en el mundo del trabajo. Como primera medida, se llevó adelante una disminución drástica de la plantilla estable de trabajadores. Al inicio del proceso privatizador el plantel de trabajadores ascendía a 3.980 empleados, mientras que para fines de 1996 ya se había reducido a 2.500. Además, en este pasaje la empresa concesionaria –Metrovías– sólo contrató al 30% de la planta que estaba en funciones, al tiempo que se incorporaron progresivamente 1.100 trabajadores de afuera. Las herramientas utilizadas para efectuar este brutal ajuste fueron los despidos y los denominados "retiros voluntarios".[17] Como indica la lógica flexibilizadora, esta reducción se complementó con la aplicación de una estrategia de *tercerización* de numerosos servicios que históricamente habían estado bajo el control directo de la "empresa madre" (limpieza, seguridad, etc.). Este proceso involucró a más de 1.000 trabajadores y se desarrolló de manera notoriamente irregular, ya que se demostró que muchas de las empresas tercerizadas pertenecían a la misma sociedad de la empresa concesionaria.

Esta reorganización funcional fue claramente perjudicial para los trabajadores. Por un lado porque la contratación en las empresas subsidiarias se hizo en el marco de convenios colectivos de trabajo mucho más desventajosos que los que les corresponden a los trabajadores del transporte subterráneo propiamente dicho, por lo que esos empleados tenían una carga de trabajo mucho mayor y un salario notablemente menor que el de sus compañeros. Por otra parte, en términos políticos, la fragmentación del colectivo de trabajo supuso un menoscabo para la organización colectiva, en tanto las diferencias contractuales, salariales, en las condiciones de trabajo que emergían de esa división obstaculizaron, en un primer momento, la capacidad de construir identificaciones comunes y acciones concertadas.

---

[16] Esta noción se emplea refiriendo –y parafraseando– el concepto de *orden en la producción* de Jean Paul Gaudemar (1991).

[17] Se trató de una práctica extendida en todas las empresas estatales gracias a la cual se instaba a los trabajadores a renunciar a su empleo a cambio del pago de sumas de dinero que en algunos casos superaban la indemnización. Consiste en un acuerdo empleado-empresario, por el cual, frente a la propuesta empresaria, un empleado recibe un monto determinado de dinero como contraprestación a su "aceptación" de ser desvinculado de la empresa.

Asimismo, la nueva gestión de la fuerza de trabajo se basó en la implementación de un régimen de flexibilización en términos técnico-organizativos. Esta reorganización implicó el desarrollo de una política de *flexibilidad funcional*, basada en la práctica de la polivalencia, la rotación del lugar de trabajo y la multifuncionalidad; de una *flexibilidad salarial*, a partir de la cual el componente variable adquiere mayor peso en la composición del salario en función del esfuerzo individual; y de una *flexibilidad del tiempo de trabajo*, que se materializó en la extensión de la jornada de trabajo, la reducción de los tiempos de descanso y la modificación de los mecanismos de asignación de francos y vacaciones.

Este proceso de reconfiguración radical de las relaciones en el espacio de trabajo, que dio lugar al nuevo orden empresarial, fue acompañado por el desarrollo de una nueva cultural gerencial, fundada en los mandatos del nuevo management, que alternó sus estrategias entre el control directo y coercitivo y los intentos de fidelización por implicación de los trabajadores. En ese nuevo marco, se consolidó al inicio de la administración privada una *nueva estructura de control* (Edwards, 1990) resultante del proceso de expulsión, fragmentación y precarización de la fuerza de trabajo antes y durante el proceso privatizador.

En el marco de este escenario tan asimétrico de las relaciones de fuerza, empieza a gestarse una experiencia de organización colectiva en el espacio de trabajo que fue consolidándose y fortaleciéndose a lo largo de los años hasta terminar convirtiéndose en un caso de referencia para todos los sectores. Serán principalmente los nuevos trabajadores, ingresados a partir de la gestión privada, quienes encabezarán un proceso de organización gremial que registra sus primeras manifestaciones visibles en 1997, momento en el que tienen lugar las primeras huelgas contra despidos arbitrarios por parte de la empresa. La estrategia de resistencia activa a la pérdida de derechos históricos, las pésimas condiciones de trabajo, los bajos salarios y el maltrato empresarial reconoció, desde sus inicios, ciertas particularidades en el caso del subterráneo, que lo posicionaron como un modelo de construcción gremial alternativa.

Como decíamos, los inicios de la organización y las primeras acciones colectivas se ubican hacia fines de la década de 1990, a contramano de la tendencia dominante, que marcaba un claro declive y desprestigio de la institución sindical –en un contexto de aumento inédito de la desocupación– junto con un claro ascenso del protagonismo de los llamados movimientos sociales en el escenario de la conflictividad social.

El rasgo saliente de esta experiencia ha sido la centralidad de la organización en el lugar de trabajo, en la que las figuras del *delegado* y la *asamblea* en el

espacio productivo cobran una relevancia indiscutida. La organización de base, en buena medida, forjó su identidad y prácticas en oposición a las del sindicato en el que el subte se encontraba oficialmente encuadrado –la Unión Tranviario Automotor (UTA)–, asociadas a un verticalismo acrítico con ribetes represivos y con el cual mantendrá un enfrentamiento de origen que irá profundizándose conforme a la progresiva consolidación de este cuerpo de delegados opositor. En esa dirección, se postuló como base de legitimidad de la construcción gremial, el ejercicio de una representación directa y una comunicación fluida entre representados y representantes, junto con la reivindicación del principio de independencia tanto en relación con el sindicato oficial como con la empresa empleadora.[18]

Asimismo, este ejercicio político-gremial también se caracterizó por la recuperación de concepciones y prácticas del ciclo de luchas abierto en los años noventa –que como decíamos, encontró su sujeto más potente en los movimientos sociales– dando lugar a una verdadera imbricación de tradiciones de lucha de un modo singular. En este sentido, puede rastrearse la presencia de esta impronta en la reivindicación que la organización hace de las prácticas asamblearias, de ciertos niveles de horizontalidad y en la gravitación de las ideas de *autonomía* y *democratización*, emblemáticas del clima de época de aquellas protestas. Por otro lado, esta apertura y confluencia se manifestó en la articulación concreta con distintas expresiones de los movimientos sociales (fundamentalmente organizaciones de trabajadores desocupados) para plantear reivindicaciones conjuntas[19] y con la incorporación a su repertorio de acciones

[18] Vale destacar que este tipo de construcción sindical se inscribe en una notable tradición histórica del movimiento obrero argentino vinculada a la presencia sindical en el propio espacio de trabajo, que sobre todo desde el peronismo en adelante cobra un gran impulso, tanto en términos de masividad como de densidad política, transformando a las comisiones internas y cuerpos de delegados en actores protagónicos insoslayables en la historia reciente de la clase trabajadora en Argentina. El cambio sustantivo en esta materia se producirá a partir de 1976, cuando el terrorismo de Estado tome como blanco privilegiado a estas organizaciones de base y por medio del genocidio consiga su prácticamente total aniquilación. Un desarrollo analítico de esta temática puede encontrarse en James (1981, 1988), Doyon (1984, 1977), Gilly (1990), Jelin (1975), Torre (1974), Schiavi (2008), Schiavi y Ceruso (2010), Basualdo (2008), Ghighliani y Belkin (2010).

[19] Un ejemplo fue la creación del Movimiento nacional por las Seis Horas, impulsado por el Cuerpo de Delegados del subte y distintas organizaciones de trabajadores desocupados para demandar la reducción de la jornada laboral promedio de 8 a 6 horas como un modo de generar puestos de trabajo en un contexto de alta

colectivas de formas de protesta típicas de los movimientos (piquetes, intervenciones artísticas, articulación con medios comunitarios, etc.).

A lo largo de su trayectoria, que lleva ya más de una década y media, el proceso de organización colectiva ha asumido diferentes configuraciones, que también podemos denominar *momentos político-organizativos*, conceptualización que nos permite desplegar una somera descripción analítica del recorrido ascendente de esta experiencia.

El momento inicial, de surgimiento incipiente de los primeros nucleamientos colectivos, se caracterizó por un activismo dinámico pero disperso, impulsado fundamentalmente por unos pocos trabajadores con alguna trayectoria militante, que llevaron adelante el trabajo político de intentar generar los primeros encuentros colectivos en un marco de *clandestinidad*, tanto frente a la empresa como al sindicato. Al contrario de una interpretación bastante generalizada, que indica que los procesos de activación política generalmente son promovidos por los trabajadores con más trayectoria, en este caso fueron los trabajadores jóvenes –considerados a priori por la empresa como más sumisos y dóciles por su inexperiencia laboral– quienes se transformaron en el núcleo dinámico que impulsaba la organización colectiva; los trabajadores más antiguos e históricamente sindicalizados se mostraban aplacados por las secuelas subjetivas (miedo, desmovilización) que la reestructuración privatizadora les había dejado.

Respaldadas por las pequeñas redes que se fueron conformando a partir de este trabajo político, se gestaron las primeras acciones colectivas que devinieron en los primeros conflictos abiertos post-privatización. En esta etapa que, recuperando una definición de los propios delegados, podemos nombrar como *foquismo*, el nivel de dispersión entre los activistas de los distintos sectores y los delegados independientes era muy alto y esta falta de organicidad implicó que la metodología de lucha se basara en acciones disruptivas de gran impacto, producidas fundamentalmente por el grupo acotado de los militantes más activos, que luego lograban acoplar al resto de los trabajadores. En la medida en que fueron desarrollándose exitosamente las primeras acciones reivindicativas, el cuerpo de delegados comenzó a ganar terreno en la disputa por la representatividad en desmedro de la legitimidad del sindicato oficial y fue posicionándose como un interlocutor imprescindible en las negociaciones tanto con la empresa como con las distintas dependencias del Estado.

---

desocupación, a la vez que mejorar la calidad de vida de los trabajadores ya ocupados.

Los recursos que la organización fue desplegando a lo largo de su crecimiento le permitieron alcanzar notorias conquistas, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Entre ellas se destacan el destierro del despido como mecanismo disciplinador, el incremento sustantivo y sostenido del salario promedio, la reducción de la jornada de trabajo, la incorporación de nuevos derechos para las mujeres trabajadoras, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la reversión prácticamente total del proceso de tercerizaciones en el sector. De esta manera, la consolidación y el ascenso de la organización colectiva en el espacio de trabajo forzó una notable redistribución del poder dentro del espacio de trabajo que permitió desandar el modelo de relaciones laborales impuesto tras la privatización.

Una vez alcanzado el momento institucional, comienza a profundizarse un proceso de *autonomización política* por parte de la organización de base, signado por un quiebre progresivo con la estructura del sindicato. Este distanciamiento político paralelo al crecimiento de la organización de base, finalmente derivó en la reciente creación de un nuevo sindicato por parte de los delegados. La creación y el reconocimiento estatal de esta nueva institución fue por demás trabajosa y conflictiva, reavivando fuertemente el viejo debate acerca de la conveniencia y legitimidad del modelo del unicato (representación sindical única por rama de actividad) vigente en la Argentina y que se ve cada vez más desafiado por el surgimiento de experiencias similares a la que retratamos, que no encuentran lugar –la mayoría de las veces son combatidas por las direcciones– en la estructura sindical tradicional.

Finalmente, esta discusión cobra relevancia en la coyuntura nacional actual, en la cual por un lado la institución sindical sigue sumida en una profunda crisis de representación y legitimidad, y al mismo tiempo la recuperación extraordinaria del mercado de trabajo en los últimos años vuelve a colocar a los asalariados como sujetos políticos protagónicos de la conflictividad social.

6. Conclusiones

A lo largo del presente trabajo hemos analizado el contexto histórico de emergencia y las principales características de tres experiencias de lucha claves para entender los procesos de resistencia desde los sectores populares a la ofensiva neoliberal en la década de los noventa y principios del nuevo siglo, que en la Argentina se manifestó con particular virulencia y vertiginosidad.

El avasallamiento del trabajo supuso un grave proceso de deterioro social, pero a su vez dio lugar al surgimiento de expresiones de resistencia innovadoras, de

gran potencia política. Se trata de experiencias que resignificaron viejas tradiciones combativas de los sectores populares, al mismo tiempo que innovaron incorporando nuevas formas de expresión, de organización y nuevas consignas reivindicativas fuertemente actuales en esa época, es decir, con una lectura política ajustada a la especificidad del contexto social en el que se desarrollaron. El surgimiento y la consolidación de estas experiencias permitió que la movilización social pudiera fijar un límite al avance del programa neoliberal, impidiendo que se profundizara aún más en sectores estratégicos de la sociedad, como la educación y la salud.

Frente al grave deterioro del empleo y la degradación política de la institución sindical, el protagonismo de la protesta social estuvo a cargo de los denominados "movimientos sociales", encabezados por las organizacioes de trabajadores desocupados, articuladas a lo largo de todo el país. Como dijimos, estas organizaciones, que mixturaron en clave territorial diferentes tradiciones de acción política e ideológica, fueron un actor fundamental para instalar el problema de la exclusión como estructural, y a partir de su capacidad de incidencia obligaron a plantear estrategias de posicionamiento frente a sus demandas, tanto al Estado como a los partidos políticos. Al mismo tiempo, dentro de la organización, la recuperación de la práctica política como forma de construcción permitió recomponer sentidos de existencia, encontrar nuevas herramientas para la acción y, en definitiva, constituir una nueva identidad. La relevancia política de estas experiencias quedó manifiesta también en su capacidad para fundar una suerte de nueva tradición de lucha, que incorporó definitivamente una serie novedosa de ideas y recursos a las formas de resistencia de los sectores populares, a las que se seguirá apelando y actualizando en otras coyunturas históricas.

A pesar del retroceso político general en el nivel sindical, junto con las experiencias territoriales tuvieron lugar algunas experiencias de lucha por parte de trabajadores asalariados que desafiaron la pasividad de las cúpulas sindicales hegemónicas, mostrando la posibilidad de una construcción gremial alternativa.

Por un lado, los trabajadores del Estado lograron edificar de a poco un modelo sindical alternativo al modelo tradicional ligado a la CGT y al partido justicialista. En el contexto general de posicionamientos dubitativos y participacionistas, ATE y la CTA implementaron una estrategia hegemónica, de tipo frentista, para enfrentar no únicamente los problemas circunscriptos al ámbito laboral, sino fundamentalmente los problemas sociales y económicos generales a los que conducía la puesta en práctica de las ideas neoliberales. El carácter eminentemente político y no corporativo de esta decisión, definida

por la articulación de demandas de trabajadores ocupados y desocupados, de vecinos, de cooperativistas, de representantes de pueblos originarios, de jubilados, etc., permitió que esta experiencia tomara un gran impulso y que en ese momento se posicionaran como líderes de la batalla contra el neoliberalismo en la Argentina. Esta lucha tuvo lugar no tanto en el nivel de las prácticas sociales concretas, sino claramente en la instancia ideológico-discursiva. ATE y la CTA construirán en esos años un poder simbólico tan grande que serán llamadas por varios sectores sociales a ser las organizaciones que encabecen la salida popular a la gran crisis de 2001-2002. Lo que efectivamente sucedió distó mucho de lo que entonces se imaginaba, pero las condiciones para este tipo de elucubraciones estaban sin duda establecidas.

Por otra parte, en el ámbito privado destacamos la experiencia de la construcción sindical de los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires. Este caso condensa varias de las principales problemáticas que aquejan al modelo sindical argentino y que en la actualidad –en un contexto de fuerte crisis de representación y legitimidad, y al mismo tiempo de recuperación del protagonismo de los asalariados en la conflictividad social– derivan en debates insoslayables. En esa línea, el monopolio de la representación en el marco del unicato, la oligarquización de las cúpulas dirigenciales en alianzas tácitas con las patronales, y la dinámica interna de los sindicatos, sumamente verticalista y con serios déficits democráticos (que determinan muchas veces una relación conflictiva entre las distintas escalas de la organización), aparecen como discusiones urgentes a la hora de pensar seriamente en las posibilidades de alcanzar procesos de renovación que relegitimen la política sindical.

Bibliografía

BASUALDO, E. (2006) *Estudios de historia económica argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI.

BASUALDO, V. (2008), "Los delegados y las comisiones internas en la historia argentina: una mirada de largo plazo, desde sus orígenes hasta la actualidad", *Cuadernillos de FETIA*, Buenos Aires, FETIA.

CAMPIONE, D. (1995) *Crisis y reforma del Estado*, Buenos Aires, Editorial Estudio.

DELFINI, M. y PICCHETTI, V. (2003) "De la fábrica al barrio y del barrio a las calles. Desempleo, acción colectiva y construcción de Identidades en los sectores populares", *6to Congreso Nacional de ASET*, Buenos Aires, Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo.

DIANA MENÉNDEZ, N. (2005) "ATE y UPCN: dos concepciones en pugna sobre la representación sindical de los trabajadores estatales", en Arturo Fernández

(comp.), *Estados y relaciones laborales: transformaciones y perspectivas*, Buenos Aires, Prometeo.

DIANA MENÉNDEZ, N. (2007) La representación sindical en el Estado: los casos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Tesis de Maestría, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, mimeo.

DOYON, L. (1984) "La organización del movimiento peronista, 1946-1955.", *Desarrollo Económico*, Vol. XXIV, Nº 94.

DOYON, L. (1977) "Conflictos obreros durante el régimen peronista (1946-1955)", *Desarrollo Económico*, Nº 67.

DUBAR, L. (1991) *La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles*, París, Colin.

DUHALDE, S. (2009) "La respuesta de los sindicatos estatales al neoliberalismo en Argentina (1989-1995)", *Trabajo y Sociedad*, Vol. XII, Nº 13.

EDWARDS, P. (1990) *El conflicto en el trabajo. Un análisis materialista de las relaciones laborales en la empresa*, Madrid, Ed. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ETCHEMENDY, S. (2001) "Construir coaliciones reformistas: la política de las compensaciones en el camino argentino hacia la liberalización económica", *Desarrollo Económico*, Nº 160.

GAUDEMAR, J. P (1991) *El orden y la producción. Nacimiento y formas de la disciplina de fábrica*, Madrid, Ed. Trotta.

GAUDIO, R. y THOMPSON, A. (1990) *Sindicalismo peronista, gobierno radical. Los años de Alfonsín*, Buenos Aires, Folios.

GIGHLIANI, P. y BELKIN, A. (2010) "Burocracia sindical: aportes para una discusión en ciernes", *Revista Nuevo Topo*, N°7, septiembre/octubre.

GILLY, A. (1990) "La anomalía argentina. Estado, corporaciones y trabajadores", en González Casanova, P. (comp.) *El Estado en América Latina: teoría y práctica*, México, Siglo XXI.

HALL, S. (1997) "Who needs identity?", en Stuart Hall y Paul du Gay, *Questions of cultural identity*, Londres, Sage.

JAMES, D. (2006) *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

JAMES, D. (1981) "Racionalización y respuesta de la clase obrera: contexto y limitaciones de la actividad gremial en Argentina", *Desarrollo Económico*, Vol. 21, N° 83.

JELIN, E. (1975) "Espontaneidad y organización en el movimiento obrero", *Revista Latinoamericana de Sociología*, Buenos Aires, ITDT.

LEVITSKY, S. (2005) *La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista, 1983-1999*, Buenos Aires, Siglo XXI.

MARTUCCELLI, D. y SVAMPA, M. (1997) *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*, Buenos Aires, Losada.

MONTES CATÓ, J. y CROSS, C. (2002) "Nuevas instancias de representación política de los sectores populares. El surgimiento de los piquetes como desafío a las formas de representación clásica", *II Jornadas Nacionales, Espacio, Memoria e Identidad*, Rosario.

OSZLAK, O. (2003) "El mito del estado mínimo: una década de reforma estatal en la Argentina", *Desarrollo Económico*, Vol. 42, Nº 168.

PICCHETTI, V. (2002) "Fábricas tomadas, fábricas de esperanza. La experiencia de Zanón y Brukman", en Enrique Carpintero y Mario Hernández (comps.) *Producción de realidad*, Buenos Aires, Ed. Topía.

RECALDE, H. P. (2003) *La tercera década infame. La legislación laboral*, Buenos Aires, Ediciones Corregidor.

SCHIAVI, M. (2008), "El control obrero de la producción durante el peronismo (1946-1955). Una primera aproximación", *Segundas Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios*, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires.

SCHIAVI, M. y CERUSO, D (2010) "La organización obrera de base en una época en transición: Las comisiones internas en los orígenes del peronismo (1936-1947). El caso de los textiles y los metalúrgicos", *IX Jornadas Nacionales y VI Latinoamericanas del Grupo de Trabajo Hacer la Historia*, Universidad Nacional Del Sur.

SENÉN GONZÁLEZ, S. y BOSOER, F. (1999) *El sindicalismo en tiempos de Menem*, Buenos Aires, Ediciones Corregidor.

SOMMERS, M. R. y GIBSON, G. D. (1994) "Reclaiming the epistemological 'other': narrative and social constitution of identity", en Craig Colhoun (ed.), *Social Theory and the politics of identity*, Londres, Blackwell publishers.

TORRE, J. C. (1999) "Introducción. Las reformas de mercado y el sindicalismo en la encrucijada", en Santiago Senén González y Fabián Bosoer, *El sindicalismo en tiempos de Menem*, Buenos Aires, Ediciones Corregidor.

TORRE, J. C. (1974), "El proceso político interno de los sindicatos en Argentina", Buenos Aires, Instituto Di Tella.

III / ESTADO Y PROYECCION POLÍTICA DE LOS SINDICATOS EN LA ARGENTINA

Arturo Fernández

1. Introducción

En el arco de las resistencias observadas en la Argentina el actor sindical cumplió históricamente un rol protagónico. Ese papel relevante como articulador de otras demandas sociales fue duramente golpeado durante la dictadura, retraído en los noventa especialmente por la tendencia de sindicatos importantes hacia una estrategia de acumulación de poder que los llevó a una práctica cercana a lo que usualmente se ha dado en llamar sindicalismo empresarial. Para comprender las potencialidades, límites y contradicciones de las formaciones sindicales en la fase actual de desarrollo desde una perspectiva socio-histórica de raigambre política, este capítulo está dirigido a contrastar las prácticas sindicales mayoritarias frente a dos etapas de gobiernos peronistas de orientación opuesta[1] y comprender el sustrato ideológico de los diversos nucleamientos sindicales. De 1989 a 1999 el presidente Carlos Menem impulsó reformas neo-liberales que pretendían situar la sociedad y el Estado argentinos en un mundo globalizado. La recesión económica y la crisis financiera de 2001 hicieron añicos ese proyecto y al gobierno de la Alianza UCR-FREPASO que gobernaba desde 1999. El propio Partido Justicialista se hace cargo del gobierno y reactiva la economía (Presidencia Duhalde), con el apoyo de un sector de la burguesía nacional. Sin embargo, a partir de 2003, los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, liderando el propio Partido Justicialista, desarrollan políticas industrializadoras y sociales opuestas al neo-liberalismo y próximas a los gobiernos sudamericanos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Uruguay surgidos de crisis idénticas a la del 2001, provocadas por la aplicación de las medidas sugeridas por el consenso de Washington, y de cambios en las preferencias electorales de la región.

[1] En este sentido el capítulo es complementario del anterior y recupera desde otra perspectiva algunos de los problemas planteados pero recorta su interés analítico en otras claves interpretativas cercanas a una lectura cupular de las formaciones sindicales y sus referencias ideológico-políticas.

Desde 1945, el sindicalismo peronista, mayoritario en la CGT argentina, tiene una vinculación legal con el Estado argentino, quien otorga la personería gremial a las organizaciones más representativas por rama de producción, localidad o empresa y gestiona los procesos de la negociación colectiva. Estas normas y la tradición de unidad en la CGT, iniciada desde su creación en 1930, explican que la central obrera fuese única hasta los años noventa, pese a la existencia de minorías sindicales marxistas y social-cristianas no peronistas. La novedad de los años noventa es la aparición y consolidación de una estructura nacional formada por sindicalistas de extracción peronista que consideraron agotado el modelo gremial creado por Perón: se trata de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que es minoritaria.

La perdurabilidad del justicialismo puede explicarse por la capacidad de la CGT de sortear diversos escenarios sociales sin perder cierta proyección política, conservando un apoyo mayoritario de los trabajadores representados. Una reseña de las décadas menemista y kirchnerista tiende a confirmar esta presunción; pero también las políticas económicas y sociales posteriores a 2003 han favorecido cierto resurgimiento de corrientes clasistas ligadas a partidos marxistas.

Para abordar los prolegómenos de la dinámica sindical, presentamos en primer término un sucinto resumen cronológico de las circunstancias socio-políticas sindicales previas a 1989[2]. Luego se trabajan de manera particular los realineamientos sindicales durante el menemismo, para concentrar la mirada en el último apartado sobre el reposicionamiento del MTA durante el kirchnerismo y los rasgos de la alianza estratégica entre la CGT y del partido gobernante hasta su ruptura.

2. El surgimiento de prácticas y tendencias sindicales peronistas en la CGT: participacionismo, negociación, confrontación y combatividad

Las crisis económicas y políticas cíclicas que se iniciaron en los años cincuenta y se repitieron hasta 1976, tuvieron una naturaleza estructural que hizo imposible encontrar una fórmula democrática para neutralizar el apoyo

[2] Este primer apartado está destinado en especial al público extranjero o poco especializado en cuanto contextualización general del probelma abordado en este capítulo

mayoritario relativo que las clases subalternas seguían dispensando al proscripto presidente depuesto Juan Perón y a su movimiento. Las crisis de 1957/58, 1962/63, 1966, 1970 y 1975 dieron lugar a planes de estabilización que deterioraban, al menos temporariamente, el salario real y el nivel de empleo, generando tensiones sociales no canalizadas por un sistema político bloqueado por la exclusión del peronismo y, después de 1973, por la generalización de la violencia y la debilidad del gobierno que sucedió al propio Perón, después de su muerte acaecida en julio de 1974.

El sindicalismo peronista jugó un rol significativo en esos años de historia nacional, marcados por una crisis de hegemonía social que se expresó en la debilidad de los gobiernos civiles y en los frecuentes golpes militares que se sucedían a sí mismos, sin lograr resolver ningún problema esencial. Doce presidentes ocuparon la Casa Rosada, con un promedio de permanencia de un año y siete meses entre 1955 y 1976.

El golpe militar de noviembre de 1955 intervino la CGT, proscribió a los dirigentes sindicales peronistas por millares y pretendió cambiar la estructura sindical. Sin embargo, la "resistencia", liderada por una nueva camada de jóvenes sindicalistas afines al peronismo, neutralizó los planes políticos-sindicales de la llamada "Revolución Libertadora". Se inició una etapa en la cual el sindicalismo peronista representó una oposición sistemática a todas las tentativas para encauzar el país por la vía de un desarrollo basado en la participación del capital extranjero. Asimismo, la CGT hostigó a los siete gobiernos que, entre 1955 y 1973, se sucedieron por la vía de elecciones con proscripción del justicialismo, o por la de golpes militares carentes de apoyo popular ; a su vez el sindicalismo sufrió duras ofensivas cívico-militares anti-sindicales en 1955-1957, 1959-1960, 1962-1963 y 1967-1968.

Desde el punto de vista sindical, la confrontación contra la dictadura de Pedro E. Aramburu condujo a conservar la mayoría de organizaciones sindicales en el Congreso Normalizador de 1957, convocado por la intervención militar. En tanto que la confrontación-negociación con el presidente Arturo Frondizi (1958-1961) permitió que la normalización efectiva de la CGT concluyese en marzo de 1961 con la recuperación de su control por las "62 Organizaciones peronistas", lideradas por la Unión Obrera Metalúrgica y su "hombre fuerte", Augusto T. Vandor. Para llevar a cabo su estrategia, la CGT usó las más diversas armas: la acción directa, la huelga general, la toma de fábricas y, al mismo tiempo, una actitud permanente de negociación con el Estado, con el fin de lograr que este cumpliese el rol de tutelar los intereses de los trabajadores. Sin embargo, la complejidad de este accionar fue dividiendo a los dirigentes sindicales peronistas en cuatro tendencias: los combativos anti-

capitalistas, los confrontacionistas que privilegiaban la lucha; los participacionistas que usaban la negociación, incluido el arreglo de todo tipo con las patronales y, en particular, con el Estado; y un sector mayoritario, adscripto al estilo de conducción de Vandor, que utilizaba alternativamente la negociación (a veces el arreglo) y la lucha. Esa división se manifestó con total claridad después de 1966.

La expectativa generada en el sindicalismo por la dictadura llamada "Revolución Argentina" se desvaneció al comenzar 1967. El gobierno reprimió el Plan de Lucha lanzado por la central obrera y la CGT quedó debilitada, con varios gremios intervenidos y con la destrucción total pendiendo como amenaza. La supresión de las paritarias y el deterioro del salario real fueron el corolario de esa batalla perdida por el sindicalismo.A partir de entonces, comienzan a cristalizar las tácticas y los esquemas de vinculación con el Estado anticipados anteriormente y que marcarán la vida sindical hasta nuestros días. Por un lado, un sector de sindicalistas se inclinó por intentar dialogar con el gobierno autoritario, negociando la supervivencia de la CGT y su posible integración al nuevo sistema político que Onganía imaginaba crear. Esa tendencia se denominó "Nueva Corriente de Opinión" o "participacionista". Por otra parte, se desarrolló un ala confrontacionista con peso significativo en algunos sindicatos nacionales y en las zonas más industrializadas del interior del país. Estas tendencias se expresaron en oportunidad del Congreso Normalizador de marzo de 1968 y el conflicto entre ellas condujo a la división del movimiento sindical. Dos meses después la escisión de la CGT quedaba formalizada: por un lado encontramos la CGT "de los Argentinos" (confrontacionistas y una minoría combativa) y, por otra parte, la CGT de Azopardo (vandoristas negociadores y participacionistas).

El ala confrontacionista-combativa contribuyó a crear un clima de movilización popular contra el régimen, sobre todo en el interior del país, lo cual condujo a los procesos de agitación social de Corrientes, Rosario, Tucumán y Córdoba de mayo de 1969. El paro general del 30 de mayo, declarado por las dos CGT, fue el producto de la exitosa acción confrontacionista-combativa, que asestó un duro golpe al gobierno de Onganía. Como resultado de estos hechos y retaceado el apoyo militar al presidente, este relevó al ministro de Economía al tiempo que prometía convocar a las comisiones paritarias. La CGT de los Argentinos se diluyó en la clandestinidad después de la detención de su secretario general Raimundo Ongaro. Entre tanto, la CGT de Azopardo fue puesta bajo tutela del Estado como consecuencia del asesinato de Vandor en junio de 1969. Pese a la intervención oficial y haciéndose eco del creciente descontento popular, el sector vandorista convocó un paro general para el

primero de octubre de ese año. Sin embargo, el gobierno consiguió que el participacionismo y una parte de los vandoristas levantasen el paro a cambio de la significativa ley de obras sociales que les otorgaba una sólida base económica a los sindicatos y la vaga promesa de rectificar la política económica. De este modo, la CGT, cuyo control compartían el vandorismo y el participacionismo, iniciaba el camino hacia su normalización..

Con la destitución de Onganía en junio de 1970, las Fuerzas Armadas comenzaron a buscar una salida política democrática a la explosiva situación generada por la primera etapa de la Revolución Argentina. Entretanto, se reunió el Congreso Normalizador de la CGT, el cual eligió un Consejo Directivo controlado por los vandoristas, contando con la presencia de los participacionistas. El secretario general electo fue José Rucci, apoyado por Lorenzo Miguel, secretario general de la UOM, y sobre todo por el General Perón. A partir de ese momento, julio de 1970, la CGT acomodó su accionar al del movimiento peronista y se recompusieron las "62 Organizaciones" como brazo gremial del justicialismo. No se pudo evitar la notoria oposición a esta estrategia movimientista, por una parte, del participacionismo que mantenía sus lazos con el gobierno militar, adosándose a su esquema político y por la otra, del sector denominado combativo, que exigía reivindicaciones económicas inmediatas y profundas. Durante el proceso electoral las divergencias mencionadas se atenuaron porque se impuso el proyecto político vandorista, apoyado por Perón, y los participacionistas se subsumieron en la línea de la conducción de la CGT. Fuera de ella quedarían menos de diez federaciones controladas por diversos grupos confrontacionistas y combativos, peronistas o adherentes a posiciones marxistas.

Después de 1973, la dirigencia de la CGT tuvo una nueva participación en el sistema de poder durante los gobiernos peronistas del período 1973-1976, frente a la que debió afirmar una cierta autonomía política, no exenta de conflictos. En un primer momento se alineó tras la conducción de Perón, manteniendo el pacto social y enfrentando atentados desatinados contra sus dirigentes. Después de la muerte del General Perón y ante el giro económico impreso por la influencia de José López Rega, durante la presidencia de Isabel Perón, la CGT jugó un rol determinante en la canalización de la agitación social que concluyó con el alejamiento en julio de 1975 del siniestro ministro de Bienestar Social y organizador del grupo paramilitar Tres A, y en el inicio de una escalada inflacionaria que destruyó los restos del pacto social impuesto por el gobierno justicialista. Entre agosto de 1975 y enero de 1976, Isabel Perón designó en el Ministerio de Economía y en el de Trabajo, a hombres próximos a la conducción sindical (Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf). En esa

coyuntura se advirtió claramente la impotencia sindical para lograr estabilizar la crisis económica y para mantener el nivel de ingreso de la masa asalariada, ante la enorme presión empresarial y la preparación de un nuevo golpe clerical-militar.

Por otra parte creció la contestación de las bases radicalizadas, influidas por las posturas del peronismo combativo o por ideologías clasistas, marxistas, trotskistas y otras. Frente a esta corriente contestataria, la cúpula cegetista apeló a la manipulación antidemocrática o a la represión directa o indirecta de los militantes maximalistas y no violentos. Esas prácticas, llevadas a cabo en el gran Rosario y en Córdoba, aumentaron el desprestigio de la conducción de la CGT. El golpe de 1976 justificó su accionar en la lucha contra la corrupción sindical y se dedicó a eliminar físicamente la emergencia de dicha corriente clasista y combativa, aprovechando la confusión o la indiferencia de la dirigencia sindical mayoritaria. El gobierno de la viuda de Perón había producido la anomia del sindicalismo, cada vez más fracturado, burocratizado y cuestionado desde adentro del movimiento obrero y desde el resto de la sociedad. Se abrió el camino a la dictadura militar más sanguinaria de la historia, la cual trató de imponer el orden social mediante el terrorismo de Estado.

Tantos años de oposición al sistema socio-político dominante habían dejado huellas indelebles en la cúpula sindical; entre ellas destacamos las tendencias a la burocratización (con signos de corrupción) y a la división. Por otra parte, la burocratización es negativa políticamente pero asegura la perdurabilidad de la estructura sindical. La división en tendencias no organizadas extremadamente flexibles les permite a los sindicatos peronistas mantener la unidad formal de la CGT y, al mismo tiempo, adoptar posiciones fluctuantes. Permanecen las prácticas y tendencias ya mencionadas con integrantes mayoritariamente cambiantes representados por: a) el participacionismo que salvaguarda la organización sindical y su relación con el Estado; b) la negociación por cualquier medio, a veces acompañada de resistencia sindical y política; c) la confrontación o resistencia mediante la lucha sindical y política; y d) el combate de tipo clasista.

Durante el llamado Proceso de organización nacional subsistió la CGT, pero en ella, participacionistas y confrontacionistas no lograron acordar sobre las tácticas a seguir para oponerse a la política económica de Martínez de Hoz. Por una parte, el ala confrontacionista reconstituyó la CGT, en diciembre de 1980, en abierto desafío a las normas de la Ley Sindical bajo la influencia del dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel, sucesor de Vandor y recientemente liberado por los militares. Saúl Ubaldini fue elegido para dirigirla, con el apoyo

de Miguel. Durante 1981, este nucleamiento retomó contactos con los partidos políticos, convocó a un paro nacional en julio y organizó el primer acto de oposición masiva al régimen tiránico en noviembre. Por otra parte, el ala participacionista estableció un diálogo no exento de complicidades y fricciones con las diversas conducciones políticas del Proceso que se sucedieron desde agosto de 1980 hasta junio de 1982. La CNT no adhirió al paro de julio de 1981 ni al plan de movilización pacífica, si bien estableció contactos con la el accionar de la Multipartidaria y durante la guerra de las Malvinas decidió reconstruir la CGT en la sede de la calle Azopardo. Ese diálogo con el gobierno militar le acarreó enorme desprestigio y ningún beneficio. Además la burocratización de la dirigencia sindical mayoritaria llegó a un grado extremo, porque las bases sindicales (delegados de fábrica, comisiones internas) fueron mucho más reprimidas por las fuerzas armadas que las cúpulas cegetistasy casi dejaron de funcionar entre 1976 y 1982. Finalmente, la pérdida de valor del salario real y el incremento del desempleo entre 1976 y 1982, desacreditaron a los dirigentes sindicales en el área específica de su accionar, en la cual habían tenido éxito significativo hasta 1975. Desde 1976 se instaló la corrupción estructural en la Argentina y se demolió al estado de derecho existente hasta entonces, contaminando a todos los actores sociales.

Aun así, el peso político de los sindicalistas peronistas y el vacío de liderazgo en ese movimiento político condujeron a un avance del poder sindical dentro del justicialismo, que generó rechazo en las clases medias. Los candidatos peronistas en las elecciones de 1983 fueron definidos por la conducción de la CGT, dependiente de la autoridad sin carisma de Lorenzo Miguel. Sin el apoyo de una parte de esos sectores medios e independientes, ningún partido obrero occidental puede ganar las elecciones generales y tampoco lo pudo el peronismo. El triunfo de la Unión Cívica Radical, dirigida por Raúl Alfonsín, confirmó esta regla y señaló los límites de la influencia sindical en el nivel político.

Pese a sus divisiones internas, que trascendían aspectos tácticos y oponían modelos económico-sociales diferenciados, el grueso del sindicalismo desempeñó prácticas políticas significativas durante la transición democrática iniciada en 1983. El grueso del sindicalismo justicialista, en el nivel nacional, asumió la derrota electoral de 1983, dedicándose a preservar sus organizaciones, evitar la embestida del gobierno de Alfonsín y ratificar su hegemonía corporativa en las elecciones sindicales de 1984. Para ello se reunificó, oponiéndose con éxito a la Ley Sindical propuesta por el Ministro de Trabajo Mucci, gremialista radical, destinada a atomizar el movimiento sindical. Al mismo tiempo la CGT abandonó la arena política de primer

plano, actuando sin estridencias en la renovación interna del Partido Justicialista.

Luego, la organización sindical liderada por Saúl Ubaldini, participó de la mesa de concertación convocada por el gobierno radical a partir de 1984, constatándose la grave dificultad de acordar un pacto social consensuado con el Estado y las organizaciones empresariales. A partir de la imposición del plan Austral los intentos de concertación se diluyeron y se acentuó la acción opositora de la CGT hacia la política económica del gobierno alfonsinista. Los paros y las concentraciones masivas convocadas por la central obrera convirtieron a Ubaldini en la principal figura opositora, quizás por falencia de la dirigencia política del PJ. Una vez más, de forma indirecta, el sindicalismo transformaba al justicialismo en el portavoz de los sectores populares, duramente castigados por la prolongada penuria económica y por una elevada inflación que deterioraba gradualmente los salarios desde 1976.

En los dos últimos años de gobierno radical la CGT fue normalizada bajo la dirección de Ubaldini, apoyado por las tres tendencias internas que habían sido legitimadas por elecciones sindicales generales. El sindicalismo brindó su apoyo incondicional a la estabilidad democrática y, en consecuencia, repudió francamente los diversos motines militares que se sucedieron desde la Semana Santa de 1987, pese a las distancias que podían separarla del alfonsinismo. La conducción nacional de la CGT rechazó todo acercamiento hacia el golpismo "carapintada". Sólo pocos sindicalistas aislados de segunda línea mantuvieron contactos políticos asiduos con esa nueva forma de militarismo. Lo mismo sucedió con el conjunto del peronismo, lo que contribuyó al fracaso relativo de los intentos sediciosos. Otra actitud política significativa del sindicalismo en esos años fue la firme oposición de los sectores ubaldinista-confrontacionista y negociador a la política económica del alfonsinismo. Esa oposición contribuyó a deteriorar el Plan Austral y sus sucedáneos debido a las negociaciones paritarias exitosas de los metalúrgicos y de otros sindicatos grandes. La defección de la posición opositora del sector participacionista, que se incorporó al gobierno radical mediante el control del ministerio de Trabajo en 1985, pareció neutralizar la acción cegetista, y debilitar la estrategia seguida hasta entonces por la CGT.

Sin embargo, el triunfo de los justicialistas opositores en las elecciones de septiembre de 1987 generó la esperanza de que el peronismo desarrollase un plan económico alternativo y viable, diferenciado del sostenido por el radicalismo. En ese momento, el triunfo del Dr. Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires y su liderazgo nacional habían sido gestados por la política del sector confrontacionista y sus aliados de la CGT, pero es posible

que los "peronistas renovadores" no quisieran asumir esa "deuda" política implícita con el sindicalismo, temerosos de que el desprestigio de algunas figuras gremiales afectara sus chances electorales futuras. Estas diferencias político/sindicales facilitaron el ascenso del gobernador riojano Carlos Menem en la estructura partidaria justicialista y la extensión de su heterogénea alianza dentro de la CGT. El sector negociador se inclinó por el discurso basado en la justicia social y la afirmación nacional que predicó el Dr. Menem, cuya victoria en las elecciones internas del PJ en julio de 1988 significó un serio revés para la "renovación" peronista, de la cual no pudo reponerse. El caudillo riojano impuso su concepción movimientista, alrededor de su indudable carisma, postergando por tiempo indefinido la transformación del justicialismo en un partido político participativo y orgánico.

Los dirigentes cegetistas pudieron imaginar que el menemismo les devolvería un rol corporativo significativo en su esquema de poder. Sin embargo, desde la campaña electoral se observó que Menem compartía con algunos "renovadores" cierta desconfianza hacia el sindicalismo y pretendía atribuirle un rol subordinado al Estado y a su conducción política. Por otra parte, la derrota "renovadora" en el ámbito político no se trasladó al plano sindical. En 1988-1989 hubo muy pocas elecciones gremiales significativas en las que dirigentes tradicionales fueran desplazados por listas opositoras que rejuveneciesen las estructuras cegetistas; esos raros casos fueron, por ejemplo, el de los Trabajadores del Estado (ATE) y el de los empleados judiciales de la Nación.

3. Los sindicatos peronistas y el gobierno neo-liberal del Presidente Carlos Menem

A partir de la asunción del Presidente Menem, las presiones inflacionarias del bloque económico dominante forzaron su viraje a una política económica neoliberal en 1990. Su abandono de los principios justicialistas esenciales produjo actitudes políticas divergentes del sindicalismo. En principio una cierta resistencia abierta o encubierta a aceptar la disciplina partidaria condujo a la división de la CGT, hecho que no se había registrado en los anteriores gobiernos justicialistas, ni siquiera durante el turbulento mandato de Isabel Perón. Sin embargo, tal resistencia de la CGT fue menos activa y eficaz que la desplegada contra la dictadura o contra el gobierno radical, cuyos planes económicos fueron socialmente menos costosos que el implementado por el ministro de Economía del presidente Menem, Domingo Cavallo. Ello resulta

explicable por diversas razones. Una de ellas, la existencia de una identidad política común entre el presidente y la mayoría de los sindicalistas que se proclamaban justicialistas. Otra, el terrible impacto de la hiperinflación de 1989-1990, que destruyó las esperanzas en la aplicabilidad de modelos económicos alternativos al de los ajustes controlados por el Fondo Monetario Internacional. También vale anotar el grado de aceptación que conservó el presidente Menem, ratificado en las elecciones de 1991 y 1993 y la falta de proyectos políticos alternativos que ofrecieran a la sociedad un grado de credibilidad significativo; en fin, la prevalencia del "síndrome de 1975", derivado de la hipótesis de que la agitación sindical destruyó el gobierno constitucional de Isabel Perón, es decir que la dictadura de 1976 podría haber sido evitada con una cuota de mayor responsabilidad por parte de la dirigencia sindical.

A cambio de su apoyo a las medidas neo-liberales, la CGT recibió el respeto a su estructura y el manejo de sus obras sociales sin mayor control del Estado; más aún, los sindicatos de las empresas estatales privatizadas pasaron a ser accionistas minoritarios de los concesionarios privados, lo cual les permitió favorables negocios a la organización y a sus dirigentes. Asimismo las obras sociales se asociaron con empresas médicas pre-pagas lo cual incrementó su poder económico. Un sector de sindicatos evolucionó hacia un modelo empresarial que acentuó rasgos de burocratización que se habían iniciado en la década de los sesenta. Por otra parte, el creciente desempleo generado por el cierre masivo de industrias, el retroceso de las condiciones de trabajo por la aplicación de la flexibilidad laboral reducen el número de afiliados a los sindicatos y el interés por participar en ellos.La Unión Obrera Metalúrgica, el más poderoso sindicato desde los años cuarenta, se reduce a menos de la mitad de sus miembros, proceso que va a continuar hasta el año 2002. Ello explica "cierta resistencia" de los sectores participacionista y negociador, que dirigían la CGT desde 1990, al liderazgo de Carlos Menem. Por el contrario, en el ámbito político partidario fueron menos numerosos los dirigentes que se opusieron públicamente a las opciones personales del presidente Menem, convencido de que la opción neoliberal era la única posible. La excepción fue el grupo de ocho diputados que generó el Partido Frente Grande en 1992. Una pérdida creciente de influencia en las decisiones del Estado y del Partido Justicialista abarcó a todo el sindicalismo, incluidos los sectores que apoyaron casi sin objeciones el "pragmatismo menemista". Con la reestructuración ministerial de enero de 1991, el Ministerio de Trabajo dejó de ser dirigido por un gremialista y el número de legisladores de origen sindical continuó decreciendo.

La oposición sindical contra los efectos anti-sociales de la política neoliberal, semejante a la de 1976, condujo a la formación de dos nucleamientos críticos de la conducción de la CGT. En 1992 se creó el Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA) que cuestionó la vinculación CGT-Estado y el modelo sindical peronista, alejándose de la central sindical única y formando una organización alternativa. Esta agrupó sindicatos de empleados del Estado (ATE) y maestros (CTERA), duramente golpeados por la "reforma-desguace" del Estado impuesta por el neoliberalismo. Sus definiciones fundacionales le permitieron incorporar a sindicatos, seccionales, movimientos sociales reivindicativos diversos e individuos, con una estructura de amplio debate y selección democrática de sus dirigentes. Luego, bajo la conducción de Víctor De Gennaro (Secretario General de ATE) se fundó la Central de Trabajadores Argentinos, paralela a la CGT, la cual agrupó sectores confrontacionistas y combativos, los cuales fueron creciendo desde los años noventa. La CTA se constituyó en la primera organización que realizó movilizaciones contra el proyecto neoliberal desde 1994 y, aliada a otras agrupaciones sindicales, hostigó a los gobiernos de los presidentes Menem y De la Rúa por sus políticas económicas y sociales. Con la integración de desocupados y de su original movimiento de piqueteros, la CTA escribió una página novedosa en la historia sindical, lo mismo que la exitosa "Carpa Blanca" de los maestros que denunció la destrucción educativa neoliberal durante el segundo gobierno de Menem. La ilusión despertada por el gobierno de la Alianza UCR-Frente Grande duró pocas semanas en las filas de la CTA. El proyecto de crear un "Partido de los Trabajadores", semejante al brasileño, se incubó entre sus componentes heterogéneos, sobre todo después del colapso del modelo neoliberal a fines de 2001 y enero de 2002.

En paralelo con el surgimiento de la CTA, otro nucleamiento sindical nació en esos años. En 1994, el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) se propuso "reconquistar" la CGT para una línea confrontacionista consecuente con la tradición ideológica peronista de justicia social. Con la conducción de Hugo Moyano (Camioneros) y Juan M. Palacios (Transportes), esta parcialidad abarcó un tercio de los sindicatos que formaban la CGT y, en 1996, tras la exitosa huelga unitaria del 8 de agosto, consiguió que el Secretario general Gerardo Martínez (Construcción) convocase un Congreso de la CGT que promovió a Rodolfo Daer (Alimentación) para dirigir la central sindical, ubicando a Palacios como Secretario adjunto. En poco tiempo esta alianza se resquebrajó, pues el secretario Daer no fue más allá de la defensa de las obras sociales y no rompió con el gobierno menemista. A su vez el MTA no abandonó la CGT. Luego Moyano y Palacios apoyaron la candidatura del Dr. Eduardo Duhalde, quien prometía apartarse de la convertibilidad monetaria,

pieza clave del modelo neo-liberal, e iniciar una política industrialista. Luego el MTA lideró la lucha contra la ley de Reforma laboral que el gobierno de Fernando De la Rúa dictó para reforzar la flexibilización, impuesta de hecho en la década anterior pero cuya sanción legal era reclamada por la patronal y por el Fondo Monetario Internacional. El escándalo que desató la presunta "compra de votos" de senadores justicialistas condujo a la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez y marcó el principio del fin de la frustrada experiencia aliancista (2000).

Las elecciones presidenciales de 1995 habían acentuado las divisiones políticas entre la CGT, que apoyó la candidatura del presidente Menem, y el MTA y la CTA que, oficiosamente, respaldó la postulación del FREPASO, es decir la fórmula José O. Bordón-Carlos Álvarez. La reelección de Menem, obtenida con más del 50% de los sufragios, alentó un replanteo en el interior de la CGT, que condujo a la convocatoria a un Congreso que reemplazó al secretario general, el petrolero Antonio Cassia, visualizado como demasiado subordinado a la conducción menemista, por Gerardo Martínez (Construcción), apoyado por las "62 Organizaciones". Su sustitución por Rodolfo Daer (Alimentación), en septiembre de 1996, profundizó cierto rechazo de las políticas neoliberales y le permitió a la CGT bloquear el desmantelamiento del sistema de obras sociales deseado por el sector patronal. Fue y sigue siendo la existencia de prestaciones de salud la principal causa de la fortaleza de un sindicalismo debilitado en los niveles global y local. Esa fuerza se expresaba en el sostenimiento de una tasa de sindicalización de más del 30% de la PEA durante la década de los noventa.

La ineficacia del gobierno del presidente Fernando de la Rúa para salir gradualmente de la convertibilidad monetaria generó una alianza de sectores productivos industriales y rurales que tuvo repercusión en las principales figuras políticas peronistas, radicales y del Frente Grande. Entonces se puso fin a la presidencia de un dirigente deslegitimado por las elecciones de octubre de 2001. La forma poco prolija de forzar la renuncia de De la Rúa fue "reparada" porque el Parlamento terminó eligiendo a Eduardo Duhalde, la cabeza política de dichos sectores productivos, con el apoyo del radicalismo alfonsinista y la gran mayoría de los gobernadores.

El período de confrontación social generalizada entre fracciones del poder económico y entre los sectores socialmente incluidos y los excluidos generó un período de alta volatilidad e inestabilidad. La banca y las empresas privatizadas demandaban la dolarización para mantener una economía abierta al mundo. Duhalde nombró como ministro a Roberto Lavagna, economista heterodoxo

que acordaba con una cierta protección de la industria nacional, logrando que la economía comenzase a reactivarse a partir de julio de 2002.

4. Los sindicatos peronistas y los gobiernos de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner

Los partidos en estado de crisis y los políticos desprestigiados debieron convocar a elecciones anticipadas en 2003, con una gran dispersión de candidatos y de electores. Fue significativo que el ex-presidente Menem obtuviese la primera minoría con 25% de sufragios y que el candidato apoyado por el presidente Duhalde, el gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner, llegase a la segunda vuelta con un magro 22%. El rechazo de los sectores medios a la figura del líder riojano hizo posible que él abandonase la segunda vuelta y que Kirchner fuese ungido presidente. Una pequeña mayoría de los votantes había elegido candidatos partidarios de la política económica iniciada por el ministro Lavagna.

Desde mayo de 2003 sólo presidencias decisionistas podían gobernar una sociedad desorientada y fragmentada mediante una política económica y social que restableciese la regulación del Estado y la restauración del Estado de derecho, seriamente dañado desde 1976. Las opciones económico-sociales que se adoptaron entonces abrieron una compleja lucha contra intereses concentrados nacionales e internacionales (el sector financiero y las empresas privatizadas, entre otros). A algunos grupos se les hicieron concesiones y a otros se los limitó severamente. Afrontar esta tarea condujo al presidente santacruceño y a su esposa y sucesora, Cristina Fernández, a conflictos con diversas corporaciones que ejercen poder económico e ideológico en el país.

El presidente Kirchner, en 2004, decretó la abolición de la reforma laboral, se acercó a Hugo Moyano y presionó para que, entre 2004 y 2005, el líder camionero fuera ungido secretario general de la CGT. Asimismo se decretó el aumento del mínimo salarial y su ministro de Trabajo Carlos Tomada restableció las negociaciones colectivas anuales, fomentó la real aplicación del derecho del trabajo y reconstruyó un sistema de inspección laboral que había sido destruido en los años noventa. El aumento del empleo fue notable entre 2003 y 2008 debido a la política de reindustrialización alentada desde el gobierno. No habiendo un pacto social claro, esta política económica y social granjeó apoyos de los sectores subordinados beneficiados que permitieron el

desplazamiento del duhaldismo en los comicios de 2005 y el fácil triunfo de la esposa de Kicchner en las elecciones presidenciales de 2007; asimismo ellas produjeron crecientes resistencias en diversos grupos de poder económico y cultural que se movilizaron desde 2008.

Podemos constatar que las diversas tendencias sindicales acentuaron, antes y después de 2003, ciertos caracteres de su proyección política histórica. La corriente participacionista dirigió la CGT-San Martín y luego la CGT reunificada desde 1990 y conservó un rol dirigente significativo hasta el año 2004; al acentuar sus rasgos de "vinculación corporativa" con el Estado durante los años noventa, acarreó una pérdida de credibilidad política dentro y fuera del justicialismo. En su seno se encontraban figuras sindicales que recibían fuertes cuestionamientos que trascendían su comportamiento político, siendo objeto de un repudio generalizado hacia sus personas. El caso del dirigente Jorge Triacca (que fue ministro del primer gobierno del Dr. Menem) fue el más conspicuo de una corriente en la que se alinearon sindicatos que lograron un rol empresarial creciente, en conformidad con el modelo neoliberal; concluyó su vida como socio del exclusivo Jockey Club. La derrota electoral del Dr. Menem en 2003 suscitó divisiones y reacomodamientos en el interior de esta corriente, que permaneció en la CGT reunificada. En 2004-2005 el participacionismo perdió el control de la CGT, la cual quedó en manos de Hugo Moyano y el antiguo MTA confrontacionuista, con el apoyo del presidente Kirchner. Recién en 2008 se produjo su reaparición formal con la creación de la CGT Azul y Blanca que se alejó sólo de la conducción de la CGT. Esta fracción es el brazo sindical del peronismo disidente, surgido tras el conflicto entre el gobierno y la mesa de enlace agropecuaria[3] en el primer semestre de 2008. Sin embargo, grandes sindicatos participacionistas (Luz y Fuerza, Comercio, Personal Civil de la Nación...) permanecieron en la CGT y volvieron a su dirección en 2012.

La corriente sindical negociadora, encarnada por la Unión Obrera Metalúrgica[4], intentó vanamente fortalecer y ampliar su vinculación estructural con el partido Justicialista durante los años noventa, tratando una y otra vez de revitalizar "las 62 Organizaciones", como rama política del sindicalismo peronista. En 1995 esta vertiente recuperó influencia en la conducción de la

[3] Este sector está ahora liderado por Luis Barrionuevo (del sindicato de gastronómicos), y se mantiene ligado al ex vicepresidente Dr. Eduardo Duhalde por su común oposición política hacia el gobierno actual,

[4] Antes y después de la muerte de su secretario general Lorenzo Miguel

CGT, tomó distancia de las corrientes afines al menemismo, llegó a aliarse con el MTA[5], y apoyó la candidatura presidencial del Dr. Eduardo Duhalde en 1999 y, luego, la de Néstor Kirchner Por su poder de negociación con las cúpulas partidarias, incluso con la "menemista", siguió siendo el sector sindical más influyente hasta el 2004. Desplazado de la dirección cegetista por la fuerza del sindicalismo de servicios, liderado por el sindicato de Camioneros, el sector negociador se mantuvo aliado a esa corriente, fue favorecido por la revitalización industrial, iniciada en 2002 y se fortaleció durante el gobierno de "los Kirchner". En 2012, ante el conflicto entre el Secretario de la CGT Hugo Moyano y la presidenta Cristina Fernández, este sector, apoyado por el participacionismo de la CGT y del confrontacionismo que abandona a Moyano, consiguió nombrar secretario general de dicha CGT al metalúrgico Antonio Caló.

La corriente confrontacionista formó el mencionado MTA[6], y fue la expresión de la reacción del gremialismo cegetista y peronista contra las políticas neoliberales; se convitió en la fuerza numéricamente más importante que predicó la defensa de la producción nacional durante los años noventa. Carente en esa época de presencia estructural partidaria de significación, esta corriente sindical quedó aislada de la conducción del justicialismo que apoyaba al gobierno del Dr. Menem. Luego, el fracaso electoral de Saúl Ubaldini[7] le significó un duro revés político que condujo a la búsqueda de una reubicación dentro del sindicalismo, buscando alianzas con las posturas de la corriente negociadora y también con la CTA desde 1995 hasta el fin de la convertibilidad. En las elecciones de 2003 el MTA apoyó la candidatura del Dr. Adolfo Rodríguez Saá, un reflejo de la dispersión del voto peronista y de la desorientación de los diversos sectores sociales en un escenario de fragmentación política. La alianza con el gobierno del Dr. Néstor Kirchner se produjo cuando el presidente electo ratificó una política económica heterodoxa, lo cual allanó la elección del líder del MTA como secretario general de una CGT formalmente unida un año después (2005). La sólida política laboral del gobierno nacional iniciada en 2003 legitimó al dirigente camionero frente a la mayoría de las organizaciones sindicales. Sin embargo,

[5] También promovió al dirigente del Sindicato de la Alimentación Rodolfo Daer como secretario general de la CGT

[6] Estaba conducido por el secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano.

[7] Antes había sido desplazado de la conducción de la CGT en 1990.

sus pretensiones de mayor presencia política del sindicalismo, reclamada en 2011 y desoída por la presidenta Cristina Fernández, inició una escalada de confrontaciones políticas y sindicales con su gobierno. Reelecta con 54% de votos, la líder del justicialismo consiguió una amplia mayoría cegetista que desplazó al líder camionero, abandonado por parte de sus seguidores confrontacionistas: este conserva su rango de secretario general y el edificio de la calle Azopardo y no ha roto sus lazos con la CGT, como ya sucediera en anteriores conflictos.

Por último, el sindicalismo combativo está configurado por diferentes corrientes no peronistas, algunas incluidas en la Central de Trabajadores Argentinos y otras integradas a partidos clasistas marxistas; además se nutrió de desocupados que se organizaban en los años noventa y, después de 2003 y de comisiones internas de trabajadores radicalizados. Su renacimiento actual es el producto del ambiente democrático que se instauró después de 1983 y del mejoramiento de la situación laboral en los años posteriores a 2003. La mayoría de la CTA parece inclinarse políticamente, por ahora, hacia el Frente creado por el partido Socialista que gobierna la provincia de Santa Fe.

5. Conclusiones

La organización gremial promovida durante el peronismo continúa vigente hasta nuestros días pese a dos décadas de gobiernos peronistas de signos contradictorios. Tratamos de explicar la génesis, desarrollo y comportamientos recientes de nucleamientos o tendencias sindicales que representan diversos intereses e ideologías que conviven en la Confederación General del Trabajo y en el peronismo.

Las relaciones de los mencionados nucleamientos con el Estado fueron cambiantes y conflictivas pero estrechas. Por un lado, el Estado tendió permanentemente a limitar la autonomía sindical, sea en gobiernos democráticos o dictatoriales, anti-peronistas o peronistas; mientras un sector del movimiento obrero siempre propugnó conservar un cierto grado de independencia frente a cualquier forma de poder estatal. Lo mismo sucedió dentro del movimiento peronista y, en particular, en las relaciones no siempre fluidas entre los sindicalistas y Perón. Este se encargó de impedir la consolidación del partido Laborista en 1946 y cortó las ambiciones de autonomía del dirigente sindical más importante de la época, el metalúrgico Augusto Vandor en los años sesenta. La ideología peronista interpretada por los gremialistas adquirió una forma de pragmatismo ubicuo, lo cual les

permitió aceptar la disciplina partidaria a partir de 1989. Esta característica ideológica quizás favorece una generalización negativa de los ciudadanos de la conducta ética de una parte minoritaria de los gremialistas pero permitió al movimiento obrero organizado sobrevivir en contextos sociales y políticos totalmente adversos o contradictorios. La principal obra organizativa del general Perón fue la CGT y, gracias a ella y a sus luchas, perduró el peronismo. Más aún, el nacionalismo justicialista y la desconfianza hacia las ideologías históricas del sindicalismo condujeron a una desvinculación del movimiento obrero argentino respecto de todas las "internacionales sindicales", por lo menos hasta los años setenta. Luego su vinculación con ellas es meramente formal y sin consecuencias políticas sustantivas.

Por otra parte, la influencia de la organización sindical como factor político es mayor que en cualquier país de América latina. Ello se debió a la relativa unidad de la CGT, la cual se mantuvo incólume pese a muchas vicisitudes sufridas hasta 1989 y en las dos décadas posteriores, quizás por la fuerza aglutinante de la ideología peronista ambigua, a las relaciones establecidas por los sindicalistas con otros grupos de poder económico y social y al *imperium* de la ley que, otorgándole personería gremial, obligó a los patrones a negociar con los representantes obreros, creando una nueva mentalidad que parece irreversible; en fin, la organización obrera contribuyó decisivamente a profundizar la democracia en el mundo, participando en los múltiples frentes de perfeccionamiento social junto con otros movimientos populares, y creó mecanismos que derribaron muros que dificultaban niveles mayores de solidaridad e igualdad. La Argentina no es una excepción a esta regla.

El bajo índice de aceptación que las encuestas reservan a los sindicalistas puede explicarse en parte por tendencias generales en las sociedades capitalistas contemporáneas. Sin embargo, en nuestro país, esa falta de prestigio gremial[8] se debe a una incansable campaña de descrédito iniciada en los años cincuenta, al romperse el pacto social impuesto por el peronismo clásico. Pese a ello subrayamos que el sindicalismo contribuyó de manera sustantiva a la transición democrática desde 1983, trascendiendo sus divisiones, contradicciones y debilidades. Ello se expresó por medio de su canalización de los conflictos sociales y de su interacción con los partidos y con el Estado, asumiendo las reglas de juego democráticas y manteniendo la convicción de que será posible un pacto social con el capital que la Argentina no ha podido

[8] Ella es comúnmente sostenida por la amplificación que hacen los medios hegemónicos en la opinión pública de algunos minoritarios pero notorios hechos de corrupción en el manejo de los recursos sindicales y/o de las Obras Sociales.

lograr. Puede preverse que este comportamiento no se alterará de manera significativa, si el Estado supervisa con éxito las relaciones laborales, tal como sucede desde el año 2003.

Bibliografía

Existen diversas obras de historia sindical argentina, generales o parciales, que desarrollan los temas que nos hemos permitido esbozar. Citamos sólo algunas de ellas, pero deseamos reconocer la enorme contribución de Santiago Senén González al conocimiento documentado y objetivo de la realidad sindical hasta nuestros días. El Centro de Documentación que lleva su nombre instalado en la Universidad Di Tella es parte de su obra y facilitará estudios rigurosos de la historia reciente. Senén González reconstruyó la historia sindical en varios libros anteriores y realizó una síntesis actualizada en la Colección Claves del Bicentenario. Ver "Breve Historia del Sindicalismo Argentino", de Santiago Senén González y Fabián Bosoer, Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 2009.

Otros autores:

BELLONI, Alberto (1960), *Del anarquismo al peronismo (Historia del Movimiento Obrero Argentino)*. Ed. La Siringa, Buenos Aires.

CAMPO, Hugo del (1984), *Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de una vinculación permanente*. CLACSO, Buenos Aires.

FIGARI, Claudia, LENGUITA Paula y MONTESCATÓ Juan (comp.) (2010), *El movimiento obrero en disputa*, Ed. Ciccus, Buenos Aires (en particular el capítulo de Montes Cató)

FIGARI C. y ALVES G. (2009), *La precarización n del trabajo en América Latina. Perspectivas del capitalismo global,* Ed. Praxis, Brasil.

La Colección "Biblioteca Política Argentina" del Centro Editor de América Latina (CEAL) publicó entre 1983 y 1985 varios trabajos sobre el sindicalismo que ayudan a comprender el origen de las tendencias sindicales peronistas descriptas; ellos llevan los números 27, 28, 36, 43, 44, 50, 53, 60, 71, 80, 85, 86, 97, 98, 101, 106, 107 y 113 de dicha colección.

IV / LA RESISTENCIA EN LA PRÁCTICA. MEMORIAS DE LA MOVILIZACIÓN DE LOS ASALARIADOS DE LA SUB-CONTRATACIÓN INDUSTRIAL[1]

Séverin Muller

1. Introducción

En los mundos del trabajo, la resistencia está a menudo asociada a prácticas conflictivas instituidas en registros militantes y sindicales. Desde ahí se integra al campo de las movilizaciones colectivas caracterizadas por acciones de luchas identificadas de organización de la defensa de los trabajadores y de los ciudadanos (Giraud, 2009; Reynaud, 1982). Por el contrario, la resistencia está disociada de la "movilización en el trabajo" que se corresponde con las técnicas gerenciales para implicar y ganar la adhesión de los asalariados de las empresas a los objetivos de sus dirigentes (Freyssenet, 1979; Linhart, 2005). En relación con estas dos formas de movilización, propongo demostrar de qué manera los asalariados de una fábrica de medicamentos se movilizan en los talleres y en las oficinas algunos meses después de su venta por el laboratorio Médika al sub-contratante Fabpharm[2]. La investigación se sitúa después de una fase de acción y de concertación sindical, en un momento en que los asalariados se encuentran confrontados a una revisión de las orientaciones gerenciales y productivas definidas por el nuevo propietario del grupo[3]. Las

---

[1] Una versión preliminar en francés fue publicado en Calderon y Cohen (dir.), *Qu'est-ce que résister? Usages et enjeux d'une catégorie d'analyse sociologique*, Presses Universitaires du Septentrion, Lille. Traducción Arturo Fernández. Corrección de estilo de Calderón. Agradezco a José Calderón y Valérie Cohen sus observaciones y los intercambios que hemos tenido y que me condujeron a revisar la primera versión de este texto

[2] Fabpharm poseía seis fábricas en Francia en el momento de la encuesta. Los nombres de las fábricas y de los lugares han sido modificados.

[3] El trabajo de campo realizado desde el 2007 a la primavera de 2008 se apoya en una veintena de entrevistas con diferentes categorías del personal, una presencia de un mes en la fábrica, escalonada en 2007, visitas y observaciones del trabajo en los

movilizaciones identificadas se organizan por fuera del campo de la negociación sindical, siguiendo la constatación hecha por Sabine Erbès-Seguin, según la cual todo no es negociable, en particular la definición de los objetivos que, en Francia, queda por fuera de la concertación formal entre dirección y sindicatos (Erbès-Seguin, 1999: 72-77). Se trata de comprender la dinámica compleja de esas movilizaciones a partir de la descripción de las prácticas asociadas a ellas. ¿Cómo emergen esas prácticas y cómo se pueden definir en función de sus intencionalidades y sus finalidades? Para reflexionar sobre los distintos registros de movilización en el trabajo, se toman en cuenta los obreros, categoría a menudo comprendida como resistente, y los cuadros dirigentes en una posición de dominación en la empresa. Estos adhieren a los objetivos conducentes a mejorar la rentabilidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo pero buscan actuar en sus espacios propios contra ciertas "derivas" estratégicas y gerenciales de la nueva dirección que amenazan sus status, sus condiciones de trabajo y de empleo y también el sentido que les atribuyen a sus actividades (Hatzfeld, 2011: 165-170).

Para apoyar la reflexión, nos quedamos con una definición bastante básica de la resistencia, que supone la existencia de una relación más o menos formalizada de dominación y de subordinación a la cual los individuos o los colectivos están sometidos. Resistir es entonces rechazar en acto y en consciencia someterse a un orden, a una autoridad o a una forma de dominación percibidos como abusivos. El problema de la cualificación de las acciones colectivas de los asalariados en términos de resistencia se plantea de entrada en el mundo de la empresa, puesto que la relación salarial es una relación de subordinación/dominación. Así, toda acción concertada de asalariados puede entonces leerse como una acción de resistencia en esa relación asimétrica (Bouquin, 2008: 42-43). Por ello, las prácticas de adaptación, de consentimiento, aún de asentimiento, son a veces definidas como "resistencia", y que consistirían en trabajar sobre sí mismo para aceptar las condiciones de trabajo degradadas (Linhart, 2009: 71-83) y para dar sentido a su estado de subordinación (Courpasson, 2000). En otra perspectiva, las formas identificables de regulación autónoma y de control (Reynaud, 1988), muy esclarecedoras para nuestro análisis, están generalmente disociadas de los

talleres y las oficinas y los documentos de la empresa. El trabajo de campo se inscribe en el marco de una investigación colectiva sobre los trabajadores de la industria farmacéutica coordinada con Pierre Fournier y Cédric Lomba (Anne-Marie Arborio, Isabell eFeroni, Jérome Greffion, Agnès Labrousse, Quentin Ravelli, Dilip Subramanian, Laure de Verdalle)

enfoques en términos de resistencia. Si las luchas sindicales son una forma de resistencia explícita, cómo podemos denominar las prácticas que se sitúan en otro plano, por ejemplo la adaptación a las imposiciones, el aprendizaje de un nuevo esquema normativo, la recomposición de los colectivos y la construcción o la afirmación de un sistema de valores (Calderón, 2008; Muller, 2005). La temporalidad de la investigación permite comprender los registros de la movilización de los trabajadores inscribiéndolos en la continuidad de una acción sindical que, aún terminada, hace posible la incorporación de grupos de asalariados a una relación de fuerza con su dirección, la cual va a tomar cuerpo en los espacios de trabajo, de manera más o menos difusa.

Más que caracterizar esas prácticas como actos de resistencia a priori, se busca comprender a través del proceso de su puesta en acción, las intencionalidades colectivas que le están asociadas (Cefaï, 2007: 528-529; Klandermans, 1984: 592-594) y sus efectos sobre el desarrollo del trabajo, antes de volver al tema de su cualificación, jamás unívoca. Se defiende aquí una perspectiva que consiste en caracterizar la resistencia como una práctica circunscrita que es preciso analizar en términos de proceso.

2. El pasaje a la sub-contratación y la fase de la acción sindical

La industria farmacéutica tiene la particularidad de estar regulada por el Estado que le asigna una misión de salud pública. En cambio, las empresas del sector se sitúan en un mercado protegido que les ha permitido desarrollar normas de calidad sofisticadas, en detrimento de otras exigencias, especialmente productivas (Muller, 2014). Hacia los años 2000, frente a la competencia de los medicamentos genéricos y para mantener un nivel de ganancias históricamente elevado, ciertos grandes grupos farmacéuticos deciden externalizar su producción, juzgada poco rentable. Es en este contexto que en febrero de 2005, los 900 asalariados de la fábrica de medicamentos de Fleurus en el norte de Francia, se enteran de que Médika, su casa matriz cuya sede está en Alemania, había decidido desprenderse de esa fábrica, debido a una serie de fracasos comerciales. Localmente, Médika tiene la reputación de ser una empresa "social"; se dice que es muy rica y con condiciones de empleo y de remuneraciones envidiadas en un territorio afectado por una desindustrialización masiva. Los asalariados, obreros y cuadros, en esos meses de rumores acerca del cierre, evocan el fatalismo que reinaba, ligado a la situación del empleo en el Norte, con familiares y conocidos que habían

experimentado o pasaban por el desempleo, el cierre de fábricas o las deslocalizaciones. A este período de "angustia cotidiana" (Snow, 1986) sucede el anuncio de la Dirección de un proyecto de compra de la fábrica por la sociedad Fabpharm, especializada en el acondicionamiento de medicamentos[4]. En noviembre de 2005, el acuerdo de compra es aprobado por unanimidad en reunión extraordinaria del comité de empresa.

> "En la región se está habituado al cierre de empresas y, finalmemente, saber que aquí se continuaba trabajando cuando se había pensado en otro cierre, además de tener un comprador fue un alivio. Pero se había creído que los laboratorios estaban al amparo de despidos. Esto representó una sorpresa. Y uno se dice que en otros lugares es peor" (una obrera de embalaje).

Cuando la compra pasa a ser efectiva en mayo de 2006, un sentimiento de alivio, mezclado con el de inquietud, anima a los asalariados: alivio al saber que la fábrica no cierra sus puertas y que ellos van a conservar sus empleos en el lugar; inquietud por un cambio de status que los deja en manos de la sub-contratación, mal considerada en el mundo farmacéutico tanto en el nivel de la gestión de personal como de control de la calidad. La operación de compra no concierne de hecho más que a la fábrica de producción, que emplea 395 asalariados sobre un total de 900. El edificio administrativo, así como su personal, permanecen vinculados a Médika. El acuerdo de compra establece también un plan de formación de 45 asalariados (previo a su despido por motivos económicos) y el mantenimiento en la fábrica de otros 345. Entre estos últimos el 43% son obreros (149 sobre 345), 38% son técnicos (133) y 10% cuadros, jefes de servicio y mandos superiores (34). Entre estos últimos 18 son farmacéuticos, cuya presencia proporcional al número de trabajadores, está reglamentada por el Código de salud pública. La mayor parte de los asalariados (293) tienen una antigüedad mayor a los siete años[5]. Las perspectivas de empleo a mediano plazo están garantizadas por un compromiso contractual de Fabpharm en el sentido de mantener los empleos durante cinco años gracias a un acuerdo sobre la venta de sus producciones a Médika durante el mismo período. Este acuerdo da tiempo a la fábrica para diversificar sus productos y para obtener nuevos clientes, ahí donde Médika hubiera encontrado dificultades para encontrar rápidamente otras unidades de

[4] El acondicionamiento es un eufemismo empleado en el medio farmacéutico para designar la sub-contratación de la producción de medicamentos.

[5] Fichero del personal de Fabpharm (2007)

producción capaces de fabricar medicamentos altamente activos, tales como los contraceptivos orales y los tratamientos hormonales sustitutivos.

No es sino en el otoño de 2006, cuando el cambio de convención colectiva debe entrar en vigor, que se inicia una fase de acción sindical. Su punto culminante es una jornada de paro siguiendo la convocatoria de la CGT mayoritaria y de la UNAS (pero sin el apoyo de la CFDT) que moviliza un centenar de asalariados, principalmente en los talleres de producción. Las reivindicaciones se refieren al mantenimiento del décimo tercer mes, a las primas, a la mutual familiar y a la organización del tiempo de trabajo. En algunos días de movilización las organizaciones sindicales consiguen obtener una respuesta favorable a la exigencia de mantenimiento de los niveles de remuneraciones. En cambio, se comprometen a firmar un acuerdo sobre la modulación del tiempo de trabajo que establece 212 días trabajados en lugar de 192 así como una reorganización de los equipos en 3'8 en lugar de 2'8. Por último, las organizaciones sindicales aceptan también un programa de individualización de la grilla salarial en el marco de una campaña de promoción interna prevista para la primavera o el verano de 2007.

Si la fase de negociación sindical se desarrolla sin mayores dificultades para la nueva dirección de la empresa (pese a la pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores) se debe al riesgo inicial de cierre de la fábrica, a los problemas del mercado local de empleo y a las capacidades financieras de la industria farmacéutica, las cuales le permiten "comprar la paz social", satisfaciendo las demandas salariales cuando ellas aparecen. Es alrededor de la definición de los nuevos objetivos de la producción, justificando la reorganización del tiempo de trabajo, que emerge otro período de movilización, esta vez en los espacios de trabajo. Puede situarse esa emergencia en diciembre de 2006 cuando el gerente general convoca al conjunto del personal a una "reunión de orientación estratégica", con un discurso percibido como una provocación.

> "Desde mi punto de vista, él quería provocarnos para que comprendiéramos que lo que estaba en juego era un cambio de cultura. Y es cierto que fue violento en el manejo de su lenguaje. Esta persona dijo: voy a hacerlos aprender a trabajar. Ustedes sabrán ahora lo que es trabajar. Entonces cuando usted dice eso a alguien que está en una línea de embalaje o de producción desde hace veinte años, este hombre se dice ¡qué barbaridad". (El director de producción).

En efecto, los resultados de la sub-contratación dependen directamente del mejoramiento de la productividad y de un uso óptimo de las líneas de

producción. La organización reposa ante todo sobre el flujo de producción tenso en plazos acortados. Entonces, cuando la modulación horaria se pone en marcha, la fábrica encuentra rápidamente problemas de calidad, mientras que los descontentos se expresan más abiertamente. Para la dirección de la empresa, estas dificultades están asociadas a la desmovilización de los asalariados y a la incompetencia gerencial de los farmacéuticos, quienes estaban mejor formados para el encuadramiento reglamentario que para la motivación de los equipos de trabajo. Para remediarlas, la dirección organiza una formación en "management" para "recentrar la gestión en torno al espíritu Fabpharm". Esta recuperación del control sobre las diferentes categorías de personal contribuye al desarrollo de un ambiente de malestar. Por motivos diversos que se relacionan tanto con la desestabilización de los colectivos de trabajo como con la puesta en cuestión de los status y de los valores profesionales en el nuevo marco, las diferentes categorías de personal se comprometen en estrategias de oposición a la nueva política de la empresa, según modalidades propias de cada tipo de trabajo.

3. Los obreros. Toma de conciencia colectiva de las capacidades de perjuicio de ciertas prácticas

En los talleres los efectos de la sub-contratación no se hacen esperar. En la primavera de 2007 la productividad del trabajo disminuye y todos los indicadores muestran una clara desaceleración. La tasa de rendimiento global (TRG), es decir el tiempo de funcionamiento productivo de los talleres pasa del 40% al 30%. Esta desaceleración puede estar asociada al frenado de la producción y, en esas circunstancias, pensamos más en una resistencia consciente por parte de los trabajadores que en una forma de juego para romper la monotonía (Burawoy, 1979; Roy, 1952). Esta desaceleración se explica también porque el tiempo consagrado al inicio de nuevas producciones viene siempre acompañado de pérdidas de materias primas, de errores de formulación y de un tiempo necesario de aprendizaje de los reglajes correctos de las máquinas. Durante este período, los lotes de productos más numerosos conllevan una multiplicación de las fases de limpieza para cambiar las presentaciones. El personal de producción se considera mal preparado y sometido a una presión productiva inadecuada al contexto: lanzamiento de campañas, aprendizaje de nuevos procedimientos, incertidumbre y tanteos. Pero es sobre todo la disminución de la tasa de información sobre los incidentes de la producción (paros técnicos) y la oposición a la utilización de personal eventual, que plantean centralmente el problema de la cualificación

de estas prácticas en términos de resistencia. La disminución de la tasa de información sobre los paros técnicos no parece en un primer momento una acción colectiva o concertada entre los trabajadores, sino más bien un resultado de la pérdida de porosidad de tiempos y de la intensificación del trabajo. Pero en cuanto la dirección constata el problema y así se lo hace saber a los obreros, culpándolos de negligencia, es entonces que dicha tasa se multiplica de modo exponencial. Así un dirigente de la empresa nos comentaba: "se les ha explicado y ahora todavía es peor, como si lo estuvieran haciendo a propósito". Esto contribuye sin duda a la toma de consciencia colectiva en cuanto a las capacidades de daño de la práctica, la cual se perpetúa entonces con una intencionalidad subversiva. En julio de 2007 ciertos obreros me explican que no se sienten respetados y, en ese sentido, no están dispuestos a expresar en su trabajo "buena voluntad". Esta oposición adquiere de hecho tintes de llamado a la "razón farmacéutica" y como una reafirmación de una ética profesional. Como las empresas de sub-contratación están obligadas a diversificar sus productos, es grande la tentación de hacer "todo lo que venga", es decir productos farmacéuticos pero también de para-farmacia o cosméticos. Si las fábricas se dedican cada vez menos a las producciones de una misma categoría, los procedimientos, cambiantes, se tornan más complejos. Es lo que aclara un obrero: "Es preciso en un mínimo nivel que las líneas estén dedicadas a un tipo de producto; en caso contrario no se podrán seguir las normas mínimas de calidad". Si los asalariados se oponen a producir "todo lo que venga", lo hacen porque esto traduce una degradación del interés por la calidad de la cual ellos se sienten los primeros responsables; el mantenimiento de un alto nivel de calidad es al mismo tiempo una garantía de mantenimiento de condiciones de trabajo y de empleo aceptables, así como de la cohesión de los grupos de trabajo.

Con el transcurrir de los meses los obreros empezaron a preocuparse en forma más generalizada de las "ineficiencias" del sistema productivo, las cuales representan una amenaza para sus condiciones de trabajo y para sus estatus, tal como lo precisa un obrero: "Se estaba antes en la casa matriz con las ventajas que derivaban de ello. Ahora uno se transforma en la última rueda del carro... Se ve claramente cómo sucede. Uno se siente más fragilizado y se nos mete más presión". Estas ineficiencias están asociadas a las características de la sub-contratación, más aún porque la dirección ha decidido reforzar el contingente de personal temporal. En el tiempo de Médika, un plan de control de calidad se había definido, uno de cuyos objetivos era limitar el recurso a la precarización. Sólo cinco trabajadores temporales eran empleados en Médika de conformidad con la reglamentación. En un contexto productivo más imprevisible, el número anual de trabajadores temporales creció

sensiblemente, pasando de 12 en 2006 a 114 en 2007 (con una duración media de contratos de 101 horas en lugar de 168 horas en 2006)[6]. En este marco veinticinco trabajadores temporales son reclutados por la agencia Manpower local que dispone de un "*auto-kit* de formación" considerado suficiente para las operaciones manuales. Más allá de las negociaciones que puedan existir entre sindicatos y direcciones en materia del empleo más o menos extendido de personal temporal[7] (aspectos sobre los cuales no dispongo de información), el recurso a la precarización que se hace en este caso, aún si es limitado y no representa una novedad en la industria farmacéutica[8], es un punto de focalización del descontento del personal estable. Los trabajadores estables perciben la llegada de trabajadores temporales como una degradación del valor acordado a la calidad del trabajo. La práctica discursiva que sustenta la oposición a la eventualidad se apoya en casos ejemplares y notoriamente conocidos dentro de la planta, de lo que sucedió en otras fábricas del grupo Fabpharm; la de Evron es oportunamente citada porque recientemente fue objeto de un cierre administrativo tras varios incidentes sanitarios. Si Evron es sancionada por la autoridad sanitaria de tutela (AFSSAPS), es sobre todo "porque existe una insuficiencia de personal cualificado, en Evron sólo hay dos titulares por línea y el resto son eventuales. No se pueden hacer las cosas de cualquier modo" (un agente de control).

Durante las discusiones se aprovecha para hacer un paralelo con la situación de la fábrica de Fleurus:

> "Los jefes de líneas (obreros calificados) deben aprender a gestionar equipos, lo cual no es siempre evidente. Es también por esas razones que se producen pérdidas. Hay que saber utilizar a los obreros según sus cualificaciones. Cuanto más obreros temporarios hay, menos conocés los equipos. Es lo que pasa en Evron porque «tiraron de la cuerda demasiado". (agente de mantenimiento, responsable adjunto del embalaje)

---

6 Balance social Fabpharm 2007, 25 de noviembre de 2008

7 José Calderón ha mostrado de qué manera las organizaciones sindicales y los obreros estables podían utilizar los asalariados precarios de formas ambivalentes (2008: 289-204).

8 C. Lardé (1983: 10-12) El autor describe las dificultades comunes encontradas en la fabricación de productos farmacéuticos en la fábrica Byla de Gentilly. El menciona al pasar el recurso a un grupo de trabajadores temporales de 60.000 horas anuales, especialmente para las producciones estacionales

Esas advertencias en relación con el nuevo modelo de producción y contra el recurso creciente a los trabajadores temporales, subrayan las amenazas que pesan sobre la cohesión de los grupos de trabajo. Estableciendo una relación directa entre la precarización y el imposible mantenimiento de unos niveles de calidad elevados y reglamentarios, los obreros reafirman (reifican en ese contexto) sus valores profesionales.

Mirándolo más de cerca, la movilización de los obreros se caracteriza aquí por la toma de consciencia de las capacidades de perjuicio de ciertas prácticas. En términos de graduación de prácticas, la baja de la productividad puede deberse tanto al nuevo contexto productivo como a formas activas de frenado de la producción. La disminución de la tasa de información de los incidentes es el reflejo en primer lugar de una adaptación a las nuevas obligaciones para transformarse luego en un acto de resistencia, subrayando así el paso de un "consentimiento limitado" (Goussard, 2008) de los asalariados a su compromiso en una acción contestataria para preservar una condición profesional (Béroud y Bouffartigue, 2009). La relación con los trabajadores temporales debe entenderse como una reafirmación del colectivo y de su ética laboral, reafirmación que permite encarnar una resistencia contra las orientaciones estratégicas redefinidas.

4. Los cuadros dirigentes. La puesta en cuestión de la resistencia de los sectores dominantes

Los farmacéuticos, en los puestos de dirección de los principales servicios, están confrontados a esas mismas tensiones entre productividad y calidad como consecuencia del pasaje a la sub-contratación, según las modalidades que son propias a su status y a su marco de actividad. Poco sometidos a la intensificación del trabajo y en situación dominante en la empresa, su modo de intervención es más directo. Si están de acuerdo sobre la necesidad de aumentar la productividad y la capacidad de reacción de la empresa, rechazan que todo ello se haga en detrimento de los usos reglamentarios de salud pública y de una misión, que hasta ahora veían como propia, centrada en el control sanitario. Al respecto, su incorporación al management productivo decidida por la dirección establece una ruptura con el período Médika. La separación entre "la gente de la producción" y los cuadros farmacéuticos era un hábito bien establecido. Los cuadros habían privilegiado durante largo tiempo un modo de organización autónomo de los equipos obreros y estaban poco dispuestos a recorrer los talleres. Esto se debe en parte al hecho de que

aprender a trabajar con los obreros era poco valorizado: la producción era considerada una actividad subalterna, ajena al control del laboratorio y al desarrollo médico al cual los farmacéuticos preferían aferrarse. La nueva "cultura" es entonces más difícil de interiorizar por cuanto trastoca los valores profesionales.

> "Antes la parte de la producción estaba separada de la jerarquía. Los cuadros dirigentes no iban a los talleres. Se informaban a distancia con los tableros de control y los indicadores. Pero cada uno estaba en su lugar. Y era parecido en el ámbito de fabricación, los trabajadores no querían ver a los cuadros. Yo iba a menudo. Al principio me decían ; Señora Levasseur ¿hay un problema ?. No, no, sólo vengo a ver. Bueno, ahora yo aviso antes de pasar. Pero es que los cuadros no han comprendido que lo que se les demanda es ser administradores, organizar equipos y, para ello, es preciso estar en el lugar de trabajo ». (La directora de recursos humanos).

Esta modificación de los usos no es aceptada sino en la medida en que su presencia en los talleres sirve para paliar las disfunciones de la producción. Esta nueva primacía dada a la dimensión productiva es claramente objeto de resistencia cuando la cabeza del grupo empresario designa al director de producción como nuevo director general. Durante la primavera de 2007 el cuestionamiento es fuerte entre los dirigentes farmacéuticos hacia su antiguo colega; cuestionamiento de su autoridad (lo que es habitual) pero sobre todo de la legitimidad de la producción para dirigir los asuntos farmacéuticos. Después de varios meses de fuertes tensiones, la empresa decide destituir a ese director y nombrar en su lugar, después de un período de interinato asegurado por la farmacéutica responsable del laboratorio de análisis, a una persona externa, cuyas competencias en materia de calidad eran reconocidas por los farmacéuticos (hizo su carrera como estadístico especializado en la calidad farmacéutica!). Durante este período, es la defensa de la trayectoria de los farmacéuticos y la reputación de los acondicionadores de medicamentos lo que los conduce a identificar una amenaza para sus saberes.

> "Yo lo viví como un fracaso (el pasaje a la sub-contratación). En tanto que farmacéutico, al principio tuve el sentimiento de decir: se va a perder la calidad o va ser más difícicil mantener nuestro nivel de calidad. Esto es el discurso del farmacéutico. Se pasa a la producción mecanizada, por lo cual necesariamente, en tanto que farmacéutico garante de la calidad, no llegaré a mantenerla y después será muy difícil" (farmacéutico, "nuevo" director de producción)

El ejercicio de auto-convicción corresponde sin duda a una fase preliminar de la construcción de consentimiento aplicada a los cuadros dirigentes (Burawoy, 1979). Por lo tanto, en ese contexto, ellos no están dispuestos a transigir sobre aspectos que pondrían en cuestión su misión farmacéutica o su deontología[9]; al tiempo los farmacéuticos se muestran vigilantes con respecto a la aparición de nuevos clientes con demandas y gamas de productos susceptibles de alejarlos de los criterios de calidad que hacen a la especificidad de la fábrica. Para tal efecto, los farmacéuticos crearon un "comité de ética" convocado durante las reuniones técnico-comerciales en las que la mayor parte de los dirigentes farmacéuticos estaban presentes. Las propuestas son formuladas por el farmacéutico/director comercial y examinadas colectivamente con el fin de apreciar la factibilidad de tal o tal producción y de definir aquello que es aceptable desde un punto de vista sanitario o ético. Las discusiones expresan las tensiones entre las lógicas comerciales y farmacéuticas pero también la perfectibilidad de la deontología.

Me presentaron varios casos que exponen los motivos de rechazo y los límites definidos por el comité de ética. Así es como dos clientes fueron rechazados por encargos de fabricación de pastillas efervescentes para la relajación de los pies y por tubos de Juvamine. Por un lado, dichos pedidos implicaban producir en gran escala según la lógica de la rentabilidad, y para ello era preciso utilizar los talleres y el personal habitualmente afectado a productos hormonales. Por el otro, la gama de los productos –cosméticos y de parafarmacia- fueron juzgados inadecuados según los criterios de calidad internos, poniendo directamente en cuestión la "primera vocación" de la fábrica. Otras tentativas de la dirección de la empresa consistentes en "hacer pasar" productos hormonales en zonas de producción no hormonales fueron asimismo cuestionadas. Se trata entonces de utilizar al máximo el medio de producción (ocupar un taller o una línea que no funciona a pleno) pero también reducir los costos de producción en detrimento de los riegos de contaminación: "Si se hace eso, la persona que tiene un cáncer va a terminar tomando un producto de consumo habitual, por ejemplo paracetamol. No hay discusión posible" (el farmacéutico responsable). Si estos ejemplos nos informan de las obligaciones y de las posibilidades de producción, al mismo tiempo traducen las presiones que se ejercen para ampliar las ventas en el

[9] Código de deontología de los farmacéuticos, art. R 4235-68, sección 2: "Deberes de los farmacéuticos ejerciendo en empresas y establecimientos farmacéuticos de fabricación y distribución al por mayor", Orden Nacional de farmacéuticos, marzo de 2006.

nuevo marco, el cual emana de la dirección del grupo empresarial, de servicios internos y de los clientes que consideran las posibilidades de hacer negocio asociadas a la sub-contratación. En consonancia con los obreros de los talleres, pero con medios de intervención más directos frente a la dirección, los farmacéuticos expresan la misma inquietud de un deslizamiento hacia lo que podría ser una actividad de acondicionamiento de medicamentos; del producir "lo que venga" y un respeto variable, por no decir laxo, de los criterios reglamentarios. En el momento de la investigación, el comité de ética tuvo éxito en hacer valer, frente a la dirección de la empresa, los intereses económicos –y estratégicos a mediano plazo- del mantenimiento de un nivel de calidad y de especialización garantizados como parte de la reputación de la fábrica en relación con sus clientes. La defensa de la "primera vocación" o del "nicho de productos altamente activos" es también interpretable bajo el ángulo del riesgo de la descualificación profesional (en términos de identidad y de saber farmacéutico), los cuales engendrarían una mayor ruptura con los códigos de una industria asociada a la salud.

En el plano profesional el examen de los casos da lugar a una cierta "división moral" del trabajo (Hughes, 1996: 63-66) mediante la cual las argumentaciones y las deliberaciones representan un modelo de aprendizaje del nuevo marco, con el fin de definir las formas más o menos aceptables de producción. El cuadro dirigente autoriza modos de acción, por medio de un ajuste de los principios éticos, movilizados colectivamente según las circunstancias. Continuando con los aportes de Elliot Freidson, quien analiza las formas autónomas de control entre los médicos de hospitales (Freidson, 1984), si ese modo de evaluación colectiva toma la forma de una controversia entre pares, ello sucede sin duda para evitar la presión de un control externo. Pero es también un proceso de conversión moral a los beneficios del nuevo contexto sobre la base de prácticas situadas. Así, mediante la movilización circunstanciada de una ética, se trata de hacer arbitrajes para adaptar las prácticas a las nuevas orientaciones, reafirmando una cohesión profesional interna, sin que pueda claramente establecerse si se trata únicamente de resistencia o de un ajuste.

5. Conclusión

Sin ser generalizable, esta situación de pasaje a la sub-contratación farmacéutica en una fábrica y las formas de movilización que se generan después de una fase de acción sindical, ayuda a reflexionar acerca de los obstáculos de una designación a priori en términos de resistencia. De hecho,

su caracterización no es fácil, menos si se tiene en cuenta el contexto de su emergencia, las intenciones iniciales, las modalidades de su puesta en práctica, los destinatarios y sus significaciones más o menos compartidas. Esto es lo que traducen estas formas de movilización local. En torno a las tensiones clásicas entre productividad y calidad, una misma práctica puede ser caracterizada como de resistencia, de adaptación a las obligaciones o de ajuste. Más que declarar que una práctica es, esencialmente, resistencia, es preciso tratar de comprenderla en un proceso local, el cual relaciona la práctica misma, el sentido que le atribuyen los agentes sociales y el "continuum" de su inscripción. La resistencia y sus fronteras se revelan entonces a partir de una graduación circunstanciada de las prácticas.

En el examen de las situaciones evocadas en los talleres, el descenso de la productividad puede estar posiblemente asociada al freno voluntario de la producción (el contexto se presta para ello) pero también puede estar relacionada con las presiones técnicas provocadas por la multiplicación de pequeñas series y errores típicos en las fases de lanzamiento. La falta de información de los incidentes de producción y de reporte de los errores se transforman claramente en resistencia a partir del momento en el cual el colectivo toma consciencia de sus capacidades de daño. En fin, la práctica discursiva que consiste en asociar el recurso a los trabajadores temporales con una degradación de la calidad pasa igualmente por una reafirmación del colectivo. En lo que se enuncia al respecto – "contra más trabajadores eventuales hay, menos tú conoces a los equipos"- aparecen las amenazas identificadas por el grupo cuyos valores profesionales se basan en el desarrollo compartido de un alto nivel de calidad.

Del mismo modo, si los farmacéuticos se oponen en un primer momento al "gerenciamiento" de su actividad, es sin duda porque les arranca singularidad a su saber y a sus valores profesionales, aproximándolos al de los ingenieros de producción. Es por ello que se rechaza la primacía dada a la dimensión productiva, permitiendo que los asalariados de los talleres conserven su autonomía y complotando hasta hacer destituir a su antiguo colega, director de producción. En este caso, también, el proceso de movilización desvela una reafirmación del colectivo y de sus valores. La creación del "comité de ética" es otra expresión de la movilización. El rechazo de ciertos clientes corresponde a la resistencia al nuevo marco productivista. Y es también parcialmente una forma de adhesión, acompañada con aspiraciones para transformarlo. En ese sentido la práctica se formula igualmente en términos de

regulación o de ajuste adaptativo[10]: al mismo tiempo que ella se pone en acción, modifica el marco de actividad (Reynaud, 1988).

Sustrayéndolos de una aproximación esencialista o global, las prácticas de resistencias y de regulación revelan su significación por el proceso en el cual se inscriben, en consonancia con una fase de acción sindical concluida, la cual ha permitido re-movilizar los colectivos de trabajo alrededor de valores profesionales comunes. Es interesante aquí comprender cómo las movilizaciones pueden proseguirse en los espacios de trabajo con los modos de acción propios de las categorías de asalariados, en función de los recursos que disponen. Por el contrario, si parece claro que la defensa de la calidad de la producción representa un elemento importante y común de esas prácticas, no se sabe determinar con seguridad si ese predominio de la calidad es reivindicado en apoyo del contexto de movilización o si él es un componente más durable de los valores profesionales reafirmados.

BIBLIOGRAFÍA

AUSTIN, John (1970), *Quand dire, c'est faire*, Paris, Seuil, 1970, (1ère éd. 1962).

BÉROUD, Sophie et BOUFFARTIGUE Paul (2009), *Quand le travail se précarise, quelles résistances collectives*, Paris, La Dispute.

BOUQUIN, Stephen (coord.) (2008), *Résistances au travail*, Paris, Syllepse.

BURAWOY, Michael (1979), Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process under Monopoly Capitalism, Chicago, The University of Chicago Press.

CALDERON, José (2008), «Précarité et mobilisation au travail. Une immersion en chaîne de montage», *in* D. Linhart (dir.), *Pourquoi travaillons-nous?* Ramonville Saint-Agne, Erès.

CEFAÏ, Daniel (2007), Pourquoi se mobilise-t-on? Les théories de l'action collective, Paris, La Découverte.

COURPASSON David (2000), L'action contrainte. Organisations libérales et domination, Paris, PUF.

DURAND, Jean-Pierre et Linhart Danièle (coord.) (2005), *Les ressorts de la mobilisation au travail*, Toulouse, Octares.

[10] Según la terminología de John Austin: "Qué decir, es hacer", Seuil, Paris,1970, (1ª éd. 1969), p.. 42

ERBES-Seguin Sabine (1999), *La sociologie du travail*, Paris, La Découverte.

FREIDSON, Eliott (1984), *La profession médicale*, Paris, Payot.

FREYSSENET, Michel (1979), Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d'œuvre, Le cas Renault et Fiat, Paris, CSU.

GIRAUD, Baptiste (2009), «Des conflits au travail à la sociologie des mobilisations: les apports d'un décloisonnement empirique et théorique», *Politix*, n° 86.

GOUSSARD, Lucie (2008), «Le consentement limité au travail. Résistances et consentement des salariés dans l'ingénierie automobile», *Tracés*, n° 14.

HATZFELD, Nicolas (2011), «Les conflits du travail, source renouvelée d'expérience et de connaissance», *Sociologie du travail*, n° 53.

HUGHES, Everett (1996), *Le regard sociologique*, Paris, éditions de l'EHESS

KLANDERMANS, Bert (1984), «Mobilization and Participation: Social Psychological Expansions of Resource Mobilization Theory», *American Sociological Review*, n° 49/5.

LARDE, Christian (1983), Des matières premières aux médicaments ou de la fabrication de médicaments en industrie pharmaceutique, Thèse de doctorat de pharmacie, Faculté de pharmacie, Université Lille 2.

LINHART, Danièle (2009), «Les conditions paradoxales de la résistance au travail», *Nouvelle revue de psychosociologie,* n°7.

MULLER, Séverin (2011), «L'industrie pharmaceutique et l'État. Comment garantir la santé sans nuire au commerce», *Savoir/Agir*, n° 16.

MULLER, Séverin (2005), «Le temps du démontage. L'adaptation collective aux contraintes de production dans un abattoir», *in* D. Linhart, A. Moutet, *Le Temps nous est compté. La construction des normes temporelles du travail*, Paris, La Découverte.

REYNAUD, Jean-Daniel (1988), «Les régulations dans les organisations: régulation de contrôle et régulation autonome», *Revue française de sociologie*, n° 29-1.

REYNAUD, Jean-Daniel (1982), *Sociologie des conflits du travail*, Paris, PUF.

ROY, Donald F. (1959), Restriction of output by machine operators in a piecework machine shop: a preliminary analysis, Doctoral Thesis in Sociology, University of Chicago.

SNOW, David (1986), «Frame alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation», *American Sociological Review*, n° 51/4.

V / CLASE TRABAJADORA, TERRITORIO Y RECOMPOSICIÓN DE LA CONDICIÓN OBRERA

Juan Montes Cató, Marcelo Delfini, Ana Drolas,
Walter Bosisio, Lucas Spinosa y Lissette Fuentes

1. Introducción

En el libro *Repensar la condición obrera*, Stéphane Beaud y Michel Pialoux abordaban los procesos de transformación del trabajo a partir de los cambios productivos, las expectativas profesionales de las nuevas generaciones y la ruptura en las identificaciones sociales y políticas tomando como base una investigación desarrollada por diez años en una fábrica automotriz y su entorno territorial en Francia. En nuestro país esas reflexiones se difundieron ampliamente en un contexto de profunda degradación del mercado de trabajo y de una fuerte ofensiva del capital que operó en el plano material y simbólico imponiendo cambios en la organización del trabajo y buscando intervenir en los procesos de identificación obrera y en la construcción de clivajes políticos.

En este capítulo recuperamos el registro de análisis de ese texto en cuanto inspira una mirada comprensiva del mundo del trabajo, donde los procesos materiales, las luchas sociales y los anclajes ideológicos se combinan para producir lo social. En segundo lugar, el texto aborda el análisis comparativo de material empírico de primera mano objetivado en el seguimiento de una experiencia territorial, sobre las prácticas de organización y lucha en un barrio marginado del partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Este barrio es pensado como expresión emergente de aquellos territorios excluidos de los grandes circuitos de circulación del capital, a la vez articulados entre sí a partir de las largas cadenas de valor que produce el capitalismo global destinando a algunos de ellos a un lugar marginal. Estos espacios de exclusión reproducen y profundizan los procesos de expulsión del mercado de trabajo aunque habilitaran otros circuitos laborales altamente precarizados e inestables combinados con diversos programas sociales.

En este marco, este artículo tiene como objetivo analizar los cambios y continuidades que se desarrollaron en un barrio popular del partido de la Matanza entre los años 2003 y 2013, tanto en lo que se refiere al mercado de trabajo como a las condiciones de vida de sus residentes. La pregunta central

se orienta a comprender en qué medida el crecimiento económico y las políticas estatales de los últimos 12 años impactaron en las condiciones de existencia de una población considerada paradigmática de la situación vivida en áreas urbanas de alta densidad poblacional e históricamente excluidas.

El territorio se impone así como clave analítica junto con el trabajo: abarcamos los declives y las formas de recomposición producidas en las condiciones de vida del barrio estudiando su evolución. Se trata del Barrio Nicole; constituido por 1500 hogares con aproximadamente 6.000 habitantes, y cuyo casco residencial originario está conformado por viviendas sociales, en su mayoría precarias. Para caracterizar los cambios producidos, sus mejoras y sus límites se compara en este trabajo un censo de 2003 con una encuesta representativa de 2013, lo cual permite delinear el impacto sobre el territorio de los procesos de redistribución de la riqueza observados a partir de 2003 en la Argentina. Este análisis sobre las condiciones habitacionales, de inserción en el mercado de trabajo y las estrategias de supervivencia parte de ciertos rasgos estructurantes de la organización social. Se estudia la organización 26 de Julio, que desarrolla actividades políticas en el barrio, lo que nos permitirá acceder a su dinámica desde la comprensión política.

La vinculación con el territorio y el espacio constituyen una marca de origen que condiciona gran parte del crecimiento del barrio y definen sus déficits; por ello situamos primero algunas coordenadas de los procesos territoriales y de segregación urbana. Seguidamente, abordamos en qué medida esas marcas del entramado urbano se fueron modificando durante los diez años del *kirchnerismo* y su vinculación con ciertas mejoras en el mercado de trabajo. A partir de allí interpretamos otros rasgos que enmarcan la organización y la acción colectiva -podríamos hablar de cierta tradición de lucha característica del espacio analizado- para indagar luego en qué medida esas herencias de lucha son reinterpretadas a la luz de las transformaciones políticas más generales y las experiencias particulares del Barrio Nicole.

2. Territorio y segregación urbana

El crecimiento de las desigualdades, producto de las políticas neoliberales de los 1990, tendió a cristalizarse en el territorio, reproduciendo y profundizando la dualización de la estructura social (Cicolella, 2000). Por un lado quedaron algunos sectores de clase alta y media que se integraron a los procesos de cambio y cuyos ámbitos residenciales se convirtieron en "ciudades amuralladas" protegidas contra los avatares de la vida cotidiana. Pero, por otro

lado, también como característica de las ciudades globales, las condiciones de vida se fueron deteriorando y con ello ciertos ámbitos residenciales se hicieron cada vez más precarios.

La capacidad de dominar el espacio, en especial apropiándose (material o simbólicamente) de los bienes escasos (públicos o privados) que se distribuyen en él, depende del capital que se tiene. Éste permite mantener a distancia a las personas y las cosas indeseables, al mismo tiempo que acercarse a las personas y las cosas deseables (debido, entre otras cosas, a su riqueza) y minimiza de ese modo el gasto (en particular de tiempo) necesario para apropiarse de ellas: la proximidad en el espacio físico permite que la proximidad en el espacio social produzca todos sus efectos al facilitar o favorecer la acumulación de capital social y, más concretamente, al posibilitar el aprovechamiento constante de los encuentros a la vez fortuitos y previsibles que asegura el hecho de frecuentar los lugares de "buena concurrencia" (la posesión del capital asegura además la cuasi ubicuidad que hace posible el dominio económico y simbólico de los medios de transporte y comunicación, a menudo reiterada por el efecto de la delegación, poder de existir y actuar a distancia por persona interpuesta). A la inversa, quienes carecen de capital se mantienen a distancia, ya sea física o simbólicamente, de los bienes socialmente más escasos, y se los condena a relacionarse con las personas o bienes más indeseables y menos escasos. La falta de capital intensifica la experiencia de la finitud en la medida en que encadena a un lugar (Bourdieu, 1999).

En este marco, la distribución espacial tiende a trazar fronteras claras entre la posición ocupada por unos y por otros, consolidándose una estructura territorial de características excluyentes[1] (Clichesvsky, 2000), en donde los espacios otrora de integración –aunque esta haya sido una integración por subordinación- van siendo reemplazados por lógicas de segregación.

Durante los noventa fue tomando forma ese pasaje de una ciudad vinculada a una sociedad integrada construida sobre la oposición entre dominantes y dominados, característica en la Argentina del modelo de industrialización

[1] La segregación residencial significa distanciamiento y separación de grupos de población de una comunidad, puede concretarse en segregación localizada (cuando un sector o grupo social se halla concentrado en una zona específica de la ciudad, conformando áreas socialmente homogéneas) o excluyente (ausencia de integración de grupos sociales en espacios comunes a varios grupos). No existe segregación cuando habiendo heterogeneidad socioeconómica, la población perteneciente a distintos niveles, vive mezclada desde la totalidad de ciudad hasta el nivel de su manzana.

sustitutiva, a otra sociedad marcada por la distancia entre los que están afuera y los que están adentro, entre los integrados y los excluidos, una sociedad marcada por sus fronteras (Améndola, 2000).

Se desarrolla así un proceso de segregación que impone ciertas particularidades a la sociabilidad que se despliega en cada uno de los ámbitos espaciales. Así, se van generando ciertos espacios de relegación (Auyero, 2001: 46), a partir de los cuales y en confluencia con otros fenómenos, se construyen nuevas relaciones sociales, produciendo la emergencia de nuevos actores políticos.

Estos espacios de relegación a su vez tienden a profundizar el deterioro de las condiciones sociales en dos sentidos: primero hacia afuera, ya que estos espacios son relegados, ocultados y estigmatizados y segundo hacia adentro, en la medida en que tienden a ser espacios con un medio ambiente contaminado, que a su vez no gozan de servicios públicos como otros ámbitos habitacionales, desde carencia de transporte público a ausencia de escuelas y servicios de salud.

Siguiendo a Kaztman (2001), el aislamiento social de los pobres en los espacios urbanos se transforma en un obstáculo importante para dejar de ser pobres, lo que produce que la pobreza urbana aislada socialmente se constituya en un caso paradigmático de exclusión social. En los contextos segregados con alta concentración de la pobreza, la segregación residencial obstaculiza el proceso de formación de capital social de sus residentes, principalmente, por el distanciamiento físico y los reducidos ámbitos de interacción con otras clases (Molinatti, 2013).

Sin embargo, las experiencias vividas en esos espacios y sus traducciones subjetivas, posibilitan la creación de nuevas lógicas de acción sustentadas sobre el territorio, a partir de los espacios relacionales donde los actores realizan su acción. Siguiendo a Javier Auyero (2001:60) "en esos espacios /lugares el proceso de empobrecimiento y la desconexión del mercado laboral, no sólo representan una nueva forma de privación material y desigualdad sino que implican un cambio cualitativo en las relaciones sociales..." y desde el punto de vista de este análisis, agregaríamos que estos espacios /lugares se convierten en el ámbito de referencia para la construcción de nuevos lazos sociales, a partir de los cuales se articulan nuevas manifestaciones políticas, que se vinculan con los procesos de transformación desarrollados a lo largo de la década de 1990.

Así, el mencionado proceso de dualización que se consolidó en la década neoliberal tuvo una fuerte traducción en el espacio físico, creando espacios delimitados con fronteras precisas.

Dichos procesos de segregación se fueron consolidando a medida que las políticas de los 90 profundizaron lo iniciado en 1976. En este sentido, el trabajo como elemento integrador que permitía la movilidad social ascendente, fue perdiendo lugar en el marco de las reformas neoliberales. Por un lado, la pauperización de los asalariados, su precarización y la creciente expansión de la desocupación, fue dando lugar a que estos espacios de segregación, lejos de convertirse en ámbitos de paso, en el punto de partida para procesos de integración mediante una inserción laboral estable, se convirtiesen en estructuras marginales permanentes. Junto a ello, el claro retiro del Estado de la problemática de la vivienda y la mercatilización por la ausencia estatal de mecanismos de integración (por ejemplo la escuela pública) profundizaron el deterioro de las condiciones de vida de la población. La recuperación del empleo modificó en parte la situación de estos sectores a partir de una incorporación endeble al mercado de trabajo. El ingreso al mercado de trabajo precario –atendiendo a sus diversas graduaciones que van desde la condición de no registro, pasando por asalariados que perciben una parte de sus remuneraciones sin el control tributario, hasta situaciones de trabajadores excluidos de toda representación sindical- permite una salida de las profundidades de la pobreza, pero no revierte los procesos de desintegración social.

3. Entramado urbano en un barrio marginal: las marcas de la degradación del territorio y su recomposición a partir de la redistribución del ingreso

El barrio Nicole está ubicado en el partido de La Matanza. Este partido es el municipio más extenso del conurbano bonaerense, cuenta con una superficie total de 325,71 km^2. La transformación urbana de la zona se inicia después de 1930 con el aporte de las corrientes inmigratorias europeas y el afluente proveniente de las provincias y, más tarde, de países limítrofes atraídos por la gran cantidad de fábricas que comenzaron a radicarse en el partido durante el período de industrialización por sustitución de importaciones en la década de 1930 y que se profundizó en las décadas siguientes (1940-1950). Estos procesos modificaron drásticamente la estructura sociodemográfica a partir de la multiplicación de las fuentes de trabajo. Además de ser el más extenso, La Matanza es el partido más poblado de la provincia de Buenos Aires (con

1.775.816 habitantes[2]), superado sólo por cuatro provincias (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Capital Federal). .

Actualmente en la zona conviven barrios residenciales y de emergencia (que se convirtieron en permanentes)[3] y un tejido productivo de aproximadamente 7.000 fábricas de escala media. Las industrias del distrito son en su mayor parte metalúrgicas[4], seguidas por la industria del calzado –que representa el 70% de las empresas productoras y proveedoras de la industria del calzado del país- y por último la del plástico, seguida de producción agropecuaria. También hay papeleras, textil, madera, pintura, químicos, caucho y construcción. Sin embargo, cuando se analiza el mercado de trabajo se observa que en el municipio de La Matanza es amplia la participación de las ramas de comercio y reparaciones, que emplean a un 20,9% de los ocupados. Los servicios comunitarios y personales se ubican en segundo lugar con 15,9%. En un tercer lugar encontramos al transporte y almacenamiento 11,7%, la industria manufacturera 10,9% y la construcción 10,6%.

La tasa de actividad era hacia 2011 del 40,6% de la población urbana total y muestra variaciones entre distintos grupos poblacionales. Las mayores tasas de participación en la actividad económica se encuentran entre los hombres (52,1%), los jefes de hogar (65,7%) y entre personas de 30 a 64 años (70,6%). El 37,1% de los habitantes urbanos del municipio se encuentran ocupados. Entre los hombres, la tasa de empleo llega al 48,5% mientras que entre las mujeres es del 25,1%.

La desocupación constituyó uno de los emergentes más visibles de la crisis de 2001 que llegó al 22,5% en 2004 disminuyendo de manera constante a partir de ese momento[5]. En este cuadro la desocupación femenina alcanza, en 2011

---

[2] En el marco del sistema electoral argentino, esto se traduce en un gran peso político; con casi 900.000 electores, La Matanza tiene influencia para definir una elección nacional.

[3] El partido de La Matanza está dividido en tres áreas: el área 1, lindera a la ciudad de Buenos Aires, el área 2, ubicada en el punto intermedio y el área 3, la más extensa y donde se ubican los indicadores socio-demográficos, de mercado de trabajo y pobreza e indigencia más agudos.

[4] Los datos de La Matanza que se presentan a continuación corresponden a la Encuesta de indicadores del mercado de trabajo en los municipios de la provincia de Buenos Aires, 2011.

[5] Indec y Encuesta de Indicadores del Mercado de Trabajo en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires.

al 11,4% mientras que entre los hombres es del 6,1%. Es en el grupo etario de jóvenes de 14 a 29 años (13,4%) y en los componentes adicionales del hogar (11,2%), con las marcas más elevadas.

Con la crisis socioeconómica generada por la implosión del régimen de convertibilidad y las características que asumió la política económica de salida de ese régimen la Argentina alcanzó niveles nunca antes vistos de pobreza. Así, para octubre de 2002 el porcentaje de personas que se encontraba bajo la línea de pobreza llegó al 57,5% y la indigencia a 28,7%. Ambos guarismos fueron disminuyendo hasta alcanzar 24% y 8,7% respectivamente en 2009.[6]

Estos datos de La Matanza nos permiten como referencia inmediata contextualizar lo que sucede en el barrio Nicole. Al incorporar el análisis sobre el mercado laboral en el barrio, lo primero que sobresale es la caída de la desocupación, que pasó de 24% a 16% entre los años de referencia (2003-2013), aunque no tuvo la profundidad alcanzada en el nivel del distrito. Esta caída en la desocupación estuvo dinamizada por la creación de empleo, más allá de los planes que sirvieron para amortiguar los efectos de la crisis de 2001; la tasa de desocupación ascendía al 58% en 2003 si se computaban los trabajadores con planes, y descendió esta cifra al 24% diez años más tarde[7]. Se observa así la pérdida de importancia de los planes que en 2003 caracterizó a estos barrios como "barrios bajo planes".

No obstante, la caída en el desempleo debe leerse también a partir de otros datos como la tasa de actividad y el empleo, los cuales, en primera instancia van a contramano de lo ocurrido en el mercado de trabajo nacional. En este sentido se observa una caída importante tanto en la tasa de actividad como en la de empleo, lo que estaría marcando un retiro del mercado laboral de una amplia franja de trabajadores, los cuales, por diversos motivos ya no buscan empleo. Otro dato importante que se observa entre los años de referencia, es la caída experimentada por el trabajo no registrado entre los asalariados, aunque se mantiene en niveles elevados, pasó de 84% en 2003 a 61% en 2013 (recordemos que la tasa en el nivel país rondaba entre 35 y 40%).

Asimismo, al considerar las formas de inserción laboral en 2013, se destaca un aumento de 15 puntos en la categoría obrero o empleado y concomitantemente, una disminución del cuentapropismo característico de

[6] Encuesta sobre las condiciones de vida en La Matanza 2009

[7] Los datos presentados sobre el Barrio Nicole son de elaboración propia en base a encuesta 2003 Ceil-Conicet y 2013 Ubanex-UBA. Para precisiones metológicas del relevamiento Ver Anexo.

estos sectores ya que actúa como actividad refugio. Además, se aprecia un aumento de la categoría patrón que respondería al crecimiento observado de comercios minoristas en el propio barrio.

Otro dato que recupera uno de los elementos clásicos de la relación salarial y de ese modo de la configuración de la condición obrera, está vinculado con la permanencia en el puesto de trabajo, proyectando grados de previsibilidad de la relación laboral. Un dato muy significativo es que prácticamente se duplicó la condición de permanente, ubicándose en 2003 en torno del 29% y en 2013 llega a 60%.

Al considerar los datos básicos del mercado de trabajo del Barrio Nicole para el año 2013, se observa la problemática que enfrentan las mujeres; mientras la desocupación femenina se mantiene en niveles muy elevados (34% frente a 8% de los hombres), tanto la tasa de actividad (39% para hombres y 25% para mujeres) como la de empleo (38% hombres y 19% mujeres) presentan diferencias significativas, demostrando las dificultades que sufren éstas para poder obtener un trabajo.

Por otra parte, analizando el mercado de trabajo en términos etáreos, se observan elevados índices de desocupación en la categoría de menor edad, alcanzando el 28%, con una tasa de actividad cercana al 26%. Esta problemática entre los jóvenes se ve profundizada en la medida en que se avanza en el análisis articulando ocupación y educación, según el cual un alto porcentaje de jóvenes (27%) no se encuentra inserto en ninguna institución educativa, ni tampoco en relación laboral alguna. Este fenómeno se manifiesta con mayor virulencia en las zonas desfavorecidas, como en el caso de este barrio.

Estos elementos de recuperación nos llevan a considerar el nivel de integración al mercado de trabajo en torno a los criterios de informalidad presentes en el mismo, estableciendo así una aproximación al grado de precariedad en que se encuentran los trabajadores del barrio[8]: la informalidad

[8] Así, para analizar detenidamente en la informalidad de la inserción laboral la hemos considerado a partir de dos formas que ella asume. Por un lado, la relación de dependencia, donde es la registración la que define la informalidad de la relación salarial. Por otro, aquella compuesta por los ocupados que se encuentran en las categorías de patrones o cuenta propia, y que están subocupados y además manifiestan querer trabajar más horas; a ellos se integran también los trabajadores familiares sin remuneración. La suma de estas tres categorías determina el total de la informalidad.

total alcanza al 53% de los ocupados, en tanto que entre los asalariados el no registro se ubica muy por encima de los datos del INDEC para el año 2013, alcanzado 60% de los casos. Por su parte, el 37% del resto de los ocupados, puede caracterizarse como ocupados informales. Esto se vincula directamente con las características temporales de las relaciones laborales; sólo el 60% de los ocupados alcanzan relaciones permanentes de trabajo, el 24% tiene una ocupación temporal y el 16% realiza changas. No obstante, más allá de la fragilidad de estas relaciones, han mejorado sustancialmente con respecto a 2003, cuando sólo el 29% tenía una relación de permanente.

Por su parte, si se considera el empleo no registrado en términos de género, se pudo observar que entre las mujeres, el 70% se encontraba en situación de no registro, en tanto que entre los hombres alcanzaba el 55%, siendo a su vez en el sector de la construcción donde los empleados u obreros alcanzan al 70% de los casos. En los rubros de comercio y servicio, la no registración llega al 60%.

En términos de inserción sectorial de los ocupados, en 2013 era predominante la inserción en el sector servicios, representando el 44% de los ocupados, seguido por el sector de la construcción con el 27% y posteriormente, el 16% en comercio y el 13% en industria.

Al analizar la problemática salarial, debe destacarse que entre los empleados el salario promedio para septiembre de 2013 fue de 3113 pesos y el 50% de los asalariados ganaba menos de 3000. En este sentido, también fueron las mujeres las de menores salarios, alcanzando una media de 2188 pesos, y 3567 pesos la de los varones. Si se consideran los ingresos del conjunto de los ocupados, el promedio se reduce a 2763, poniendo de manifiesto el carácter de subsistencia que presentan los trabajos por cuenta propia. Precisamente, este dato se corrobora cuando se observa que el promedio de ingresos entre los trabajadores por cuenta propia y patrones sólo llega a 2138 pesos y la mitad de los mismos ganan menos de 2000 pesos.

Esto a su vez nos conduce al análisis de la pobreza que permite observar mejoras importantes a lo largo de la década. En 2003 el 96% de los hogares no alcanzaban a cubrir la canasta básica total (CBT), mientras que el 76% no podía satisfacer los requerimientos mínimos de alimentación. Para 2013, esta situación, se ha modificado en términos relativos, de tal manera que el 67% de los hogares no alcanza a cubrir la CBT y el 29% se encuentra en situación de

indigencia, ya que no alcanza a cubrir la canasta básica de alimentos[9]. Por su parte, el 38% de los hogares se encuentra percibiendo al menos una Asignación Universal por Hijo (AUH) en cuyos ingresos representa el 35%; el promedio alcanza los 4100 pesos, en tanto que la media de los miembros del hogar llega a 5. A su vez, de los hogares que reciben al menos una AUH, el 82% no alcanza a cubrir la CBT y el 36% la CBA. Mientras tanto, el 62% de los ocupados no alcanza a cubrir la CBT.

Avanzando en el análisis de las condiciones habitacionales en el marco de la pobreza de carácter estructural, se destaca la ampliación y mejora del tendido de red de agua potable, las calles de asfalto y la mejora en las condiciones de los baños, cuestión sensible con relación a la salud en un territorio cercano al basurero municipal y afectado por los desbordes del río circundante. Estos avances también impactaron en la propia vivienda y en los hogares con vistas a mejorar en la infraestructura de las viviendas y disminuir los niveles de hacinamiento.

En esta misma dirección, se puede ver que han mejorado sustantivamente las condiciones de infraestructura de las viviendas (se destacan las obras vinculadas a la provisión de agua potable) aunque se mantienen carencias en obras de envergadura como la red de provisión de gas, en la medida que se incrementó de manera notoria el uso de gas por garrafa, también vinculado al subsidio del que este combustible envasado gozaba.

Las mejoras sustantivas en las condiciones de vida –infraestructura y empleo- deben ser interpretadas atendiendo a tres aspectos centrales vinculados al hábitat. El primero es el espacio ocupado, específicamente las características que presenta el medio ambiente de ese territorio para el desarrollo de la vida. El segundo son las condiciones habitacionales, los niveles de hacinamiento, el acceso a servicios básicos como también las características de la construcción y los materiales empleados en ella. Por último, el tercero de los aspectos hace referencia a las condiciones de vida de sus habitantes, tomando en consideración los elementos vinculados al mercado de trabajo y los niveles de ingresos familiares que posibilitan cubrir los gastos de subsistencia. Como resumen de lo observado, se evidencia en primera instancia, un crecimiento de la población en los ámbitos espaciales de segregación (como vimos, la población en el barrio se triplicó); el espacio ocupado presenta claras

[9] Las canastas básicas, han sido calculadas tomando en consideración, tanto las realizadas por la Comisión técnica de ATE-INDEC, como así cálculos propios para GBA, a partir de los índices relevados por diferentes provincias.

deficiencias medio ambientales: altos niveles de contaminación, inundable y carencias de infraestructura, lo cual impediría la instalación de viviendas en ese ámbito. Sin embargo y más allá de las carencias observadas en el espacio ocupado, se pudo constatar una mejora en las condiciones habitacionales y también en la incorporación al mercado de trabajo, que posibilitó la salida de la indigencia de muchos de sus habitantes.

4. Movilización y lucha política

No puede entenderse el presente del Barrio Nicole sin caracterizar su inserción en el contexto histórico, político y económico local y nacional. El desarrollo industrial de la región fue constituyendo históricamente una clase obrera con gran capacidad de movilización de la mano de sindicatos con base territorial. Ésta se sustentaba en la presencia de delegados en los lugares de trabajo, en una red de seccionales sindicales con locales en las zonas con mayor concentración industrial y en un abanico de beneficios sociales que gravitaban en la vida cotidiana de los obreros (obra social, créditos y centros de recreación). Todo ello contribuía a crear una socialización obrera que fue nutriendo la fortaleza sindical. A pesar de que durante algunas décadas la región fue uno de los epicentros industriales, esos núcleos dinámicos de la economía convivían con una población empobrecida que se vio acrecentada con las sucesivas crisis y procesos desindustrializadores.

Si bien el nuevo escenario desplegado durante toda la década de los noventa y consolidado durante la crisis de 2001 se caracterizó por los altos porcentajes de desocupación y pobreza, esto mismo constituyó la condición de posibilidad para la recuperación de la acción colectiva de las organizaciones de desocupados, y devino en verdadero epicentro del movimiento piquetero. Sin embargo, la emergencia de las organizaciones de desocupados no puede explicarse solo a partir del lugar que ocupan dentro de la estructura socio-económica, sino que se entrelazan un conjunto de elementos que remiten a las dimensiones ideológicas y políticas. Estas organizaciones se sumaron a una rica tradición combativa del territorio que había ensayado sus primeras experiencias reivindicativas vinculadas a los sindicatos entre los años 1940-1970. Con la crisis de representación sindical en los ochenta, la tradición de resistencia fue recuperada en las luchas sociales con eje principalmente en los problemas de déficit habitacional (acrecentado por la falta de políticas públicas y los constantes flujos migratorios que buscaban aumentar sus posibilidades de

supervivencia ubicándose en la ciudad)[10]. La expresión fue el movimiento por la ocupación de tierras (Merklen, 1991) desarrollado entre fines de la década de los ochenta y principio de los noventa.

Las luchas contra el déficit habitacional en La Matanza fueron delineando un conjunto de referentes sociales y permitieron acumular experiencias organizativas eficaces, que en cuanto se evidenciaron los primeros signos de agotamiento del modelo económico hacia 1996, operaron como recursos de poder para paliar los impactos más crudos de la crisis. Las primeras acciones estuvieron destinadas a demandar bolsones de comida para contrarrestar los altos índices de pobreza e indigencia que comenzaban a desestructurar las economías domésticas. La persistencia de la desocupación y profundización de los indicadores de marginación dieron lugar a una nueva fase reivindicativa cuyo rol protagónico lo asumieron las medidas de fuerza, y los piquetes o cortes de accesos viales fueron los recurso estratégicos clave[11]. En este contexto los planes de emergencia social eran escasos en virtud de la magnitud de la crisis y las organizaciones de desocupados se convirtieron en cajas de resonancia política de los déficits sociales.

La profunda reconfiguración económica y social planteada a partir de las grandes transformaciones antes descriptas supuso una profunda *descomposición social* pero también habilitó la emergencia de un proceso de *recomposición social* en el entramado popular en términos de resistencia y organización (Svampa, 2003).

Se trata de la emergencia de experiencias que resignificaron viejas tradiciones combativas de los sectores populares a la vez que innovaron incorporando nuevas formas de expresión, de organización y nuevas consignas reivindicativas fuertemente contemporáneas, es decir, con una lectura política ajustada a la especificidad del contexto social en el que se desarrollaron. El surgimiento y la consolidación de estas experiencias permitió que la movilización social pudiera

[10] Como sucede en todas las grandes ciudades latinoamericanas, el crecimiento de las coronas de la Ciudad de Buenos Aires, responde a un modelo macro-cefálico ampliándose constantemente hacia el norte, oeste y sur.

[11] Resulta interesante reparar en esta estrategia, ya que su eficacia en términos de las necesidades de circulación capitalista operaba, precisamente, colocando una traba al flujo continuo de mercancías. En el plano político ponía en evidencia la crisis social y finalmente, en términos organizativos, suponía una fuerte experiencia de coordinación entre las diversas expresiones ideológico-políticas que conformaban el universo piquetero. Convivían organizaciones trotskistas, maoístas, autonomistas y de raíz popular-peronista.

fijar un límite al avance del programa neoliberal, impidiendo que se profundizara aún más en sectores estratégicos de la sociedad como la educación y la salud.

Frente al grave deterioro del empleo y la degradación política de la institución sindical durante los noventa, el protagonismo de la protesta social estuvo a cargo de los denominados "movimientos sociales", encabezados por las organizaciones de trabajadores desocupados, articuladas a lo largo de todo el país. Estos sujetos, expulsados por el modelo -y creados por él-, debieron reconstituirse a sí mismos por fuera de la lógica que los convirtió en excluidos.

Su *estrategia de resistencia* supuso la resignificación de las propias identidades tanto a partir del ejercicio de nuevas formas de protesta (cortes de ruta, piquetes) como de distintas prácticas cotidianas (desarrollo de talleres formativos, emprendimientos productivos, asambleas, etc.) que moldearon la construcción de esa nueva identidad. Dentro de las organizaciones, asimismo, se destacó la recuperación de la participación horizontal, principalmente el uso de la asamblea como modelo consensuado de toma de decisiones.

Un análisis en perspectiva permite afirmar que estas organizaciones, que mixturaron en clave territorial diferentes tradiciones de acción política e ideológica, fueron un actor fundamental para instalar el problema de la exclusión como cuestión estructural y a partir de su capacidad de incidencia, obligaron a plantear estrategias de posicionamiento frente a sus demandas al Estado y los partidos políticos.

Indudablemente, el momento más álgido y de mayor visibilización de las luchas populares se produce en el año 2001 –pico de la crisis económica/político/social-, que marca un hito, un punto de inflexión que dio lugar a un cambio de época. Este viraje se manifestó en un proceso de reconfiguración de la crisis política, del rol del Estado y del modelo económico que, como decíamos, aún manteniendo ciertas continuidades, implicó una reformulación del escenario político, económico y social marcado por modificaciones en la composición de las relaciones de fuerza.

Como hemos subrayado, La Matanza es un territorio con una intensa tradición de lucha que logró fijar un límite al avance del programa neoliberal en algunas de sus directrices. Este proceso complejo en el cual se interrelacionan las condiciones generales de existencia, la articulación de políticas públicas y la acción colectiva de las organizaciones sociales, se desplegó en el barrio Nicole por medio de la Organización 26 de Julio (luego Asociación Civil Movimiento 26 de Julio para la Promoción del Empleo). La importancia radica en que esta organización llevó adelante una estrategia que permitió articular políticas

destinadas a recomponer los lazos sociales obturados drásticamente y simultáneamente fijar una estrategia política de oposición y alianzas con otras instituciones. El origen del barrio y de la organización están estrechamente vinculados. Las dificultades habitacionales y la inexistencia de una política que resuelva la tenencia de la tierra generaron una crisis que fue canalizada por las familias mediante la toma de predios extensos donde se asentaban. En 1997 se produce la ocupación de terrenos que derivó en el surgimiento de la organización. Las primeras familias en llegar fueron aproximadamente cien y en ese momento se articuló un plan de autoconstrucción de viviendas de material. El desarrollo del barrio se estructuró fundamentalmente en base a acciones colectivas reivindicativas y también a otras ligadas a prácticas de organización autónomas. Así, se fueron alcanzando un conjunto de objetivos que posibilitaron obtener mejoras en la infraestructura barrial (el asfalto en algunas de las calles principales, un predio para la construcción de la escuela y otro donde funcionan los cursos iniciales; reparaciones y extensiones en el tendido de la red que provee el agua); el desarrollo de emprendimientos productivos como la panadería, los módulos para construcción de viviendas, talleres de costura; además se desarrollaron diversas políticas destinadas a encarar los problemas de salud, entre los que se destacan la construcción de la sala de atención médica y las campañas en contra de enfermedades como la diarrea, desnutrición y otras de transmisión sexual. Por otra parte, la acción reivindicativa de las organizaciones también posibilitó la obtención de planes de empleo con el objeto de contener mínimamente los altísimos índices de pobreza y desempleo que se registraban en esos años. La organización fue asumiendo nuevas funciones al ritmo de las necesidades de la población. Así ha desarrollado una política destinada a los desocupados, proyectos cooperativos de trabajo, habitacional, salud, educación y género. Con la disminución de la desocupación y la instalación de la informalidad y precariedad como signos distintivos del empleo, actualmente se encuentra abocada a la calidad del empleo.

En la última década, la organización 26 de Julio logró acompañar, participar e incentivar algunas mejoras de infraestructura gracias a la reactivación económica, a las políticas de Estado y a la intervención de la propia organización. Ese es el caso de la ampliación y mejora del tendido de la red de agua potable y calles de asfalto y la mejora de las condiciones de los baños, sensible al tema de salud para un territorio afectado por los desbordes del río circundante y a un basurero municipal. Todo ello supuso el involucramiento

en las políticas públicas y acciones específicas de concientización de la población a partir de diagnósticos articulados con otras organizaciones[12].

En el marco de la recuperación del mercado de trabajo, la organización ha desarrollado una estrategia de articualción con organizaciones sindicales. Precisamente, una de las novedades más salientes de esta nueva composición ha sido el protagonismo recobrado por aquellas. Luego de que durante el proceso de movilización popular de mediados y fines de la década del noventa los sindicatos tradicionalmente más importantes quedaran relegados a un papel secundario, atravesados por una profunda crisis de legitimidad, la recuperación de la actividad económica bajo un modelo de sesgo desarrollista, fortaleció notablemente la posición de fuerza del sindicalismo en su conjunto, ampliando sus márgenes de maniobra.

La reactivación se tradujo en una expansión de la base de representación en la que se asentó tradicionalmente el sindicalismo argentino y en un crecimiento exponencial y sostenido de la negociación colectiva[13](Palomino, 2006). Además del fortalecimiento de estas instancias de negociación, lógicamente, la

[12] Algunos de estos diagnósticos fueron realizados por los autores de esta ponencia en el marco de proyectos de extensión universitaria (Universidad de Buenos Aires) y de investigación-acción desarrollados en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET). Los datos estadísticos que se presentan a continuación son de elaboración propia. Fueron construidos gracias a la aplicación de un censo en el año 2003 y replicados en 2013 mediante una encuesta. En esta última se respetaron los criterios muestrales de representatividad. En términos temporales es sumamente significativa en cuanto abarca una etapa clave en términos políticos (inicio del ciclo kirchnerista) y económicos (etapa de crecimiento sostenido).

[13] El año 2004 marca un punto de inflexión en la recuperación de las negociaciones colectivas, duplicando el promedio de los diez años anteriores e incrementándose un 20% con respecto a 2003. De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la cantidad de Convenios Colectivos de Trabajo homologados pasó de 380 en el año 2003 a 1027 en 2007 y siguió incrementándose en los años 2008 y 2009 con 1.231 y 1.331 acuerdos y convenios firmados, respectivamente (MTESS, 2010). De acuerdo al análisis de los investigadores del Ministerio, esta revitalización se refleja en todos los niveles, es decir, tanto en la reapertura de la negociación a nivel de actividad, que prácticamente se había abandonado en la década del noventa, en las negociaciones por empresa, que habían mantenido su dinamismo en esa época y también en las nuevas unidades de negociación que surgieron impulsadas por el crecimiento económico (Palomino y Trajtember, 2007).

intensificación de las luchas gremiales derivó en una expansión e incremento de la conflictividad laboral manifiesta[14].

Uno de los elementos más notables de este proceso de recuperación del protagonismo sindical es la reactivación de ciertos niveles de organización y conflictividad en las instancias de menor escala, es decir, en los propios lugares de trabajo. Este fenómeno se inscribiría en una tendencia reciente hacia la *descentralización de la conflictividad obrera* que, a su vez, se vincula a una larga tradición del movimiento obrero argentino de penetración capilar en los espacios productivos y gran fortaleza de estas organizaciones de mínima escala.

De acuerdo con los datos de la Central de Trabajadores Argentinos, en los últimos años (en especial a partir del año 2003), los conflictos en el lugar de trabajo (planta, edificio o dependencia estatal específica) representaron entre un 60 y 65% de la conflictividad general. En el ámbito de los asalariados privados, este porcentaje se eleva a un promedio de 77%. Asimismo, se evidencia un crecimiento sostenido de los reclamos iniciados por sindicatos locales o seccionales, que ganan terreno progresivamente, pasando de representar alrededor del 50 % en 2007 a más de un 75% en la primera parte de 2010 (ODS, 2010). A esto se le suma una porción de conflictos (entre el 12 y el 14%) protagonizados por trabajadores no encuadrados oficialmente en ningún sindicato. Junto con estos datos aparecen también otras variables que, indirectamente, aportan a la posibilidad de rastrear un proceso de reactivación de la actividad y organización en los espacios de trabajo en los últimos años. Por un lado, la existencia sostenida de un porcentaje significativo de conflictos articulados por disputas de representación, que incluye centralmente a los conflictos por enfrentamientos intrasindicales o disputas por encuadramiento; por otro aquellos suscitados por discriminación sindical, prácticas antisindicales o negación del reconocimiento a la actividad sindical por parte de la empresa, que se mantiene cercano al 20%.

A la hora de pensar las condiciones de emergencia de esta nueva conflictividad en el ámbito del trabajo, podemos señalar tres factores que ayudan a entenderla en la nueva etapa (post 2003), incluso más allá de la esfera estrictamente sindical. Por un lado, es insoslayable la influencia de la

[14] Las estadísticas del propio Ministerio de Trabajo marcan claramente esta tendencia de ascenso de la conflictividad en el período, señalando un incremento sostenido de la categoría de "conflictos con paro" que acumula un total de 770 para 2006, 838 para 2007, 839 para 2008, 874 para 2009 y 497 para el primer semestre de 2010 (MTESS, 2011).

recuperación de las experiencias de resistencia al programa neoliberal de los noventa y principios de los 2000, que contribuyeron a la reconfiguración de las luchas populares, tanto dentro como fuera del mundo del trabajo. En este sentido, aparece como condición necesaria para el surgimiento de estas nuevas expresiones una reconfiguración político-subjetiva que encuentra sus raíces en los procesos de lucha de fines de la década de los noventa y del estallido popular de diciembre de 2001. Se trata fundamentalmente de la recuperación de un postulado básico de cualquier lucha popular que la hegemonía neoliberal había logrado desdibujar: la creencia en la posibilidad de transformación social mediante la acción colectiva. Esa reafirmación que, contra el miedo y el escepticismo reinante en la época, realzaron los movimientos sociales, con los trabajadores desocupados a la cabeza, en la nueva etapa, y a partir de cierta propagación de luchas exitosas, vuelve a instalarse con más fuerza, especialmente en el mundo del trabajo asalariado.

Por otra parte, ha sido muy importante el *cambio en el posicionamiento del Estado* para con las organizaciones y las disputas de la clase trabajadora. Desde el Estado, vía el decreto de la reapertura de las negociaciones colectivas, se toleró y avaló el conflicto social (especialmente hasta 2007) retaceando el uso de la conciliación obligatoria y se promulgó la ley laboral que terminó con los contratos basura (Etchemendy, 2011). El aparato estatal en general y el ministerio de Trabajo, en particular, han propiciado una política de diálogo -materializada, como veíamos anteriormente, en el retorno de la negociación colectiva- que ha tendido a reubicar al aparato estatal en el lugar del "árbitro", recomponiendo la idea de un conflicto social con tres partes (capital, trabajo, estado) en el cual la administración tiene la decisión final. En ese esquema, el sindicalismo es el actor privilegiado para la conducción de amplias franjas de las clases subalternas, en la medida en que pareciera más compatible con la gobernabilidad que otras expresiones menos articuladas de la protesta social (Campione, 2005).

Finalmente, merece destacarse la relevancia de la presencia de un factor generacional en las luchas populares. En términos generales, esta militancia joven ha cobrado un claro protagonismo, aportando como rasgos característicos de su militancia la legitimación de la acción directa como herramienta de lucha y ciertas prácticas vinculadas a una participación y dinámica más horizontalizada dentro de la organización. En las luchas sindicales en particular, esta presencia generacional, como *ethos* militante (Svampa, 2008), ha introducido demandas y prácticas innovadoras, logrando insertar algo de la lógica de los movimientos sociales en el registro sindical tradicional, que así lo renuevan.

5. Conclusión

A lo largo de este trabajo intentamos avanzar buscando establecer las características centrales y los cambios que se han dado en un espacio emblemático de segregación, permeado por profundos déficit en las condiciones materiales de existencia. Para observar de qué modo el crecimiento económico vislumbrado entre 2003 y 2013 se articuló en un barrio de la periferia del AMBA, se desarrolló una investigación en el barrio Nicole del partido de La Matanza. Los datos relevados permiten observar una mejora sustancial en las condiciones de vida de la población en términos relativos, lo cual se corrobora por la reducción de los niveles de pobreza e indigencia, como también en las tasas vinculadas al mercado de trabajo y las mejoras en las condiciones habitacionales. Estas mejoras fueron acompañadas y estimuladas por la principal organización territorial que opera en el barrio, recuperando prácticas y tradiciones de acción política atentas a las diversas demandas y reivindicaciones de la población. También la recuperación del trabajo permanente y de las relaciones salariales producidas en el marco de la acción política, combina al actor sindical y a las propias organizaciones territoriales, repolitizando así los espacios públicos.

Por otra parte, a pesar de la mejora de los indicadores de las condiciones de vida, se observa la debilidad de la integración al mercado laboral, corroborada por las formas frágiles de inserción ocupacional, en la medida en que la informalidad sigue dominando las relaciones del trabajo y adquiere un carácter prácticamente estructural. Se confirma, al mismo tiempo, la mayor incidencia de la precariedad laboral (inestabilidad, desocupación, informalidad) en los sectores tradicionalmente más vulnerables, como son las mujeres y los jóvenes.

Asimismo, se pudo observar que en términos comparativos, las mejoras desarrolladas en el barrio no han tenido la profundidad observada en la región metropolitana en su conjunto, como tampoco en el partido de La Matanza. Si bien estas mejoras han sido importantes, la segregación espacial no permite avanzar en los procesos de integración, resaltando así el rol preponderante del espacio en el proceso de reproducción social. Es por ello que para que los cambios reflejaos por los datos empíricos tiendan a consolidarse se requiere un conjunto de medidas que permitan sostener en el tiempo las mejoras analizadas, y poder así revertir los condicionantes estructurales a los que está sometida esta población, prototípica de la periferia urbana del área metropolitana.

Para abordar los desafíos pendientes creemos que se deben contemplar en términos políticos tres elementos cuya articulación permitiría consolidar los

procesos iniciados en 2003, tributarios a su vez de las grandes movilizaciones de 2001-2002. En primera instancia, difícilmente se podrá aspirar a mejoras sustantivas en el mercado del trabajo sin un **crecimiento de la economía**. Aquí se abre el debate sobre qué tipo de **modelo de desarrollo** podría garantizar otra década con resultados positivos en el PBI; en qué medida la matriz productiva requiere romper la concentración en manos de grandes grupos económicos y multinacionales que en momentos críticos aplican todo su poder de gravitación sobre las principales variables económicas como puede observarse claramente en su gran capacidad en la determinación de los precios –lo cual supone la principal razón de la inflación- y su intervención en las muchas corridas financieras que sufrimos en los últimos diez años en manos del capital especulador. También la pregunta por el modelo de desarrollo invita a pensar cómo diversificar la producción para escapar del modelo exclusivamente extractivista o de producción de materias primas; en qué medida se podría recomponer una matriz para que fuera más diversificada y qué tipo de relación se entabla entre el modelo de desarrollo y las altas tasas de trabajo no registrado e informalidad en el mercado laboral.

En segundo lugar, el crecimiento económico debe acompañarse por una mayor **distribución de la riqueza**. Ello permitirá consolidar las mejoras en las condiciones de vida, llegar a sectores excluidos, aportar oportunidades de integración y desarrollo a poblaciones castigadas históricamente por las políticas de ajuste. La historia reciente ha demostrado que los países pueden crecer pero no necesariamente la riqueza producida se distribuye en forma más equitativa. Para ello resulta urgente una **reforma tributaria** que incluya en el tributo gran parte del sector financiero, como también su organización en términos progresivos, es decir que los sectores altos en recursos aporten en mayor proporción que los bajos. Por su parte, se requiere una **mayor intervención del Estado** en las cadenas de valor, detectando sectores con rentas extraordinarias; ampliar y mejorar los programas gubernamentales de sostenimiento de sectores más vulnerables, incentivos al consumo y a la producción.

Para que estos procesos puedan sostenerse en el tiempo y en vistas de las correlaciones de poder existentes –que son a su vez cambiantes en función de las configuraciones internas y externas al país- es imprescindible una **mayor participación popular** y **afianzar los canales democráticos de intervención** para disminuir los ámbitos de producción de lo público regidos por la discrecionalidad y la lógica de los privilegios. Esta mayor participación popular permitirá legitimar los procesos de transformación y simultáneamente aportar en su orientación con ideas, conocimiento de las particularidades territoriales y

los saberes acumulados en los procesos de lucha social; en definitiva, haciendo jugar al intelecto colectivo para opnerlo a la ideología tecnocrática legitimadora de los programas de ajuste. En este sentido, es importante señalar que la disputa es de orden material –condiciones de vida y reproducción- pero también simbólica –los marcos ideológicos desde los cuales interpretamos la realidad social y fundamentalmente definimos los límites de lo posible. De allí la necesidad de abrir nuevos ámbitos de debate que puedan sumarse a los ya existentes –por ejemplo DDHH e igualdad de género- llegando a campos como la justicia, el modo en que se da la construcción de los poderes locales y la cultura.

BIBLIOGRAFIA

AMÉNDOLA, G. (2000), *La ciudad postmoderna*, Celeste Ediciones, Madrid.

AUYERO, J (2001), La política de los pobres. Las prácticas clientelistas delperonismo, Cuadernos Argentinos Manantial, Bs. As.

BEAUD, S. y PIALOUX, M (1999), *Retour sur la condition ouvrière*. Paris: Fayard

BOURDIEU, P. (1999), "Efectos de lugar". En P. Bourdieu (Ed.), *La miseria del mundo* (pp. 119-124). Madrid: Fondo de Cultura Económica. Disponible en http://es.scribd.com/doc/87407773/Bourdieu-Efectos-de-Lugar

CAMPIONE, D. (2005), "Reaparición obrera a partir de 2004", XXV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), celebrado en Porto Alegre, Brasil, entre el 22 y 26 de agosto de 2005.

CICOLELLA, P. (2000), "Grandes inversiones y reestructuración metropolitana en Bs. As. Ciudad global o ciudad dual del siglo XXI", en Revista Electrónica *Mundo Urbano,* Nº 5, Buenos Aires.

CLICHEVSKY, N (2000), *Informalidad y segregación urbana en América Latina: Una aproximación.* CEPAL- SERIE medio ambiente y desarrollo, Octubre, Santiago de Chile.

COLECTIVO ROSA BONHEUR, (2013), "De una territorialidad obrera a una territorialidad popular. Reflexiones sobre la autonomía y las dependencias de las clases populares desde una etnografía urbana comparada", XI Congreso de Sociología española (FES),10 al 12 de Julio, Madrid.

DELFINI, M Y PICCHETTI, V. (2004), "De la fábrica al barrio y del barrio a las calles. Desempleo y construcción de identidades en los sectores desocupados del conurbano bonaerense", en Battistini, O (comp.), *El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria de los trabajadores.* Buenos Aires: Prometeo.

ESCOLAR, M (1996), "Fabricación de identidades y neo-corporativismo territorial" en Herzer, H. (Comp.): *Ciudad de Buenos Aires. Gobierno y descentralización,* C.E.AC. B.C, Bs. As.

KAZTMAN, R. (1999), "El vecindario también importa". En R. Kaztman (Ed.), *Activos y estructuras de oportunidades de estudios sobre las raíces de la vulnerabilidad social en Uruguay* (pp. 263- 307). Montevideo: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)/Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

KICILLOF, A. et. al (2010), "La macroeconomía después de la Convertibilidad", en CENDA: *La anatomía del nuevo patrón de crecimiento y la encrucijada actual. La economíaargentinaperíodo 2002-2010.* Buenos Aires: Ed. Atuel.

KIRSHENBLATT-GIMBLETT, B. (1996), "Ordinary People/Everyday Life", enGmelech, G. Y Zenner, W.: *Readings in Urban Anthropology*, UA: Waveland Press.

LOPEZ CALLE, P. (2013), "Industrialización y desindustrialización de Coslada: los efectos del proceso global de acumulación ampliada de capital en la semiperiferia europea", XI Congreso de Sociología española (FES),10 al 12 de Julio, Madrid

MERKLEN, D. (1991), Asentamientos en la Matanza. La terquedad de lo nuestro. Buenos Aires: Catálogos.

MOLINATTI, F (2013), "Segregación residencial e inserción laboral en la ciudad de Córdoba" en EURE, vol 39. N° 117 pp. 117-145

MTESS (2011), Informes especiales sobre conflictos laborales 2006- 2010, disponible en http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/conlab/informesa.asp

MTESS (2010), Informes especiales sobre conflictos laborales 2006- 2010, disponible en http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/negcol/informesa.asp

OBSERVATORIO DEL DERECHO SOCIAL (2010), *Conflictividad laboral y negociación colectiva. Informe anual 2009.* Publicación electrónica disponible en www.observatorio-juridico@cta.org.ar

OBSERVATORIO DEL DERECHO SOCIAL (2010), *Conflictividad laboral y negociación colectiva. Informe de coyuntura- segundo trimestre de 2010.* Publicación electrónica disponible en www.observatorio-juridico@cta.org.ar

PINAZO, G. (2011), "Comentarios sobre la relación entre el crecimiento y el empleo en la Argentina de los últimos años" En Revista *Trabajo y Sociedad,* UNSE. N° 18, Vol. XV.

SVAMPA, M. (2001), *Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados*. Bs. As.: Ed. Biblos.

ANEXO: RELEVAMIENTO Y METODOLOGÍA

La investigación está centrada en el Barrio Nicole[15], ubicado en el km 35 de la ruta 3 en la localidad de Virrey del Pino. En el año 2003 contaba con una población de 2000 personas, que se duplicó en 2013. El barrio se constituye en 1997 como consecuencia del notable déficit habitacional en el Partido de La Matanza. Las tierras donde está ubicado el barrio fueron cedidas a partir de la lucha de un colectivo de vecinos que constituyeron luego la asociación civil 26 de Julio y lograron establecer una política de ordenamiento urbano junto con la intervención del municipio.

Los relevamientos se llevaron adelante en los años 2003 y 2013. En 2003, se realizaron 2000 encuestas individuales y 596 de hogares, bajo el formato de censo en tanto que en 2013 una muestra probabilística por hogares abarcó 290 encuestas de hogares y 977 individuales. A partir de ello, se construyeron bases de datos que con posterioridad permitieron elaborar los indicadores referidos al mercado de trabajo y condiciones habitacionales.

Además, nos servimos de datos secundarios que analizan la evolución de la población y del mercado de trabajo en el partido de la Matanza; precisamente, estos datos se adelantan a la presentación de los provenientes de la muestra del barrio Nicole para poder contextualizar y comparar los análisis sobre el barrio.

Entre las características de la muestra del barrio Nicole se observan, en primer lugar un sostenimiento de una composición de género simétrica entre los años de referencia. Del total de las encuestas relevadas en 2013, 52% correspondían a mujeres, mientras que el 48% a hombres, manteniéndose de manera cercana a los valores de 2003 (50,5% mujeres y 49,5% hombres).

En términos etáreos, las muestras mantienen un predominio de población joven, siendo en 2013 la categoría de 25 a 49 años (32%), la de mayor preponderancia. Sin embargo, puede destacarse que la población de 0-14 años ha disminuido su participación, pasando de 50% población a 40%.

---

[15] El artículo se desarrolló en el marco de las actividades de investigación del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET) y de la carrera de Relaciones del trabajo (RT-UBA). En particular el relevamiento de 2013 fue posible gracias al apoyo y financiamiento del Programa UBANEX "*El barrio y los jóvenes: fortalecimiento de organizaciones sociales sobre condiciones de vida y empleo*". Fue ejecutado entre abril de 2013 y abril de 2014 y contó con la participación de los docentes Marcelo Delfini, Valentina Picchetti, Patricia Ventrici, Juan Montes Cató, Walter Bosisio y Ana Drolas.

Un elemento a destacar en torno de los ámbitos de residencia son los cambios en la composición de la población del barrio en relación con la residencia anterior. Se observa que en la actualidad el 40% de la población del barrio ha nacido en La Matanza, contra el 26% del año 2003. Ello se da precisamente en un marco con un promedio de residencia en el barrio del los jefes de hogar de 10,4 años y en el cual el 50% lleva 11 años viviendo allí. Asimismo, 70% de la población tuvo como residencia anterior el mismo municipio de La Matanza. Esta configuración permite establecer el predominio de los enclaves vinculados a la pobreza, lejos de la suposición, durante el modelo de sustitución de importaciones, de ámbitos de paso a situaciones de mejores condiciones de vida a partir de su inserción en el mundo del trabajo (Delfini y Picchetti, 2004).

Al considerar a los jefes de hogar, se puede destacar que entre ellos sólo 17% había alcanzado un nivel de estudios secundario o más en 2013. Entre los años de referencia se produjo un cambio en la composición de los jefes de hogares, cuya participación de mujeres ha crecido, representando 34% de los jefes de hogar en 2003 y 45% en 2013.

En torno al mercado de trabajo, se consideran centrales algunos datos, tales como tasa de actividad, empleo, desempleo, trabajo no registrado e informalidad. En tanto que, para el análisis de la infraestructura se presentan algunos datos básicos, que permiten comparar los años en que se llevaron adelante ambos trabajos de campo. Por su parte, esta dimensión es significativa también como componente de la medición de pobreza por NBI.

VI / POR UNA SOCIOLOGIA CONTRA LOS RIGORES DEL DESTINO[1]

José Ángel Calderón y Pablo López Calle

> "El destino se muestra cuando observamos una vida como estando condenada, en el fondo como habiendo sido condenada antes y después hecha culpable. Goethe resume las dos frases diciendo: vosotros hacéis que los pobres se transformen en culpables. El derecho no condena tanto al castigo como a la falta. Y el destino es el núcleo de la falta de todo lo que es viviente"
>
> W. Benjamin, *AngelusNovus*, p. 179

I.- Es preciso contextualizar estas notas cuando empezaron a redactarse en Madrid, en el momento de la toma de las plazas y las calles por miles de personas durante el Movimiento del 15 de mayo en 2011. En estas plazas observamos a las gentes hacer cosas, en las comisiones de limpieza, de orden, de comunicaciones, de programa –veinte personas muy jóvenes, un sábado a las dos de la madrugada, sentadas en círculo en la plaza de Jacinto Benavente, discutiendo sobre la ley electoral española. Estas personas anónimas, cuyas trayectorias heterogéneas habían sido categorizadas por nosotros mismos, los sociólogos, como "generación perdida", "mileuristas" o aún "ni-ni" (sin empleo, sin estudios), estaban de pronto siendo otra cosa. Los estudios sociales habían tratado de teorizar todo lo que hacía improbable una revuelta, una resistencia por parte de esta generación. Explicábamos el modo en que la restructuración del capitalismo español había logrado fragmentar, individualizar, desmovilizar, marginar a las fronteras de la relación salarial a toda esta generación (López Calle, 2008). Recorriendo las calles, participando

[1] Una versión preliminar en francés fue publicado en Francia en 2015: "Qu'est-ce que résister? Usages et enjeux d'une catégorie d'analyse sociologique", Lille, Presses Universitaires du Septentrion. Traducción Arturo Fernández. Corrección de estilo Calderón y López Calle

en cualquier forma de discusión colectiva, viviendo el misterio del vínculo social en plena recomposición, nosotros-sociólogos estábamos al tiempo participando de una cierta invalidación de nuestras propias explicaciones sociológicas. O quizás no, dado que si la hubiéramos previsto no habría sido una revolución.

II.- Desde esa posición como observadores-actores surge en nosotros la necesidad de pensar la resistencia no tanto por su contenido, por sus medios o por sus horizontes, sino por el desafío que la resistencia presenta a la sociología, por el modo en que la resistencia interpela al sociólogo atento a las relaciones de dominación. Vamos a presentar el problema en forma de paradoja. En primer lugar intentaremos mostrar lo que nos conduce a pensar que la resistencia es irrepresentable para la sociología. Al mismo tiempo consideramos que es urgente *hacer* resistencia, porque nos sentimos cada vez más comprometidos con la urgencia del cambio social, pero somos conscientes de que sólo *hablamos* de *hacer* resistencia. Y todavía en otra posición de *segundo orden* sabemos que *indicar* es también *aparecer,* que la acción está también hecha de discursos, y que inversamente la acción es comunicación: aparecer es indicar.

III.- La sociología es una ciencia que construye teorías sociales y representaciones para explicar la realidad social cuando el presente es estructuralmente estable. Lo cual es como decir que estructura ella misma el presente. Pues incluso, de manera contra-intuitiva, busca comprender los procesos de resistencia remitiendo las acciones observadas a las categorías que obtienen su sentido en esas mismas estructuras sociales estabilizadas. Desde este punto de vista también la relación entre realidad y representación es tautológica en momentos de cambio. El presente es inestable cuando carece de representación, y carece de representación cuando es estructuralmente inestable. La teoría social, la predicción, se transforman en incomprensibles porque, por definición, aquello que hace la diferencia entre lo estable y lo inestable es la posibilidad o la imposibilidad de nombrar los hechos a partir de un lenguaje codificado, el sociológico.

IV.- Como lo escribe Saussure (1945), las palabras deben tener necesariamente un sentido aun cuando ellas sean pronunciadas por primera vez, pero, por esa misma circunstancia, no pueden tenerlo. El problema del origen, del cambio radicalmente considerado, es irresoluble para la teoría social. La acción está siempre precedida por una forma de representación de sí, aun si esa representación estalla en pedazos cuando la acción está en marcha: por ejemplo, como señalaba el filósofo anarquista Agustín García Calvo en una de sus arengas vespertinas en Sol, el ¡no! que libera los pueblos,

puro significante, la indignación inicial que cede su lugar, en las calles, a las dinámicas de aprendizaje colectivo.

V.- Para exponer el primer enunciado de nuestro problema, nos apoyaremos a la vez en Hobbes y en Marx, para intentar demostrar cómo, en sus análisis respectivos de la relación entre individuo y orden social, la resistencia, que sin embargo se sitúa en el corazón de sus respectivos desarrollos, es al mismo tiempo encerrada en un punto ciego. Para el primero, quien propone centralmente el problema de la sociabilidad, porque el ser humano no puede vivir en sociedad sino alienando su libertad. Para el segundo, quien lleva a su forma más radical la inversión de la relación entre el individuo y lo social, porque el individuo se encuentra subsumido en las categorías sociales. Ese individuo, quien es adjetivado como burgués o proletario en la sociedad cosificada, no es nada más que aquello que socialmente lo determina. Para el primero, el principio de resistencia es invocado como constitutivo del nuevo orden pero reenviado a un momento imposible (irrepresentable para el sociólogo): el momento de la transferencia de soberanía. Para el segundo, la resistencia es convocada, intentaremos demostrarlo, de manera tautológica. Entonces, sea desde la perspectiva del individualismo metodológico que se sitúa en los fundamentos de la teoría política moderna, o sea en la perspectiva de las teorías de la emancipación de inspiración marxista, la resistencia, como categoría que conduce a aquello que es único y extraordinario, a un instante sin duración (Bachelard, 1994), a un punto límite entre dos estructuras, no puede en verdad ser explicada.

VI.- Hobbes consideraba que el individuo se sitúa en dos planos: uno es auto-referencial, ligado a su naturaleza; el otro reenvía a su relación con los individuos y es constitutivo de la sociabilidad. La transición de uno al otro plano, necesitaba de un orden para subsumir los conflictos entre los individuos. Para Hobbes, si el individuo adopta su naturaleza, él compromete la sociabilidad que es un hecho políticamente articulado y comprendido por la razón. Si el individuo quiere vivir en sociedad –de acuerdo con lo que es moralmente conveniente- no puede sino subordinarse al orden social que le es exterior. De ello se deriva una doble lectura: por una parte, seguir su moral –o renunciar a su deseo natural- implica necesariamente una coincidencia entre los planos individual y social, es decir una unión de forma y de contenido. Por otra parte, en esta configuración, el individuo es libre de aceptar las determinaciones de la ley moral o de no aceptarlas.

Sobre la cuestión de la libertad, Hobbes ha reflexionado ampliamente; en particular acerca de la libertad de ese individuo que ha alienado voluntariamente sus derechos y que ha sido reducido a la condición de vasallo.

Para Hobbes, entre el representante (el rey) y el representado (el sujeto sometido) existe una relación de dominación, pero, al mismo tiempo, no puede haber dominación, técnicamente, sin la aceptación del poder de parte de los dominados. Porque, el estado de dominación, al contrario de cualquier estado de violencia, está regido por el imperio de la ley. Lo que quiere decir, que el Rey no puede ser arbitrario, pues ello permite a los dominados calcular que sus acciones tendrán tales o cuales consecuencias.

Para Carl Schmitt en Hobbes la relación entre el poder y la aceptación del poder está equivocadamente resuelta: el desdoblamiento del individuo que hace el inglés entre un *foro externo* (el sujeto social) un *foro interno* (conciencia individual) reducto del derecho de resistencia, es el último intento fallido, aunque el más potente, de la teoría política moderna para fundamentar el principio de *legitimidad* (Schmitt, 2008).

Schmitt lleva, no obstante, hasta sus últimas consecuencias el pensamiento de Hobbes, eliminando la citada concesión. Para Schmitt la legitimidad de un Estado de dominación es el punto de partida, no el de llegada, es el dato: si existe un estado de dominación es porque este es justo. El costo que ello tiene es la distinción entre el momento en que pensamos lo político, la resistencia, que se relega a una suerte de teología política: el momento histórico imaginario en el cual los dominados habrían cedido, por su seguridad, el monopolio de la violencia legítima al Leviatán, o el momento, apolítico, aunque presente como imaginario, del *Estado de Excepción*. La lógica formal y auto-referencial de este argumento evacúa la cuestión de la acción porque si una revolución sacudiese las bases de un Estado de derecho, ello sucedería porque no se trataba de un verdadero Estado de derecho. Así, parafraseando a Hobbes, "en un estado de violencia, nada puede ser injusto y todos tienen derecho a todo".

Así el principio de la autodeterminación es central y, a la vez, imposible en la configuración del Estado de derecho. Es central porque, por su sola enunciación, nos reenvía al momento en el cual el Estado se funda por la fusión entre voluntad y determinación. El sujeto deliberativo de Hobbes elige aquello que le es necesario pero creando un "artificio natural" que lo identifica con su soberano, con el "hombre fuerte". El principio de autodeterminación es también imposible porque su proclamación pone en cuestión al Estado de derecho. Dicho de otra forma, si la legitimidad de las relaciones de dominación en las sociedades reguladas por el Estado de derecho está determinada, según un razonamiento tautológico, por la realidad de esas relaciones, entonces las relaciones reales de poder se resuelven en la capacidad de nombrar la realidad, es decir en el poder de legitimar ciertas relaciones de dominación.

La modernidad tiende así a articular, de manera contradictoria, dominación y resistencia al tiempo que se evacúa la cuestión de la acción. De ahora en más las relaciones de poder se resuelven por la capacidad desigual de los actores para designar qué relaciones son justas y/o injustas. Por ejemplo, ello se observa claramente en la teoría del valor trabajo: es una teoría de la justicia en la medida en que supone que el valor de las mercancías, su *adquisición*, se determina por el trabajo, el esfuerzo individual, en ellas incorporado, pero, en la medida en que el trabajo es también una mercancía, el valor de una mercancía se "aprecia" o "deprecia" en función de la capacidad de *atribuir* (esto es nombrar) una cantidad de trabajo, un valor, a cada mercancía.

VII.- En todas las constituciones liberales, el trabajo es la sola y única vía de integración y de participación del sujeto en la sociedad (Méda, 1998). El trabajo es la propiedad inalienable con la cual cada sujeto viene al mundo; es el libre ejercicio del trabajo quien atribuye a cada individuo el lugar que puede ocupar en la jerarquía social según su mérito. Desde este punto de vista el derecho del trabajo articula el derecho a la resistencia... y sus contradicciones. El derecho del trabajo, que concretiza los principios fundamentales de libertad individual y de igualdad, es al mismo tiempo una limitación de esos derechos porque su efecto es la diferenciación social y la desigualdad. Así, en la nueva sociedad, la igualdad de derechos supone más bien, de manera restrictiva, que todo el mundo tiene derecho a la diferencia, aquello que Rawls (2000) denomina justicia como equidad o igualdad en el procedimiento.

En este marco, el trabajo es dependencia. Estar en posesión de una fuerza de trabajo no es tener trabajo sino una capacidad para adquirir propiedades. Esta contradicción que se conoce después de Marx, genera dos fenómenos sociales estrechamente ligados a la formación del capital. Por una parte, la explotación o la extracción de plus-valía. Es mediante el contrato de trabajo que el asalariado, la clase obrera, cede su capacidad de trabajo, vendiéndola como una (falsa) mercancía. Por lo tanto, aquello de que dispone realmente el obrero es de su fuerza de trabajo, y no del valor que esa fuerza de trabajo puede desplegar cuando es utilizada por su comprador. Esta diferencia constituye el plusvalor. Por otra parte, ello produce también un efecto de alienación. La necesidad de vender la fuerza de trabajo al valor objetivamente fijado por las necesidades de subsistencia del obrero, aparece como el resultado de las preferencias de un ciudadano libre y consciente, quien decide, individualmente (por su participación inmanente y directa en el mercado) o colectivamente (por su participación trascendente en los diferente órganos de representación política, partidos, sindicatos, etc.), los límites espaciales y temporales, cuantitativos y cualitativos, en los cuales su fuerza de trabajo será

desplegada. El sujeto sometido a esas determinaciones se nos presenta como si él fuera su causante y como si esas determinaciones fueran el fruto de sus preferencias.

Claro, a la inversa del esquema de Hobbes, para quien el momento de la autodeterminación quedaba necesariamente en el campo de un pasado mítico que ya fue, las teorías que buscaron superar el sistema capitalista, de inspiración fundamentalmente marxista, señalan que la emancipación está por llegar, y pasa necesariamente por la neutralización de los dos fenómenos mencionados. En primer lugar, por la transformación de la "clase en sí" en "la clase para sí", tras la toma de consciencia, por la clase obrera, del carácter alienante del trabajo. En segundo lugar, por la apropiación material y colectiva de los medios de producción. El trabajador terminará entonces de estar sometido al reino de la necesidad y podrá percibir, bajo la forma del salario, todo el valor que creó con su trabajo.

VIII.- Ahora bien, estas dos teorías de la resistencia, formalmente antagónicas, adolecen de contradicciones que podríamos decir, tienen una estructura, o un origen, similar. Las contradicciones de ambas teorías están vinculadas a la problemática relación entre el autor (Hobbes o Marx) y sus propias teorías. En el primer caso, lo vimos, el *aparecer* de su obra niega su contenido, *indica* que es posible una conciencia, un foro interno, capaz de pensar trascendentemente al Leviatán, que es pura inmanencia. En el caso de Marx, igualmente, él mismo se presenta como un observador que, en un estado capitalista, está emancipado. Las teorías de la emancipación no consiguen dar solución de continuidad entre la toma de consciencia reificada y el momento en el cual "no es la consciencia de los hombres la que determina la realidad" sino que "la realidad social determina su consciencia" (Marx, 2007: 37). La paradoja de las teorías de la emancipación consiste en que la subjetividad crítica capaz de transformar la realidad social, estando determinada por esa misma realidad, no puede ser producida sino por la transformación de la misma realidad social. Entonces, ese momento de "clase para sí" y el otro de cambio de las estructuras sociales, constituyen una relación tautológica (o muy poco dialéctica), reenviándose el uno al otro: para que haya una toma de consciencia capaz de producir un cambio en la estructura social, es preciso un cambio simultáneo de la estructura social que la determina.

IX.- Siguiendo a Sánchez Ferlosio (2004), escritor y libre pensador español, todo fenómeno social puede ser representado según dos lógicas antagónicas: la lógica del orden del carácter y la lógica del orden del destino. Esas dos formas permiten comprender racionalmente las acciones pero reenviándolas hacia dos teorías antagónicas del hecho social. *Comprender*, o comprenderse,

implica encontrar las causas a las motivaciones de las acciones. La raíz etimológica de deseo es: de (negación); siderar (destino): alejarse del destino. No podemos comprender el deseo sino reenviándolo, por ejemplo, a una de construcción social ("la publicidad es una puerta de entrada del deseo" escribe el psicoanalista SergeTisseron). Al contrario, cuando *explicamos* una acción, presentamos las causas a partir de los motivos de los actores, situándolos en el orden del *carácter*. Por ejemplo, es así como opera el individualismo metodológico.

X.- Claro está que estos problemas no son sólo teóricos, sino también políticos, tienen consecuencias sociales en términos de que su enunciación en forma de teorías que representan la realidad social ejerce algún tipo de violencia sobre los sujetos observados. En ambos casos lo que, desde un punto de vista teórico, es simplemente un problema de coexistencia entre el autor y su obra, en un plano práctico acaba evidenciando una relación de poder entre autor y espectador (de nuevo aquí aparece la capacidad de nombrar el mundo como relación de poder). Veamos.

Considerar que nuestras acciones dan cuenta de lo que somos, que el Hombre es el producto de la Historia, implica suponer la incapacidad del sujeto sometido para transformar las estructuras sociales. Es lo que hacemos cuando comprendemos los motivos de las acciones relacionándolas con procesos de construcción social que las determinan (ideologías, religiones, dispositivos de sugestión, publicidad, discursos populistas...). La comprensión produce necesariamente teorías *inconsistentes*, pues se puede lógicamente cuestionar si el sujeto de la comprensión, el autor, no está determinado por el destino: "la facultad de comprender o la imposibilidad de comprender, dice muy sensatamente M. Mill, no puede ser considerada como un criterio de Verdad automático" (E. Allan Poe, 1848, en la traducción de Baudelaire).

Al contrario, hacernos responsables de nuestras acciones – yo soy lo que yo hago-, emanciparnos de nuestras "circunstancias" como lo dice Ortega y Gasset- nos introduce en la lógica perversa de la culpa, porque las consecuencias de nuestras acciones nos perseguirán. Por ejemplo, considerar que la alienación y la explotación pueden ser superadas por los sujetos alienados y explotados, supone, de una cierta manera, responsabilizarlos de su propia situación. Pues si partimos de la hipótesis de que tenemos una cierta capacidad de resistencia, o, como los clásicos de la teoría política moderna suponemos que todo sistema de dominación implica siempre un derecho a la resistencia, entonces debemos necesariamente imputar una forma de connivencia a los sujetos que no ejercen ese derecho; particularmente a la clase obrera, sujeto revolucionario que es culpable de su situación (por pérdida de

consciencia, corporativismo sindical, docilidad, estrategias individualistas, etc.). Según esta perspectiva, el sujeto se trasforma en culpable de la estructura social. Deja de ser posible hablar de sistema autoritario: es el sujeto que se impone a sí mismo las determinaciones por medio de lo social. Además, se puede también razonablemente dudar de si, cuando explicamos nuestras acciones en función de nuestras motivaciones –en un foro externo- decimos realmente lo que queremos o "lo que queremos decir" –en el foro interno-. Siempre se pueden atribuir unos motivos detrás de la atribución de tales o cuales motivos. La explicación es necesariamente *incompleta*.

XI.- De este modo, la dicotomía carácter/destino, no nos conduce tanto a un problema de orden material o histórico como a un problema del orden de la representación. Es decir, la elección de una u otra categoría para transformar en comprensible el mundo y nuestro lugar en el mundo, no depende tanto de la "verdadera" naturaleza de la acción como de la posición que asumimos en la acción de representarla.

XII.- Desde la posición del observador, del científico social, la representación va siempre detrás de la acción. La acción, como hemos dicho, es imprevisible, irrepresentable, para que sea acción realmente. Sin embargo, el científico social estructura la acción al representarla y, en cierto modo, la desactiva. Todo movimiento de resistencia puede ser reducido a no ser sino un producto de la Historia: las revoluciones que marcaron el siglo XX, el movimiento del 15M, el obrerismo italiano de los años setenta, el movimiento piquetero de la Argentina.. y también las formas de resistencia más creativas que se encuentran en los talleres y en los "call centers". Todo movimiento rebelde o contestatario puede ser subsumido y recuperado por el sistema; eso se sabe a partir de Panzieri (1964) con "la recuperación del viejo empirismo obrero"; igualmente es lo que muestran Boltanski y Chiapello, con "la recuperación de la crítica artística" (1999). El sistema se nutre entonces del conflicto social y de la crítica. Pero aquello que arrebata verdaderamente toda capacidad de potencia transformadora a la acción rebelde, es precisamente su reducción a la estructura por el observador social.

XIII.- Terminar este texto a la manera ortodoxa, defendiendo una forma de crítica más eficaz, apelando a una ciencia social más comprometida capaz de descubrir formas de resistencia desconocidas, de auténtica resistencia, sería lógicamente reproducir los problemas analizados hasta aquí. Pero tampoco sería lícito posicionarnos, a la manera de Bourdieu, por ejemplo, en una posición más atractiva, la del reconocimiento, al fin y al cabo, de que la ciencia social no puede sino limitarse a descubrir estructuras sociales, estructuras de dominación, y nada puede hacer con el fenómeno de la resistencia, ni

analizarlo, ni convocarlo: «La revolución se presenta como una revuelta pura y simple, y no hay ya lugar para los sociólogos, para los amantes de las reformas sociales o para los intelectuales que han elegido la profesión de pensar por el proletariado»[2]. Pues el construir unas u otras estructuras es ya una forma de resistencia, en tanto que niega las estructuras al nombrarlas, toda vez que implica que cualquier resistencia puede ser estructurada y que estas estructuras puedan ser nombradas –resistidas- por cualquiera.

Como mucho nos atrevemos a proponer una posición de alerta ante el concepto de resistencia, tomar consciencia de los límites de la representación y al mismo tiempo del poder de la representación. Apelando a esa risa filosófica de la que hablaba Foucault al final de las *palabras y las cosas*:

> "A todos aquellos que quieren hablar aún del hombre, de su reino o de su liberación, a todos aquellos que plantean aún preguntas sobre lo que es el hombre en su esencia, a todos aquellos que quieren partir de él para tener acceso a la verdad, a todos aquellos que en cambio conducen de nuevo todo conocimiento a las verdades del hombre mismo, a todos aquellos que no quieren formalizar sin antropologizar, que no quieren mitologizar sin desmitificar, que no quieren pensar sin pensar también que es el hombre el que piensa, a todas estas formas de reflexión torpes y desviadas no se puede oponer otra cosa que una risa filosófica -es decir, en cierta forma, silenciosa" (Foucault, 1989: 375).

Por ejemplo, prevenirnos de aquéllos científicos sociales que pretendan transformarse en vanguardia tratando de tutelar los procesos de transformación; o advertir de las potenciales penetraciones y las previsibles limitaciones que, en cada momento y caso concreto supone apelar a la resistencia de los dominados. En otros casos, contribuir, sí, a la explicación de las acciones por las estructuras ayudando a establecer los lazos de complicidad entre los sujetos a ellas sometidos, para paliar el efecto culpabilizador de perspectivas como la del individualismo metodológico.

Este recurso hermenéutico implica asumir que ser hombres de *carácter*, o ser hombres de *destino*; que observar estructuras o cambios de estructura, implica asumir una posición respecto de la acción, en tanto que *actores* o en tanto que *observadores*, y por tanto una posición política. Podemos dejar un lugar libre para el reconocimiento del cambio en las estructuras de dominación y

[2] Walter Benjamin, en 1921, recoge esta cita de Sorel [*Reflexiòns sur la violence*. Va. edición, París, 1919, pág. 250], en *Para una crítica de la violencia*, [1921], Leviatán, Buenos Aires, 1995, p. 58.

reconocer al mismo tiempo que si éste no se produce es porque son estructuras de dominación. Reír ante los destellos del pesimismo estructurante de las ciencias sociales pero también de los ideólogos que como nosotros predicamos y confiamos con demasiada frecuencia en la radical potencialidad emancipatoria de los pueblos.

Bibliografía

BACHELARD, Gaston (1994), *L'intuition de l'instant*, Paris, Livres de Poche.

BERLIN, Isaiah (1988), *Cuatro ensayos sobre la libertad*, Madrid, Alianza Editorial

BILBAO, Andrés (2007), Individuo y orden social. La emergencia del individuo y la transición a la sociología, Madrid, Ediciones Sequitur

BOLTANSKI, Luc y Chiapello Eve (1999), *Le nouvel esprit du capitalisme*, Paris, Gallimard

CALDERON, José Angel y LOPEZ Calle Pablo (2009), "Recompositions du capitalisme espagnol et résistances des précaires" in Béroud S. et Bouffartigue P., *Quand le travail se précarise, quelles résistances collectives?* Paris, La Découverte

DERRIDA, Jacques (1979), *La lingüística de Rousseau*, Buenos Aires, Ediciones Caldén.

DILTHEY, Wilhelm (1986) *Crítica de la Razón Histórica*. Madrid, Península.

FOUCAULT, Michel (1989), *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. Madrid, Siglo XXI

HOBBES, Thomas (2001), *Leviatán o la materia, forma y poder de una república, eclesiástica y civil*, Madrid, Alianza editorial

IBÁÑEZ, Jesús (1994), *El regreso del sujeto: la investigación social de segundo orden*, Madrid, Siglo XXI

LÓPEZ CALLE, Pablo (2008): *La desmovilización general. Jóvenes, sindicatos y reorganización productiva*. Madrid, La Catarata.

SCHMITT, Carl (2008): *El Leviatán en la doctrina del Estado de Thomas Hobbes*, Madrid, Fontamara.

POST-SCRÍPTUM

En Argentina: de la heterodoxia a la ofensiva conservadora

> "Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar".
>
> *Para la Mano*, Arbolito, 2016

En diciembre de 2015 asumió la presidencia de la Argentina Mauricio Macri, quien había fundado el partido Propuesta Republicana (PRO) en el año 2000 con un perfil neoliberal "aggiornado" y que venía gobernando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2007. Es la primera vez desde 1910 que una fuerza política representativa de los grupos económicos más concentrados del país gana una elección nacional, aliada a partidos que, en principio, aceptaron buena parte de sus propuestas. Además el electorado dejó de lado la posibilidad de continuar un proyecto de desarrollo económico-social regulado por el Estado, volcado a construir un mercado sudamericano que lo hiciese viable y preocupado por reducir la desigualdad social y atento a la ampliación de derechos.

En realidad el PRO canalizó una tendencia ideológica y política que es antigua en la Argentina y se desarrolló en los años noventa. Cabe recordar que, en 2003 el presidente Néstor Kirchner asumió en mayo de ese año con menos de 25% de votos obtenidos en la primera vuelta de la elección presidencial, debido a la partición del justicialismo en tres fracciones y al apoyo, por parte de un sector social significativo (46% de los votantes) de programas neoliberales expresados por el ex-presidente Carlos Menem (peronista neoliberal) y al candidato de origen radical Ricardo López Murphy, quienes se inclinaban por la dolarización de la economía y su mayor integración con el área de libre comercio propuesta por Estados Unidos para intentar superar el marasmo económico suscitado por la crisis de 2001 y el ulterior default.Luego Menem boicoteó la segunda vuelta para restarle legitimidad al mandato presidencial de Kirchner: el 25 de mayo el discurso inaugural del flamante presidente electo daba comienzo a una difícil ruptura con más de una década de políticas económicas neo-liberales y se iniciaba un período de disputa del

poder social entre la coalición de poder y los grupos económicos más concentrados que hubieran preferido retornar al manejo ortodoxo de la economía.

Es cierto que el precio de las materias primas había aumentado considerablemente en 2002 pero el Estado nacional tenía graves problemas estructurales. Además, el nuevo jefe de Estado debía acumular autoridad política para restaurar, ante todo, el rol de la política y del propio Estado; para lo cual optó por arduos caminos de refundación jurídica, de ampliación de derechos sociales y políticos, de autonomía de la política exterior y de reorganización de los partidos políticos; fundamentalmente se optó por desarrollar la economía impulsando la ampliación del mercado interno, lo cual permitió reactivar la industria nacional, y negociar duramente una quita sustancial a la impagable deuda externa. En 2005, el gobierno kirchnerista se sumó a Brasil y Venezuela rechazando el tratado de Libre Comercio propuesto por Estados Unidos.

La ampliación de derechos significó un logro de los gobiernos kirchneristas; por ejemplo, se restauró una parte del derecho laboral, restringido en los ciclos neo-liberales, lo cual significó un cierto fortalecimiento sindical; el Estado recuperó el sistema jubilatorio que había sido privatizado y se lo amplió a personas que no habían aportado y se creó la política de ingreso mínimo universal, asistiendo a una parte de los sectores marginalizados.

Concluido el ciclo de precios muy favorables para las materias primas el conflicto social se agravó en todos los países que intentaron continuar redistribuyendo riqueza en contra de las recetas económicas ortodoxas.En el caso de nuestro país la mayor parte de los logros sociales de la acción kirchnerista dirigidos a conseguir una sociedad más justa, han pasado a estar en peligro después del triunfo del PRO y su heterogénea coalición Cambiemos. En pocos meses se están dando significativos pasos para restaurar un funcionamiento económico próximo al modelo neo-liberal, volcando el sistema productivo a la economía globalizada y limitando derechos sociales, incluidos los avances en materia de relaciones laborales.

Lo mismo está sucediendo en otros países de América del Sur, con la bendición de la diplomacia de Estados Unidos; el caso de Brasil es decisivo por su rol central en la región; su incierto destino seguramente condicionará el de nuestro país.

Como en épocas desconocidas para las jóvenes generaciones, desde 2008 se fomentó el odio y el desprecio a los gobernantes kirchneristas, acusados por sus negociados, por su incapacidad o por su "autoritarismo", lo cual se

combinó con un discurso anti-político. Para ello se utilizaron comunicadores sociales de buena llegada a la audiencia televisiva y radial y a sueldo del principal grupo mediático *Clarín*; de la misma forma se usó a jueces, cooptados por una mezcla diversa de convicciones y de dinero, para iniciar juicios contra la corrupción supuesta o real de quienes afectaron los intereses más concentrados. De manera parecida habían sido derrocados los dirigentes populares Hipólito Irigoyen (1930) y Juan Perón (1955), atacados por el poder económico y/o la Iglesia Católica y vituperados o ignorados por parte de la intelectualidad, extranjerizante y caprichosa. No es fácil de comprender ese odio social de los "ricos" dirigido contra gobiernos y gobernantes que no se rindieron a las presiones sin límites de los grupos de presión económicos pero, fundamentalmente, se hicieron reformas moderadas e indispensables para fortalecer la sociedad y el Estado. Si no se analizan causas culturales y hasta raciales no se puede explicar la condena al reformismo argentino (y latinoamericano) del siglo pasado y del presente. El resultado es que dichos gobiernos no pudieron alcanzar acuerdos sociales que legitimaran dichas reformas, lo cual concluyó una y otra vez en el rechazo frontal de los que dominan la nación y en nuevas formas de resistencias sociales.

Por su parte, creemos que este libro que concluye aquí anticipa la existencia en la Argentina de un complejo entramado social subalterno que no se va a encandilar frente a la nueva propuesta neoliberal.

En Francia: de la contestación a la democracia

El movimiento contra la ley sobre el trabajo se ha venido transformando en Francia en un desafío generalizado dirigido a las instituciones políticas. Sólo faltó que estallara el escándalo de los papeles de Panamá para que la duplicidad de las élites económicas y políticas provocase un verdadero crac del descrédito de la palabra pública y de la democracia.

Esta ley El Khomry, del nombre de la ministra del gobierno socialista que la impulsa, merece ser analizada en un marco más amplio, es decir en una dinámica que empieza allá por los años noventa y trata de hacer del derecho laboral una materia de negociación. El objetivo es incitar la creación de empleos mediante la reducción de los costos laborales, aumentando la flexibilización de los empleos. Así, el derecho laboral deviene una herramienta para las políticas de empleo, el último instrumento de estas políticas para ajustar la masa salarial a la actividad de las empresas, organizando la movilidad de los trabajadores de un empleo a otro. Que esta reforma, cuya continuidad

con las reformas precedentes aplicadas desde los noventa, sea aplicada por un gobierno socialista que ganó las elecciones con un programa contra la finanza internacional, da cuenta de la desaparición de la socialdemocracia europea como proyecto político alternativo, fagocitada como ha sido por el neoliberalismo y las fuerzas conservadoras.

La vida de los pueblos es como la vida amorosa de los individuos. Hay momentos de bajo voltaje en los que la vida parece ensombrecerse e incluso podemos sentirnos amenazados. Sin embargo, hay momentos de alto voltaje, que los cínicos llaman irracionales. Momentos que no aportan soluciones concretas pero que abren el campo de los posibles. Las revoluciones son como ese "*coup de foudre*", ese flechazo, ese apasionamiento repentino, una pura ilusión que transforma de manera profunda nuestras percepciones, nuestra relación con el tiempo y con el espacio.

Desde 1995 Francia ha registrado formas de cuestionamiento a las contrarreformas sociales que han venido aplicando los gobiernos de izquierda y derecha. Algunas de estas movilizaciones sociales fueron un éxito –por cuanto consiguieron parar dichas contrarreformas: por ejemplo, en 1995 se anuló el plan Juppé, en 2003 se derogó la ley que creaba el CPE –una suerte de contrato único para jóvenes con reducción de derechos. Otros cuestionamientos fracasaron: la lucha contra la reforma de las pensiones en 2010, la lucha contra la reforma de la universidad y de los hospitales públicos en 2009. Un momento paradigmático de este ciclo de luchas y de contestación política es la campaña del No a la constitución europea, en 2005, aunque como es sabido, el gobierno hizo votar dicha constitución por vía parlamentaria, y ahí se terminó el problema: en la negación de la voluntad popular.

La contestación política ha tenido esta limitación en Francia: la ausencia de proyecto político alternativo. Por ello el movimiento #NuitDebout ha resultado tan interesante, en el contexto político actual. De repente el ciudadano, que había desaparecido de estas campañas electorales sometidas a una forma de estupidez narrativa que nos hace escoger a un individuo como si fuera una marca, vuelve a aparecer en un movimiento de simpatía pervertida. El ciudadano ha vuelto a la política, entendida como momento de intensa discusión. Y esto es lo que ha estado pasando en las plazas del Hexágono desde el 31 de marzo pasado: la gente ha estado redescubriendo la democracia como pasión y como forma de conocimiento del mundo y de sí mismo.

¿Qué desvela el movimiento?

Hay algo muy curioso, y es que no hay nada más difícil de discernir, definir o incluso nombrar que una reunión sin líder y sin programa, un agolpamiento de gente que se alimenta a sí mismo y que genera sus propios rumores a partir de sus acercamientos, sus conexiones, sus encuentros, por efecto de la curiosidad, la seducción y la simpatía. Decía Deleuze que la simpatía no es nada, es un cuerpo a cuerpo. Así que los medios de comunicación estaban perdidos sobre lo que pasaba en République y en las otras plazas de Francia. ¿Es una movilización? ¿Quién es el líder? ¿Cuáles son las reivindicaciones? En realidad, République no ha sido sino potencia, un movimiento que se ha bastado a sí mismo en lo que anuncia y pronuncia: una separación radical entre la asamblea de ciudadanos y el estado.

Un día Valls, el primer ministro, vino al teatro Dejazet, en la misma plaza, a agitar el fantasma salafista islamista radical en las periferias metropolitanas. Ese día los debates en la plaza fueron seguidos por una audiencia récord de 80.000 internautas, y hasta 380.000 según distintas mediciones pasaron en algún momento por la plaza. ¿No será que la madurez política está cambiando de bando? Tenemos de un lado la casta política francesa, con su lógica de supervivencia, y de otro lado los electores, hoy sedientos de debate, de discusión y de democracia, y que han venido a saciarse en la liturgia de las plazas.

Los grupos pequeños se forman a ras de tierra, en círculos, más o menos regulares. Si te quedas de pie no puedes escuchar nada. Hay que sentarse para atrapar las palabras que se intercambian. Es un espacio sorprendente por la inmensidad de la plaza y a la vez tierno porque la palabra está protegida. Nadie grita, todos murmuran. Y no para de hablarse de la manera de hablar. De quién toma la palabra, de la representatividad. Se giran las manos según los códigos de todos. Y todo el mundo parece inscribirse en el tiempo de un instante. La fiesta de la democracia como conmemoración litúrgica del reencuentro, del milagro del vínculo social en recomposición, eso es lo que hemos visto en las plazas.

¿Y tras #NuitDebout? ¿Ahora qué?

Toda la energía ciudadana desplegada en las plazas francesas durante más de dos meses se ha venido agotando, aunque numerosos lazos interpersonales se hayan activado. Por ejemplo, sólo en París, más de ochenta comisiones siguen hoy activas. Sí es cierto que los sindicatos han tomado el relevo de la movilización, y han venido dosificando las huelgas en sectores estratégicos para plantear un pulso al gobierno en un conflicto que aún puede durar varias semanas, y cuyo objetivo es la retirada de la ley El Khomry.

El problema sigue siendo el de la acumulación política: ¿y ahora qué hacemos? Los sondeos, un año antes de las elecciones presidenciales, dan a las dos formaciones de derecha y de extrema derecha una ventaja inalcanzable para las formaciones de izquierda. El sistema electoral francés hace que el probable *sorpasso* del Partido Socialista por el Partido de Izquierda (Parti de Gauche), formación alineada con postulados keynesianistas en lo económico y radical-democráticos en lo social, no vaya a servir para gran cosa.

Hoy la mayoría social se encuentra alejada de los postulados de una izquierda tradicional anquilosada en gramáticas que parecen superadas. Un sector de la misma izquierda ha criticado al movimiento #NuitDebout su carácter "ciudadanista", al no querer situarse en el eje de la disputa izquierda-derecha, sino trascenderlo. ¿La radicalidad política se encuentra en los postulados de salida: "somos anticapitalistas"? ¿O no debe al contrario buscarse en cualquier cosa que haga que las posiciones de los dominados avancen con relación a las posiciones de los dominantes? Aunque eso signifique tratar de buscar puntos de consenso que puedan ser compartidos por una mayoría social pero que no sean totalmente radicales desde el punto de vista teórico. Cuando en España millones de personas salieron a las calles, en mayo de 2011, lo hicieron para defender una serie de derechos contra un poder corrupto y contra la dominación de la finanza. Es decir, al principio se trataba de gramáticas de conservación, en nada revolucionarias. Y el hecho de que las reivindicaciones fueran compartidas por mucha gente produjo que una cierta transversalidad tomara cuerpo, arrastrando a la acción política a muchas personas que hasta entonces habías huido de la política. Por decirlo con Gramsci, el "sentido común de época" fue completamente zarandeado.

El movimiento #NuitDebout ha desvelado un espacio político enorme, entre las políticas austericidas y el repliegue identitario representado por el Frente Nacional. Un espacio político que podría construirse a partir de una resignificación de la participación política pero que aún hay que dotar de contenidos nuevos. Esto podrá hacerse con o sin la izquierda tradicional, pero cada vez parece más urgente ponerse en la tarea. La proyección de Podemos en España muestra el camino para Francia y para el continente.

Esta publicación se enmarca en un largo proceso de colaboración entre los equipos de investigación del Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSE-CNRS) radicado en la Université de Lille 1 y del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET). El objetivo manifiesto del intercambio fue investigar y reflexionar de manera colectiva sobre las formas que asume la resistencia en el marco del capitalismo contemporáneo, observando las rearticulaciones operadas en las organizaciones sindicales, sociales y políticas en la Argentina y Francia. Si bien los marcos socio-económicos de ambos países son diferentes, en particular por el lugar que ocupan en la división internacional del trabajo y por su ubicación en relación con núcleo central del capitalismo o de su periferia, existen procesos colectivos y en particular experiencias reivindicativas que los emparentan y que nos permiten desarrollar reflexiones que pueden ir más allá de las particularidades nacionales. Esos procesos están vinculados con la ofensiva capitalista sobre las conquistas de los trabajadores y los derechos sociales, las contradicciones que generan los flujos y reflujos políticos y la subjetivación expresada en culturas de resistencia, de conflicto y de organización. En este campo de abordaje, el texto que aquí presentamos es heterogéneo en el registro de reflexión, en algunos casos de corte netamente teórico, en otros empírico e incluso histórico. Precisamente la riqueza del libro, además de constituir un primer ejercicio de condensación colectiva, es el de observar cómo algunos de los procesos que venimos analizando están imbricados en tendencias más amplias, más allá de las particularidades sectoriales o territoriales. Nos preguntamos: cuál es la relación entre las diversas luchas que se vienen desarrollando en diversas latitudes, cómo comprenderlas en una escala de análisis que vincule lo micro y lo macro y simultáneamente que las asocie a una reflexión teórica apoyada en las experiencias empíricas.

ISBN 978-987-46124-1-0